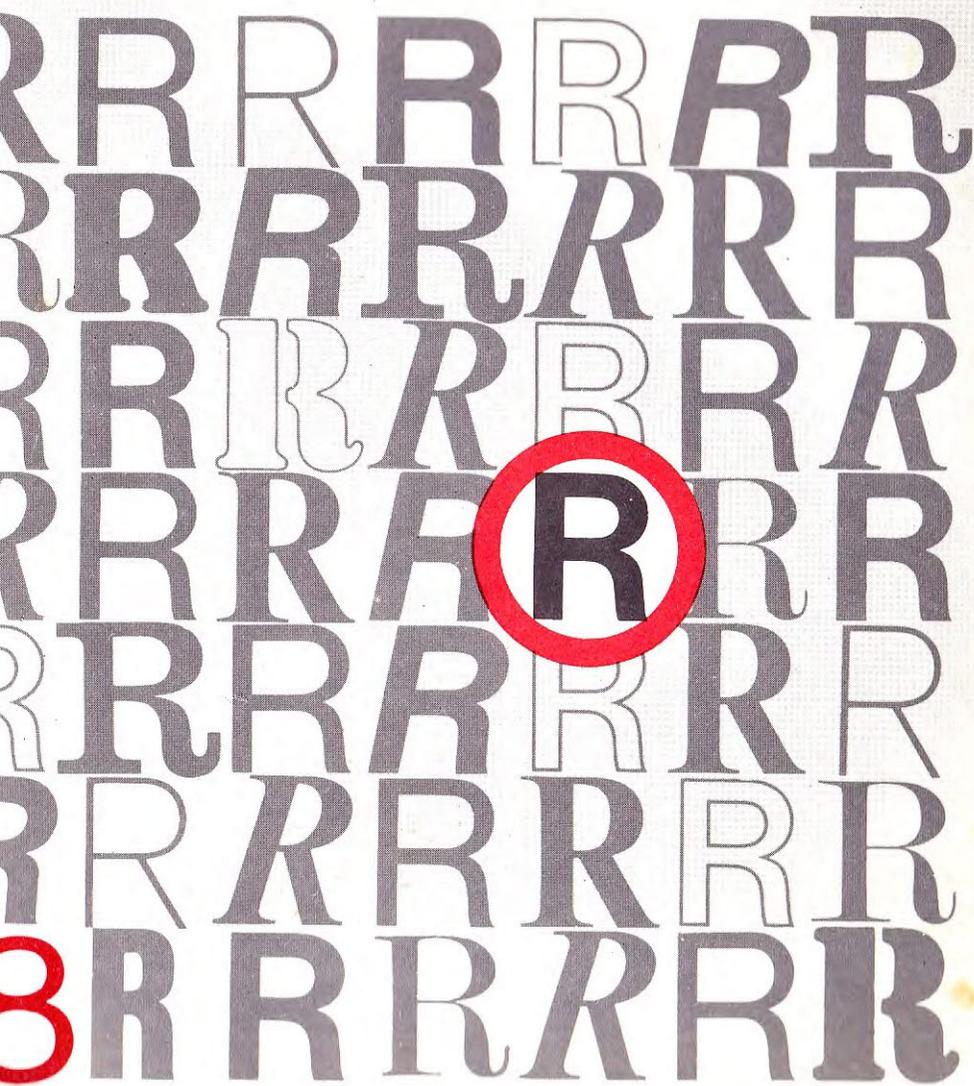


Resistencia chilena



mapu obrero y campesino



*Resistencia
chilena*

*comisión exterior
N°18-sep.- nov.- 78*

SUMARIO

EDITORIAL	
– Carta de Jaime Gazmuri a Fidel Castro con ocasión del XX Aniversario de la Revolución Cubana	3
– La incapacidad de las dictaduras chilena y argentina para asegurar la paz en el Cono Sur. <i>Declaración de la Comisión Exterior del Mapu Obrero y Campesino</i>	7
ANALISIS	
– Abrir camino a la democracia con un Programa Popular <i>Jaime Gazmuri</i>	10
– Crisis política, institucionalidad y perspectivas del movimiento democrático <i>José Miguel Insulza</i>	18
– Carta Abierta del Mapu Obrero y Campesino a los miembros del Grupo de Estudios Constitucionales	35
INTERNACIONAL	
– Nicaragua: un pueblo que avanza hacia su liberación <i>Rodrigo Andrade</i>	48
PARTIDO	
– Redoblar al esfuerzo unitario por la Democracia y la Paz <i>Declaración de la CEX</i>	62
– Las exigencias políticas del momento y la construcción del Partido <i>Fernando Martínez</i>	66
– Actividad Partidaria	73
SOLIDARIDAD	
– La liberación de Chile: una tarea que no cesa para los pueblos del mundo <i>Horacio Silva</i>	76

EDITORIAL

CARTA DE JAIME GAZMURI A FIDEL CASTRO CON OCASION DEL XX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION CUBANA

Compañero
Fidel Castro Ruz
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba
Presente

Querido Compañero:

Con ocasión del XX Aniversario de la Revolución, hago llegar a Ud. y, por su intermedio, al Partido, al Gobierno y al pueblo de Cuba, los saludos del Comité Central y de todos los militantes del Partido Mapu Obrero y Campesino de Chile.

Hace veinte años culminaba una gesta heroica cuyo principal protagonista había sido el pueblo de Cuba, sus obreros, sus campesinos, sus intelectuales, su Ejército Rebelde, que lucharon contra la dictadura de Batista hasta derrocarla. Se iniciaba, al mismo tiempo, un proceso de transformaciones revolucionarias profundas que, con el paso de los años, haría de Cuba el primer país socialista de América. Nadie en nuestro continente, ni en el mundo, puede ignorar las enormes dificultades que Cuba debió enfrentar en ese camino: a las naturales provenientes de su condición de país pobre y subdesarrollado se unieron las creadas por la agresión imperialista, que comenzó inmediatamente después del triunfo de la Revolución y de la que fueron cómplices sumisos muchos gobiernos de América Latina. El hostigamiento, el sabotaje, la amenaza de los primeros meses dieron luego lugar a la invasión y, fracasada ésta, al bloqueo que pretendía asfixiar económicamente a Cuba y aislarla de los demás pueblos del continente.

A pesar de todo, Cuba es hoy una realidad socialista sólida y floreciente. Ello fue posible en primer lugar, gracias al heroísmo del propio pueblo cubano, que nunca se dejó amedrentar ni perdió la fe en su capacidad de lucha y sacrificio. En segundo lugar, es producto de la justa dirección de su vanguardia, de su Partido Comunista y de su principal dirigente, que han sabido conducir el proceso basados en la unidad, en el esfuerzo colectivo y en los principios del marxismo leninismo, mante-

niendo la pureza de sus objetivos en las circunstancias más difíciles. Ha sido posible finalmente, gracias a la solidaridad internacional y, principalmente, al apoyo permanente de la Unión Soviética y los países de la comunidad socialista. La construcción de Cuba socialista es, pues, un ejemplo de lo que el esfuerzo de un pueblo, una justa conducción de su vanguardia y una amplia solidaridad internacional de las fuerzas antiimperialistas son capaces de lograr, en las condiciones más adversas.

Cuba demostró, como se ha dicho tantas veces, que era posible, en América Latina, enfrentar al imperialismo y sus aliados nacionales y derrotarlo, para sacar un país de su dependencia y darle posibilidades de un desarrollo libre y soberano. Pero no es esta la única enseñanza que, en todos estos años, hemos sacado de la experiencia cubana. De ella aprendimos también a valorar la importancia de combinar los objetivos democráticos y socialistas para forjar la unidad de las capas y clases que combatían la dictadura; aprendimos asimismo que para triunfar es preciso buscar formas de lucha que unan las condiciones objetivas del momento con la experiencia que el pueblo ha acumulado en tantas batallas anteriores. Ni las reivindicaciones democráticas del 26 de Julio ni las formas de lucha que utilizó eran desconocidas o ajenas al pueblo de Cuba. Coincidían, por el contrario, plenamente con lo que había sido su lucha desde antes de la primera independencia.

Del proceso cubano en todos estos años hemos recibido también el ejemplo de la unidad; tanto de la unidad de todo el pueblo como de sus vanguardias. Sin duda el movimiento revolucionario cubano al triunfar la revolución no era homogéneo y contenía en su seno muchas tendencias. Fácil era la tentación de la lucha fraccional, como ha sido la experiencia de tantos países de nuestro continente. La creación de las Organizaciones Revolucionarias Integradas primero, del Partido Único de la Revolución Socialista luego, y del Partido Comunista de Cuba finalmente, son el resumen de un proceso unitario conducido sin sectarismo por los dirigentes de la Revolución Cubana y por Ud., que permitió que todo el esfuerzo creador de los revolucionarios se concentrara para garantizar que la lucha de los cubanos alcanzara la victoria. Sin ese Partido que Uds. han construido en estos años el camino pudo ser diverso. Su existencia y condición es ejemplo para el movimiento revolucionario latinoamericano.

Paralelamente, es ejemplar en Cuba la unidad y movilización del pueblo a través de sus organizaciones. Quiénes han tenido la oportunidad de conocer el proceso cubano de cerca pueden dar testimonio de un socialismo de masas, en que la participación popular ha estado presente de modo gigantesco desde el comienzo y se ha ido estructurando a lo largo de todos estos años hasta configurar los órganos del Poder Popular que hoy gobiernan el país.

Por último, Cuba nos ha dado el ejemplo de su internacionalismo. Desde el primer momento ha hecho suya la causa de los revolucionarios de América Latina y el mundo. Tal vez sea esa la causa del mayor odio imperialista hacia ella. Si la revolución cubana no hubiera salido nunca de las fronteras de Cuba, para llevar su

solidaridad por toda América Latina, no hubiera llegado a Vietnam, Angola, Etiopía, y tantos otros lugares de la tierra, tal vez los imperialistas hubieran estado más tranquilos ante ella. Pero ello no era posible, ni pensable siquiera, en un Partido y un pueblo que no sólo predicaban, sino practican activamente sus principios. En nuestro caso, podemos dar testimonio de la solidaridad militante de Cuba con todo el movimiento popular chileno, antes, durante y después del Gobierno de la Unidad Popular. Ese respaldo compromete para siempre la gratitud de todo el pueblo de Chile.

En los años que siguieron al triunfo de la Revolución Cubana, el movimiento de masas y la lucha revolucionaria de América Latina adquirieron una nueva dimensión. La cuestión de la independencia nacional y la posibilidad de llevar adelante procesos de transformación social profunda aparecía ahora ante las masas como una realidad concreta. De allí la incorporación de grandes contingentes a la lucha revolucionaria. Como nunca antes, campesinos, obreros, intelectuales, personas de la más diversa procedencia ideológica abrazaron la causa de la libertad y la justicia, con la voluntad de convertirse en protagonistas de su propia historia. De allí que la década del sesenta haya sido de las más convulsionadas y ricas de la historia de América Latina. Casi no hubo país del continente en que no se vivieran procesos de movilización, que en muchos casos culminaron en la formación de gobiernos progresistas que, en mayor o menor medida, perseguían objetivos de independencia y justicia. El Gobierno de Torres en Bolivia, el de Velasco en Perú, el de Cámpora y el de Perón en sus inicios en Argentina, el de la Unidad Popular en Chile, y tantos otros, se inscriben sin duda en esa perspectiva.

El peligro de este proceso no escapó a los ojos del imperialismo. Fracasados los intentos de aislar a Cuba y de imponer experiencias reformistas que en la mayoría de los casos sólo consiguieron incrementar la movilización popular, los Estados Unidos echan mano al recurso del fascismo, para lo cual cuentan con el pleno apoyo de las burguesías monopólicas nacionales y de ejércitos que ellos mismos han formado y dirigido.

Pero la experiencia fascista no está destinada a ser duradera en Chile ni en América Latina. Al cabo de pocos años los propios imperialistas comienzan a dar por fracasada la experiencia y buscan nuevos caminos de salida, mientras el movimiento popular y democrático gana terreno después de los años de reflujo y represión. El tiempo dirá si las lecciones de nuestras derrotas han sido asimiladas. Si somos capaces ahora, como antes Cuba, de encontrar caminos propios de lucha y unidad del pueblo y enfrentar por medios adecuados a la realidad de cada país, la tarea común de liberarnos del imperialismo, la explotación y el subdesarrollo. La fase de lucha que se va abriendo en América Latina debe contar con el aporte unido de todo el movimiento revolucionario. Contará también, de ello estamos ciertos, con el apoyo generoso e internacionalista de la Revolución Cubana.

Querido Compañero Fidel:

Pertenece a una generación de revolucionarios latinoamericanos que se for-

jó al calor de la lucha de estos años, abierta a partir de la Revolución Cubana. De ella hemos recibido ejemplo y apoyo durante toda nuestra existencia como Partido. Hoy cuando todo el pueblo de Chile lucha de modo cada vez más abierto por terminar con la noche del fascismo, nuestros militantes se esfuerzan por aportar al máximo en la unidad y en el combate. Sabemos interpretarlos a todos ellos cuando decimos que nuestros ideales son idénticos a los que movieron a los revolucionarios del Moncada, del Granma, de la Sierra Maestra y de Girón. En su nombre saludamos con cariño de hermanos a los compañeros que, veinte años atrás, hicieron realidad nuestros comunes sueños de justicia y crearon para todos una patria libre, el primer territorio libre en América.

Lo saluda fraternalmente,

Jaime Gazmuri
Secretario General
Partido Mapu Obrero y Campesino

Diciembre de 1978.

▲ ▲ ▲

LA INCAPACIDAD DE LAS DICTADURAS CHILENA Y ARGENTINA PARA ASEGURAR LA PAZ EN EL CONO SUR

En los últimos meses las relaciones entre Chile y Argentina han sufrido un creciente deterioro como producto de la incapacidad de las dictaduras militares para resolver adecuadamente los conflictos limítrofes entre nuestros países. En el mes de Noviembre ese deterioro alcanzó peligrosos grados de tensión. El estancamiento y la dilatación de las tratativas, sumado a la absoluta marginación de nuestros pueblos del terreno de las negociaciones, hacen que esa tensión, lejos de disminuir se mantenga como un elemento de fondo que puede aflorar en cualquier momento con consecuencias imprevisibles.

Los diferendos limítrofes entre nuestros países tienen una larga historia que se remonta a los inicios del período de la independencia, cuando las nuevas naciones que emergían en América acordaron el "uti possidetis", que significaba mantener las fronteras existentes al momento de entrar en la vida independiente. Sin embargo, la tradición de negociación diplomática acumulada durante todo el siglo pasado se evaluó como insuficiente para asegurar una paz estable entre nuestros pueblos. Fue así como continuando con el espíritu del Tratado de 1881 se firmó a principios de este siglo (1902) un Tratado General de Arbitraje, instrumento mediante el cual ambas partes se comprometían a someter a juicio arbitral las controversias que surgieran.

A partir de entonces, la mediación, el arbitraje y la negociación diplomática habían mostrado su plena eficacia como instrumentos concretos en la solución de múltiples conflictos. La puesta en práctica del Tratado General, en lo que respecta al actual problema, fue tarea de los gobiernos y cancillerías a lo largo de este siglo, negociaciones que culminaron durante la presidencia de Frei y finalmente de Allende. Durante el Gobierno Popular, el Canciller Almeyda consiguió que Argentina aceptara el procedimiento de arbitraje establecido en los tratados vigentes, con lo cual ambos gobiernos entregaron los medios de información sobre el problema a la consideración de la Corona Británica.

¿Por qué entonces hoy día nos encontramos en situación tan precaria?

Los gobiernos dictatoriales chileno y argentino, en parte debido a sus problemas internos, tienden a magnificar los conflictos limítrofes y por la vía de un nacionalismo estrecho darles un carácter de autoafirmación nacional. Es un campo preciso en que se enfrentan a espaldas de los pueblos, la agresividad del gobierno argentino y los afanes expansionistas de Pinochet, teorizados desde tiempo atrás en su concepción geopolítica. De allí la incapacidad de ambos regímenes para llegar a un acuerdo y representar los deseos de paz de los pueblos que aplastan.

En estas condiciones la salida de Pinochet es un elemento que ayudaría a crear un clima diferente en Chile y significaría una distensión de la situación, generándose así un mejor campo para el acuerdo pacífico y justo.

La salida de Pinochet por otro lado, permitiría que se expresaron con más fuerza las presiones de paz de los sectores democráticos de ambas naciones. Pese a todo, éstos han logrado movilizarse en favor de la paz como lo expresan declaraciones conjuntas sindicales, juveniles, de los partidos políticos, los intelectuales y las Iglesias. Es importante también destacar aquí la gran ayuda que han significado los llamados a la paz de S.S. Juan Pablo II y el Secretario General de las Naciones Unidas.

Es claro que Chile está hoy día radicalmente debilitado para defender sus legítimos derechos por la vía de la negociación diplomática. Por el aislamiento casi completo a que la Junta Militar ha llevado a nuestra Patria, la dictadura argentina ha podido desconocer sin más el laudo arbitral emitido sobre el problema en disputa por S. M. Británica en Mayo del año recién pasado.

La actitud zigzagueante de Pinochet con posterioridad a la publicación del fallo, agravó esta situación. Es así como la Junta Militar chilena tomó inicialmente una posición de carácter expansionista, dando calidad de innegociable a un paquete de problemas de diverso carácter, para luego entrar en negociaciones que incluían lo ya arbitrado. La fijación unilateral, por parte de la Junta Militar chilena de las líneas de base recta, y las interpretaciones que de esa decisión se derivan sobre la proyección atlántica de la soberanía chilena en el extremo austral, pusieron en un pie de igualdad dos materias diversas. Por un lado, el cumplimiento del laudo arbitral que es favorable a nuestro país, y que define nuestra indiscutible soberanía sobre las Islas Picton, Lenox y Nueva y el área correspondiente del Canal de Beagle, y por otro lado la proyección atlántica de esas tierras. Este último problema plantea una situación de derechos concurrentes de ambas naciones y es por lo tanto materia de negociación y acuerdo diplomático entre las partes.

Esta forma de encarar el problema debilitó nuestra impecable posición jurídica e histórica que venía gestándose desde tiempo atrás y en especial a partir de los últimos gobiernos democráticos antes del golpe de estado de 1973.

En las actuales condiciones del diferendo y ante la potencialidad de enfrentamiento, afirmamos lo siguiente:

1) Rechazamos de plano el enfrentamiento armado entre nuestros pueblos como forma de resolver el diferendo. Ambos gobiernos deben abandonar explícitamente el recurso a las armas, para dar así cumplimiento tanto a los compromisos contraídos históricamente, de solución pacífica de conflictos, como para responder a la real voluntad de paz de ambas naciones.

2) Exigimos el cumplimiento por parte del gobierno argentino del Laudo arbitral de Mayo de 1977, en lo cual está comprometida una larga historia de negociaciones pacíficas entre ambos estados y compromisos formales de acatamiento de la resolución arbitral.

3) Planteamos la necesidad de distinguir entre el cumplimiento del Laudo por un lado, y la fijación de la proyección atlántica del territorio chileno en la zona

austral, por otro.

Esta última es una materia en que concurren derechos de ambas naciones y por lo tanto exigimos negociar diplomáticamente ese aspecto sin consideraciones chauvinistas ni expansionistas de ninguna especie. De persistir diferencias, debe recurrirse a los mecanismos de mediación ya acordados bilateralmente. En este problema es necesario tener presente que un acuerdo entre ambas naciones es esencial para salvaguardar la explotación de las riquezas potenciales de la plataforma continental, frente a los intereses transnacionales. Igualmente en lo que respecta a la Antártica es imprescindible desarrollar una posición unitaria frente a la próxima re-discusión del tratado Antártico. Llegar a una acuerdo en estas materias solo traerá beneficios para ambas naciones.

4) Ponemos en el centro de la lucha por parte de las fuerzas democráticas de ambos países, la perspectiva del desarme en el Cono Sur, en el contexto de América Latina. La guerra y el armamentismo son finalmente negocios e intereses del imperialismo y de las fuerzas reaccionarias del continente.

Es sin embargo importante tener presente que la única vía para una paz estable y duradera en el Cono Sur para inevitablemente por el término de los regímenes fascistas, únicos responsables, al final, de los peligros de enfrentamiento a los que hoy estamos abocados.

Sólo la democracia y la real participación del pueblo en el gobierno de cada país podrá garantizar una paz estable entre nuestras naciones.

Comisión Exterior
Partido Mapu Obrero-Campesino
Chile

Diciembre, 1978

▲ ▲ ▲



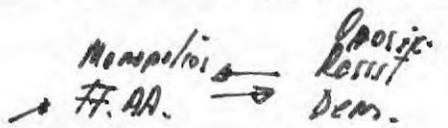
ABRIR CAMINO A LA DEMOCRACIA CON UN PROGRAMA POPULAR

Jaime Gazmuri

La ilegalización de las Federaciones Sindicales independientes más combativas ha sido sin duda un serio golpe a la clase obrera, y más allá de ella a todo el movimiento democrático chileno. Sería un error subvalorar su magnitud. Esta medida ha sido tomada en el contexto de una serie de iniciativas del régimen que pretenden avanzar en su proceso de institucionalización: elecciones sindicales dirigidas en las empresas industriales, creación de una estructura estudiantil en la Universidad de Chile etc. El carácter antidemocrático del proyecto institucional de Pinochet está fuera de discusión, así como la resistencia que encuentra en cada vez más amplios sectores del país; incluyendo una parte de los protagonistas en primera persona del golpe del 73 y de la gestión posterior del gobierno. Los acontecimientos que culminaron en la destitución de Leigh y el generalato de la Fach son suficientemente elocuentes al respecto. O el más reciente debut público, aunque tímido, de una supuesta derecha civilizada y con pretensiones liberales. La naturaleza y los objetivos que se persiguen con la institucionalización son analizadas con amplitud en este mismo número de Resistencia Chilena.

LA ACTUAL BATALLA POLITICA

Aquí queremos solamente subrayar el desconcierto que han producido en el seno de la oposición democrática, incluyendo ciertamente al movimiento popular, estas nuevas demostraciones de fuerza y la capacidad de iniciativa política que demuestra el régimen a más de 5 años de su instalación. Recalamos este elemento de iniciativa, porque los intentos de eliminar las expresiones más agudas de la oposición abierta de masas que se han ido desarrollando y que se han expresado con fuerza en 1978, no corresponden solamente a medidas desesperadas, a reacciones defensivas de un régimen que haya perdido el control del país. Sin duda el desarrollo creciente de la oposición abierta le crea serios problemas a la dictadura, y en perspectiva amenaza decididamente su estabilidad y su propia supervivencia. El régimen debe defen-



proyecto político coherente

derse de su expansión y lo hace recurriendo a la represión. Pero lo que no debe perderse de vista es que el gobierno de Pinochet y las fuerzas que lo respaldan, tienen un diseño global, un proyecto social, político y económico que han venido imponiendo al país, y que, a pesar de los grandes obstáculos que encuentran en su camino, no han renunciado a llevarlo a cabo hasta el final. Y que, además, aún cuentan con fuerzas suficientes como para no renunciar a la empresa.

enf. limit

Este es el trasfondo de la lucha que se desarrolla en el país en esta fase. Si queremos evitar que las fuerzas democráticas, y en particular el movimiento popular, oscilen entre el triunfalismo de quienes piensan que el régimen está al borde del derribo producto de las graves contradicciones que enfrenta y el pesimismo que tiende a cundir ante cada una de sus manifestaciones de estabilidad, se nos impone la necesidad del mayor rigor y objetividad en el análisis de la verdadera relación de fuerzas entre el fascismo y la oposición democrática. Si como UP. aspiramos, además, a tener un rol fundamental en la dirección de la resistencia antifascista estamos obligados a tener una visión objetiva de nuestra propia situación, tanto de los avances como de las debilidades aún no resueltas.

verdadera relación de Fuerzas Fascismo -> Opos. Dem.

LA DEBILIDAD Y LA FUERZA DEL FASCISMO

La situación de la Junta Militar, a nuestro juicio, no puede ser bien entendida sino en función de la consideración simultánea de la profunda crisis política que la aqueja y de la fuerza aún considerable de que dispone.

Lo que hemos denominado crisis política de la dictadura encuentra su raíz, en la incapacidad radical del régimen para conseguir un consenso mínimo sobre su modelo económico-social, lo que le obliga a recurrir a la fuerza física y a la represión como elementos permanentes de dominio y estabilidad. Es el carácter minoritario y antinacional de la burguesía monopólica indisolublemente ligada a las empresas transnacionales, así como su hegemonía absoluta en el régimen fascista, el factor que explica finalmente dicha incapacidad. De allí el carácter estructural de las insuficiencias y problemas políticos del fascismo chileno, tanto en el terreno interno como internacional. Sólo así es posible explicarse sus sucesivas crisis, la pérdida progresiva de sus bases de apoyo, la precariedad esencial de sus empeños "institucionalizadores" y estabilizadores.

capacidad de consenso y utilización de la FF. AA. proyecto antinacional deficit. estruct.

Sin embargo, si lo anterior corresponde a la realidad, ¿Cómo se explica la permanencia de la dictadura, su capacidad para resolver — hasta ahora — a su favor las crisis, la mantención de su control sobre el país e incluso su propósito actual de formalizar y estabilizar una institucionalidad estatal totalitaria?. Ha ocurrido en exceso en estos años que el afán legítimo por destacar las debilidades estructurales del proyecto fascista, ha oscurecido el análisis de sus factores de fuerza. Se suele perder de vista la profundidad de la contrarrevolución que el país ha vivido en estos cinco años.

El poder de la dictadura no sólo se funda en la supresión de toda la institucio-

nalidad y las conquistas democráticas que nuestro pueblo alcanzó en largos años de lucha. Se ha producido una profunda transformación en la estructura económica y social del país. El sentido final de la llamada economía social de mercado ha sido producir una reconcentración radical del poder económico en manos de unos cuantos grupos monopólicos y la reubicación de la economía nacional en el marco del capitalismo contemporáneo, subordinándola a los destinos y los intereses del gran capital transnacional. Este proceso ha culminado en lo fundamental. El peso que en la economía, y por tanto en el conjunto de la sociedad, han adquirido los grupos monopólicos nacionales y las transnacionales es cualitativamente superior al que han tenido prácticamente desde los años 20 en adelante. Las fracciones burguesas no monopólicas han sido no sólo subordinadas políticamente, sino también despojadas económicamente. La clase obrera, además de la sobreexplotación y la represión, ha sufrido una disminución cuantitativa considerable, lo que sin duda la debilita. Es preciso agregar que en el terreno ideológico y cultural esta tan radical transformación ha tenido también efectos regresivos. Sin duda el grado de consenso que se ha obtenido sobre los supuestos del "modelo" económico de la dictadura abarca a sectores que no han sido directamente beneficiados con su aplicación. La debilidad de la oposición de la burguesía no monopólica a la política en curso demuestra claramente esta afirmación.

Por otra parte, la alianza política entre el capital monopólico y financiero y la cúspide militar ha resultado ser mucho más sólida de lo previsible. En el caso chileno sorprende la facilidad y la docilidad con que las FFAA - y particularmente el Ejército - han seguido la política de una sola fracción burguesa. Por añadidura de la menos nacional. Este sometimiento no ha sido fácil - la sucesión de purgas y conflictos castrenses lo evidencia - pero con todo, en cada uno de los momentos en que se ha cuestionado - aunque sea tímidamente - el modelo, el predominio de Pinochet como encarnación personal de dicha alianza ha sido indiscutible. Con todo lo personal que reviste el poder de Pinochet, especialmente en las FFAA, éste sería imposible sin un mínimo de apoyo a su política al interior de esas instituciones, al menos en la oficialidad.

Por último, es indispensable considerar el apoyo internacional de que goza el régimen. Este factor de fuerza suele ser empañado por el inmenso repudio político que existe en el mundo - incluso en los países capitalistas desarrollados - respecto del gobierno de Pinochet. Pero el apoyo de los círculos financieros y empresariales, sigue siendo irrestricto. Ello es natural. Son pocos los países que, como Chile, sólo en un año pagan como amortizaciones e intereses de la deuda externa algo más de 800 millones de dólares, tal como ocurrió en 1978. A su vez el flujo de créditos privados al país es impresionante. Sólo este año el propio gobierno los calcula en alrededor de 1.600 millones de dólares.

Es sobre la base de estas realidades que se asienta el poder de la Junta Militar y nadie puede llamarse a engaño respecto de los poderosos apoyos con que cuenta.

LOS OBJETIVOS TACTICOS DE LA OPOSICION DEMOCRATICA

Sin embargo durante este último período se va creando en el país una situación donde el anhelo por recuperar las libertades y reconstruir un ordenamiento político democrático se hace evidente y ampliamente mayoritario. Todas las clases y capas golpeadas por la política del fascismo entienden cada vez con mayor claridad que sólo en la democracia podrán hacer valer sus derechos e intereses. Crecientemente las reivindicaciones inmediatas planteadas por los más diversos sectores se ligan a la lucha por las libertades. En este terreno no cabe duda que el movimiento sindical abierto ha tenido un rol de vanguardia.

Sin embargo el crecimiento indiscutible de las fuerzas que ven en la democracia la única forma de enfrentar y resolver la crisis nacional y el desarrollo de formas abiertas y masivas de lucha contra la política del régimen, no adquieren aún la magnitud suficiente para hacerlo tambalear y finalmente derribarlo. Para ello nos parece indispensable avanzar en tres direcciones simultáneas.

La primera es aumentar significativamente la movilización de masas antifascista; articular la lucha de los diversos sectores afectados por la política de la dictadura; politizar el movimiento social democrático en el sentido de ligar las iniciativas parciales al objetivo de terminar con el régimen, abrir paso a un Gobierno Democrático Provisional y construir una democracia renovada. La crisis política estructural del fascismo sólo se convertirá en una crisis de estabilidad en el contexto de un cuestionamiento generalizado de su capacidad para gobernar el país y de un nivel de movilización social que arrebatase a la dictadura el control de la situación. Toda nuestra línea de masas debe orientarse en función de este objetivo táctico fundamental. Mientras éste no se alcance, la dictadura, a pesar de sus debilidades, no verá severamente amenazada su estabilidad.

Pero no basta activar, ampliar, generalizar y politizar el movimiento de masas antifascista para terminar con la dictadura. La segunda gran exigencia de la oposición democrática es quebrar la estrecha alianza constituida entre el mando de las FFAA y la burguesía monopólica. El desarrollo de una oposición de orientación democrática al interior de las FFAA a la política de Pinochet es el otro requisito esencial para derribar al régimen actual. En este proceso la influencia de las fuerzas políticas y de masas democráticas puede - y debe - ser decisivo. Contribuye a ello, la creación de un clima de cuestionamiento y enfrentamiento político y social creciente al gobierno, sin perjuicio de lo cual la articulación de la oposición civil y militar, debe ser objeto de una política y una actividad práctica específica.

Por último, a estas alturas, la necesidad de la unidad política de la oposición democrática tras un proyecto común es insoslayable. Tanto porque la creación de los prerequisites para la caída de la dictadura no los puede lograr por sí solo ninguno de los dos componentes políticos fundamentales del frente opositor - la DC y la UP -; como porque las tareas de democratizar la sociedad y gobernar la crisis nacional que dejará el fascismo como herencia requieren ineludiblemente un alto consenso de las fuerzas sociales y políticas básicas del país.

Hacia el libre de la oposición Dem.
 proceso decisivo de
 20 años de la mov.

condiciones maduras para la U.P. o para un acuerdo

los probl. U.P.

Nuestra posición general a este respecto la hemos planteado reiteradamente en estos años, tanto en Chile como en el exterior. Esta vez, solo queremos agregar que el desarrollo de la oposición ha llegado a un punto en el que están maduras las condiciones para un acuerdo político, al menos, sobre dos cuestiones: la concertación y coordinación en los frentes de masas, en la perspectiva de impulsar una movilización democrática que por su magnitud amenace la estabilidad y sobrevivencia de la Junta; y la definición común del nuevo ordenamiento institucional democrático. La formalización de estos acuerdos sobre materias en las que ya existe un grado apreciable de consenso, constituiría un avance significativo de la unidad antifascista, y permitiría que la discusión de las fuerzas democráticas sobre cuestiones tan decisivas para el futuro del país como el de las fórmulas políticas de reemplazo al Gobierno fascista y el programa económico de la democracia, se realicen en otro nivel.

Desde nuestro punto de vista la unidad de las fuerzas democráticas, con toda la importancia que tiene, no debe hacernos perder de vista la existencia de problemas serios en la Unidad Popular, cuyo enfrentamiento y solución es indispensable, si esta ha de jugar el papel que el país necesita en la lucha por la conquista de la democracia.

LOS PROBLEMAS DE UNA ALIANZA SIN PROGRAMA

Los problemas que plantea el desarrollo de la Unidad Popular como alianza estratégica de las fuerzas que hoy día luchan en Chile por la democracia y el socialismo no pueden ser entendidos sin referencia a su historia, a las peculiaridades de cada uno de sus componentes básicos, a la experiencia revolucionaria del gobierno del Presidente Allende, ni a las circunstancias particularmente adversas en que ha debido desarrollarse en estos cinco años de fascismo. Un análisis riguroso de estas cuestiones excede absolutamente los propósitos de estas líneas, sin perjuicio de que abordarla en el futuro nos parece una necesidad teórica y política de primer orden para el desarrollo del movimiento popular chileno. Aquí solo queremos llamar la atención sobre sus actuales insuficiencias en el terreno programático, por cuanto políticamente es indispensable — y a nuestro juicio posible — comenzar a superarlas a la brevedad.

los partidos U.P.

Mirados estos años con perspectiva, los partidos populares han logrado avances y éxitos en muchos aspectos notables. Este juicio no tiene en absoluto el carácter de una autoafirmación políticamente útil para quienes formamos parte de la coalición popular. Para fundamentarlo basta constatar que nuestros partidos han logrado, pese a todo, mantener su existencia y organización en el país, y además acrecentar sus vínculos con importantes sectores de masas. Nadie discute que de un tiempo a esta parte su actividad en Chile está en constante aumento, y que constituyen un factor determinante en la resistencia antifascista. Han vencido al fascismo en la gran batalla por su sobrevivencia. Han podido mantener, pese a la derrota sufrida y a las presiones tanto nacionales como internacionales por dividirlos, su unidad política esencial. En el terreno internacional han sido incansables animadores del movimiento de solidari-

dad, cuya importancia decisiva para erosionar el poder de la dictadura es incontestable. Han constituido el vehículo para vincular a la lucha por la democracia a miles de chilenos que viven en el exilio. Hoy día, para amigos y adversarios es un hecho que sin la presencia y participación de los partidos de izquierda no habrá democracia, paz, estabilidad ni progreso en Chile.

El balance anterior es bajo muchos puntos de vista satisfactorio. Sin embargo cuando la apreciación — a nuestro juicio justa — de que la U.P., a pesar de sus avances y de sus inmensas potencialidades, no está cumpliendo el papel de dirección a que aspira en la lucha por la democracia. Se advierte su escasa iniciativa política en el país, su aún insuficiente capacidad de movilización de masas en circunstancias de que las condiciones generales parecen mucho más favorables que en los años pasados, la precariedad de su funcionamiento orgánico unitario. Incluso han aparecido los primeros síntomas — aún germinalmente — de tendencias centrífugas en su interior. Lo anterior es particularmente serio en un período como el actual, en el que la cuestión de la alternativa al fascismo se convierte en un problema real; en el cual — aunque con muchas restricciones — se abre en el país una discusión sobre los problemas del futuro; y cuando es posible avanzar sustantivamente en la movilización social antifascista.

Sostenemos que uno de los factores que hoy día mayormente limita la capacidad de dirección y cohesión del movimiento popular es la ausencia de un proyecto político común que ofrecer al país para enfrentar y resolver la crisis nacional. Hoy día la U.P. es una alianza sin programa. No se trata de decir que carezca de objetivos comunes: terminar con la dictadura, abrir camino a una democracia renovada, buscar la más amplia convergencia democrática, aspirar al socialismo como solución de fondo a los problemas del país. Ellos están en la base de nuestra actual unidad. Sin embargo ya no bastan para enfrentar las complejas tareas políticas y de masas que se nos plantean actualmente.

La ausencia de una perspectiva general común, convierte a la política unitaria en la simple respuesta particular a los problemas coyunturales más importantes, e incluso desvaloriza la necesidad del trabajo conjunto en los distintos niveles y frentes, reforzando la tendencia de cada partido al trabajo práctico aislado. En suma contribuye a que la UP vaya — muchas veces — a la zaga de los acontecimientos, en vez de dirigirlos o provocarlos.

Hoy son las fuerzas democráticas de centro quienes tienden a asumir el liderazgo político y programático de la oposición. Es evidente que tienen mayores márgenes de acción que la izquierda y que aprovechan la regresión política que se ha producido en el conjunto de la sociedad. Pero no son éstas las únicas razones del peso de sus posiciones en el seno del movimiento democrático. Existe el hecho de que la U.P. no ha recogido la experiencia vivida por el país en estos últimos años en una proposición programática coherente y global. La propaganda reaccionaria de que la U.P. representa, sin más, la vuelta al pasado, la simple reiteración de una experiencia ya vivida, — y fracasada — encuentra en nuestras insuficiencias una cierta base de apoyo.

La eventual hegemonía de las fuerzas de centro en la oposición democrática no

el rol de la U.P. y la Dirección
los problemas
Alianza sin programa
Ausencia de perspectiva general
el partido
de la izquierda
y la U.P.

Sin nosotros UP
limitaciones de
clase ideol.

nos preocupa, simplemente, por un prurito de "competencia" política primaria. La cuestión de fondo es que las limitaciones de clase e ideológicas de su proyecto político no garantizan la recuperación democrática del país; de lograrla la hacen inestable, y dificultan la conquista de formas más avanzadas de organización social.

* Dos son, a nuestro juicio, las limitaciones mayores de tal proyecto. La primera es la ausencia de ligazón entre la lucha por las libertades y la democracia política y el objetivo de suprimir el poder de los monopolios y las transnacionales. La destrucción de la democracia en Chile es la consecuencia de la aplicación de un proyecto social y económico incompatible — en esencia — con ella. Por ello no es posible una democracia estable que no cuestione los fundamentos del proyecto social en el que se asienta la dictadura. No es casual que esta contradicción sea percibida agudamente por la burguesía monopólica en el poder. Todo su discurso de que apresurar una apertura democrática desembocaría en el caos se basa en esta percepción. Porque evidentemente un régimen político democrático es incompatible — al menos — con la forma actual de dominación burguesa e imperialista. La segunda limitación

Monop y transn.
C. sólido de centro.
de la P. de la U.

X estrechamente vinculada a la anterior — es la estrechez del frente político y social que se propone para enfrentar, y sobre todo para sustituir, al fascismo. Se trata, en síntesis — de excluir y/o subordinar al movimiento popular, en especial a la clase obrera y a las fuerzas políticas de orientación socialista. El planteamiento formal es obviamente más sutil — se rechaza sólo al socialismo "totalitario" y al PC como su supuesta expresión política — pero el propósito de fondo es inequívoco. Está lejos de nuestro pensamiento que estos rasgos de la política actual de las fuerzas de centro — y en particular de la D.C. — constituyan elementos inmutables, datos eternos.

Por el contrario, un desarrollo suficiente de la potencialidad de masas y del peso político del movimiento popular son capaces de generar una unidad de las fuerzas antifascistas sobre una base programática capaz efectivamente de democratizar a fondo la sociedad chilena y abrir camino a formas superiores de organización social. El problema es si como dirección política estamos o no en condiciones de desarrollar esas potencialidades e influencia.

En síntesis sostenemos que para que la clase obrera y las fuerzas populares que representamos como UP. asuman el papel protagónico que les corresponde en la lucha por la democracia, y para que esta abra camino al socialismo, es indispensable un salto en la calidad política de la alianza popular. Ello no es contradictorio en absoluto con la convergencia más amplia y sólida de todas las fuerzas democráticas sino, por el contrario, le servirá de estímulo. Partimos de la base de que sin una presencia activa y determinante de la clase obrera y los trabajadores no habrá democratización a fondo del Estado y la sociedad chilena, ni posibilidades de resolver los problemas económico-sociales del país. Así como de que la conquista de una democracia de nuevo tipo es el mejor camino para construir el socialismo. Estas afirmaciones, aparentemente tan obvias, necesitan una seria elaboración para ser convertidas en programa político, en real guía para la acción.

Conclu.

Sist. =
socialista

Desde el punto de vista de las tareas prácticas, todo lo anterior significa dar

una alta prioridad a la necesidad de dotar a la UP. — en el menor plazo posible — de un programa que señale el camino que proponemos para terminar con la dictadura; el tipo de gobierno de reemplazo al actual, así como sus tareas; los lineamientos básicos del nuevo ordenamiento institucional y económico democrático; nuestra concepción sobre la transformación socialista del país y los fundamentos de su política internacional.

El programa que la UP requiere proponer hoy día al país, no puede consistir en la mera actualización del aprobado hace casi 10 años y que fue la base política del triunfo de 1970 y de los 3 años del Gobierno Popular. Es preciso recoger las ricas enseñanzas de ese período y la reflexión habida en estos años en el seno de la izquierda sobre la experiencia revolucionaria del 70-73; y prestar particular atención a los profundos cambios que ha experimentado la sociedad chilena bajo el poder fascista. Sobre todas estas cuestiones no existe, ciertamente, unanimidad. Se trata, precisamente de elaborar el proyecto común de una coalición de partidos diversos entre si. La discusión programática permitirá afirmar nuestras coincidencias fundamentales, como perfilar con mayor nitidez los rasgos propios de cada uno, que están en la base de nuestra diversidad; elementos — ambos — básicos para que el movimiento obrero y popular desarrolle una unidad y cohesión real.

La formulación explícita de sus objetivos históricos y del camino que propone recorrer para alcanzarlos permitirá a la UP tanto orientar con mayor precisión al movimiento de masas, como ampliar su capacidad de diálogo y articulación con el conjunto de fuerzas democráticas, civiles y militares.

Dotar al movimiento popular de un Programa para Chile no resolverá — obviamente — todos sus problemas, ya que ellos no tienen que ver exclusivamente con sus insuficiencias en este plano, pero es hoy día un requisito indispensable para avanzar con solidez.

* * *

propuesta
los
comunes
part:
dict
nuevo mb.
que tipo
de dem.

CRISIS POLITICA, INSTITUCIONALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO DEMOCRATICO

José Miguel Insulza

“La acumulación de dificultades políticas que arrastra el Gobierno está poniendo a prueba la capacidad de resistencia de éste y del país”.

La frase parece sacada de uno de esos artículos que tanto aparecen en nuestras publicaciones y que pronostican la caída de la Junta fascista a muy corto plazo. Proviene en cambio de un comentario político semanal de El Mercurio (Semana Política 9 de Diciembre). La preocupación del vocero oficialista es sin duda justificada: el problema limítrofe, el caso Letelier, la crisis económica, los hallazgos de cadáveres, el voto en la Asamblea General de la ONU, la declaración de los Obispos de la Iglesia Católica, el crecimiento de la oposición democrática, la resolución de bloqueo de la ORIT, son sólo algunos de los problemas que la Junta debe enfrentar en estos días. Para hacerlo, cuenta con un apoyo ciudadano cada vez más ínfimo. El fracaso de la “magna concentración” citada por el propio Pinochet para protestar contra el bloqueo, y que no alcanzó a más de quince mil adherentes abúlicos, señala el peor momento de la dictadura desde el punto de vista de su aislamiento político.

Frente a esta clara debilidad, sin embargo, Pinochet demuestra que aún cuenta con algunos elementos de fuerza que jugar a su favor. La reciente ofensiva desencadenada contra el movimiento sindical, sus intentos por cerrar el caso de los desaparecidos y su ofensiva por sacar adelante su proyecto de institucionalización, son ejemplos que muestran el otro rostro de la situación: el de una dictadura que, aislada y todo, todavía tiene fuerza para tomar iniciativas políticas, basada en la unidad recientemente lograda en las Fuerzas Armadas y en el respaldo que aún le otorga la gran burguesía monopólica y financiera.

El tercer elemento que se une al aislamiento y la fuerza del fascismo, es el crecimiento y desarrollo de la oposición democrática, que a pesar de la represión se hace cada vez más pública y decidida y gana nueva fuerza. Todo lo cual configura una situación de crisis más acentuada, cuya salida se torna más inminente. Con lo cual no queremos decir que tenga un resultado positivo. Por el contrario, la novedad de estos meses es que el fascismo pone en juego toda su fuerza para resolver la crisis a su favor, para romper su aislamiento y crearse nuevas condiciones que le permitan afirmar su dominación. Que tenga o no éxito en ello dependerá grandemente de la capacidad de movilización, lucha y unidad que demuestren las fuerzas democráticas.

Aspecto central de la ofensiva fascista es, entre otros, su intento de institucionalizar la dictadura, por la vía no sólo de un proyecto de constitución fascista, sino de una serie de medidas destinadas a crear a nivel intermedio mejores bases de apoyo para su política. Es este aspecto concreto de la ofensiva de Pinochet el que exa-

minaremos en este trabajo, sin dejar por ello de hacer referencia a otros hechos que creemos ligados a una estrategia general de afianzamiento del régimen.

Que el tema institucional pasaría a primer plano era fácilmente previsible. Al fin y al cabo, estaba en la discusión pública desde hace muchos meses; era el propio Pinochet quien había fijado los plazos en que la Comisión Ortúzar debía elaborar y entregar su proyecto; el Gabinete Fernández había asumido como “gabinete de institucionalización” y, aunque absorbido en los primeros meses por otros problemas, era de esperar que tarde o temprano se dedicase a esa tarea.

No obstante, dada la situación política del régimen hace sólo algunos meses, era difícil suponer que sería capaz de enfrentar la institucionalización con unidad interna y, menos aún, que la fórmula por la que se optaría sería la de consolidar lo existente, con Pinochet a la cabeza. Ello no era nada claro, no porque la fórmula y el personaje no dieran plenas garantías desde el punto de vista de la gran burguesía y las transnacionales, sino precisamente porque su creciente desprestigio y falta de apoyo tendían a convertirlo en un riesgo para la propia dominación que había contribuido a establecer en el país.

De allí que, dentro de la gran burguesía, con apoyo de sectores del imperialismo y con voz en el mismo seno de la Junta, surgieran opiniones que llamaban con fuerza a una institucionalización diversa, a una mayor apertura democrática, sin perder de vista, claro está, la mantención de lo esencial del sistema. El conflicto Leigh-Pinochet, siendo en el fondo un conflicto de poder, se presenta formalmente como una discrepancia precisamente sobre el problema de la institucionalidad, con Leigh cuestionando de modo cada vez más abierto el statu-quo y buscando apoyo en sectores de la derecha civil y en las Fuerzas Armadas para un proyecto que, implícitamente, significaba el reemplazo de Pinochet.

La liquidación de Leigh significa para Pinochet la vía libre para lanzar su proyecto institucional. Al menos por el momento no parecen haber otras alternativas que se manejan a interior del bloque dominante. Por el contrario, los últimos hechos han dado una mayor sensación de unidad interna y es evidente que los que apoyan el régimen han puesto tras este propósito toda su fuerza. La ofensiva no sólo abarca el terreno propiamente institucional — el proyecto de Constitución — sino también una serie de otros planos, en los que se busca disputar la influencia de los sectores democráticos, para sacar al régimen de su aislamiento político.

El hecho de que tras el período de mayor agudización de su crisis política, el régimen fascista salga adelante con una ofensiva por consolidarse, ha hecho pensar a muchos que la crisis ha sido superada y que se entra a una etapa de nuevo reflujo. Claro está que los hechos se han encargado pronto de desmentir esta opinión. Después de la crisis de la FACH el país ha estado lejos de ser una taza de leche. Por el contrario, los últimos meses han vivido una eferescencia política incluso mayor, al oponerse las fuerzas democráticas a las pretensiones del régimen y al endurecimiento de la represión que las acompaña.

Ello porque la crisis de la dictadura no es un fenómeno interno, sin perjuicio

de las repercusiones que tiene dentro del bloque fascista. Es una crisis que se da al nivel global y cuya característica central es la contradicción entre un Estado crecientemente represivo y desligado de las mayorías y los procesos crecientes de apertura al diálogo y de consenso democrático que se producen en la sociedad. La dictadura tiene aún fuerza para reprimir estos procesos, pero no tiene alternativas políticas con que enfrentarlos y crearse un consenso mínimo que de estabilidad a su poder.

Esto lo comprende hoy muy bien el fascismo. De allí que lo que está detrás del proceso de institucionalización es precisamente el intento por superar las causas de fondo de la crisis y dar nueva estabilidad al régimen. La institucionalización no es, por lo tanto, sucesiva a la crisis, sino intento por superarla. De allí que la adecuada caracterización de esta crisis pueda darnos elementos valiosos para analizar el plan de institucionalización y la mejor forma de luchar contra el.

1.— ¿EN QUE CONSISTE LA CRISIS DE LA DICTADURA?

El carácter claramente reaccionario del golpe de Septiembre de 1973 y el hecho de que éste fuera llevado a la práctica por el conjunto de las Fuerzas Armadas, han conducido generalmente a privilegiar en el análisis del fascismo chileno estos dos elementos: la dictadura es, sin duda, el producto de la alianza entre la gran burguesía monopólica nacional y extranjera y las Fuerzas Armadas con mando fascista.

Esta afirmación, siendo justa en general, deja de lado, sin embargo, un aspecto esencial para explicar la caída de Allende y los primeros años de gobierno fascista. Además de los dos elementos anteriores, la dictadura tenía al comienzo apoyo de masas, respaldo político. El fascismo no era en Chile antes de Septiembre de 1973 un mero grupo de conspiradores: había conseguido movilizar tras su política, de modo objetivo, a un sector importante de la población, que incluía no sólo a los grupos burgueses y partidos de derecha, sino también a la mayoría de los sectores medios y partidos de centro e incluso a algunos sectores de trabajadores. En términos políticos, lo que el fascismo movió tras su estrategia (más allá incluso de las intenciones o la ingenuidad de determinados dirigentes) es el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, el PIR y la Democracia Radical, además de Patria y Libertad y otros grupos extremistas. Considerados en sus manifestaciones electorales, estos grupos tenían más del 50% del país.

Es claro que no todos los opositores a Allende estaban por el golpe, menos aún por un golpe con las características de este. Pero no es bueno engañarse piadosamente en este punto: la mayoría lo apoyó, lo aceptó o cerró los ojos ante el, esperando que se tratase de un hecho pasajero o culpando a la Unidad Popular de lo que había pasado.

En un país con el grado de participación política del nuestro, esto no es poco importante. Significa que el fascismo contaba al comienzo de su gobierno con organizaciones capaces de canalizar hacia ella apoyo de masas, de organizar el con-

senso en torno al nuevo régimen y brindarle respaldo político. Sumado esto a la fuerza de las armas y al apoyo imperialista y de los grandes monopolios, parecía una fórmula imbatible.

No obstante, el bloque formado en torno a la oposición al Gobierno Popular no estaba exento de contradicciones. En la medida en que los unía el deseo de detener y aplastar el proceso social y político puesto en marcha por Allende, y en que nuestra propia política no puso el acento en la búsqueda de alianzas con sectores de la oposición cuyo interés estaba, pese a todo, en la mantención de la democracia, esas contradicciones no adquirieron expresión antes de la caída de Allende. Pero una vez asumida la Junta y puestos en evidencia los intereses de clase específicos a los cuales respondía en lo fundamental, esas contradicciones debían necesariamente aflorar. Tres elementos hacían de hecho imposible que la política de la dictadura consiguiera mantener unido el bloque social y político que la llevó al poder:

a.— El carácter de clase de la dictadura. El golpe contra Allende es promovido, dirigido y financiado por los sectores más reaccionarios de la burguesía y el imperialismo. Se da para detener un proceso que amenaza abiertamente sus intereses y con el objetivo de reconstruir el sistema de dominación capitalista preexistente, sin los elementos democráticos que había insertado en él la lucha de los trabajadores en todo este siglo. En otras palabras, la burguesía monopólica pretende establecer a través de la dictadura una nueva dominación y para ello debe llevar a la práctica una política económica y social antagónica con los intereses, no sólo de los trabajadores, sino también con los sectores de pequeña y mediana burguesía y de burguesía nacional que contribuyeron a llevarla al poder. La aplicación irrestricta desde el comienzo de una política económica que persigue como objetivo central la reacumulación capitalista acelerada y la vinculación estrecha al sistema económico transnacional, debía necesariamente afectar los intereses de todos estos sectores. Por un periodo muchas de estas medidas pudieron ser presentadas como necesarias ante la grave crisis en, que según el fascismo, había sumido al país la Unidad Popular. Pero con el correr del tiempo, fue quedando meridianamente claro que los intereses económicos fundamentales que orientaban a la dictadura fascista eran antagónicos con los de muchos de los que la propiciaron. El amargo despertar de los Vilarín, los Cumsille, los Saez, por nombrar sólo los más connotados, ha sido suficientemente difundido como para ahorrar mayores comentarios.

b.— La ideología del fascismo militar. A pesar de lo anterior, era posible suponer que el fascismo tenía los elementos para organizar en torno a sí un apoyo de masas, capitalizando, sobre la base de sus organizaciones, lo que tenía al momento del golpe. No obstante, a diferencia de sus predecesores europeos, no es este un régimen fascista para el cual sea fundamental el respaldo de masas. Por el contrario, toda su acción se orientó desde el comienzo a la desmovilización y a la eliminación de toda actividad política. Junto con liquidar en pocos meses la organización de apoyo que antes existía, esta línea choca con una forma de expresión social ya muy arraigada en

la sociedad chilena, en que la participación activa en la política de partidos y en las organizaciones intermedias es un hecho permanente y la forma de canalizar las demandas políticas de la población.

La aversión del fascismo contra las formas intermedias de organización social, sean partidos políticos, sindicatos, organizaciones vecinales o cualesquiera otras, no destruye, sin embargo, este tipo de organizaciones. Pero las hace independientes del fascismo. En parte por la acción — como veremos más adelante — del movimiento democrático, pero también por el abandono de hecho por parte del fascismo de este terreno, al cabo de poco tiempo el régimen se encuentra enfrentado a la situación de que no sólo no ha conseguido eliminar los organismos intermedios, que siguen cumpliendo la función de agregación y formulación de demanda y opinión política, sino que además la mayoría de estos son independientes del régimen. La ideología de la no-participación, del apoliticismo, choca con la realidad del país y contribuye a aislar al fascismo militar.

c.— La relación entre el régimen autoritario y el modelo económico. Es un rasgo común de muchas dictaduras latinoamericanas que ellas nazcan bajo el signo de la provisoriedad, aunque luego hagan todo lo posible por quedarse definitivamente. La Junta chilena no engañó a nadie en este sentido: desde el primer momento señaló su intención de quedarse en el poder por un largo período, hasta crear un nuevo sistema, que impidiera que en Chile volvieran a generarse procesos sociales como el recién vivido. Pero si en esto Pinochet no engañó a nadie, más de alguien se engañó a sí mismo. Así, hubo muchos que creyeron, en particular la DC, que el gobierno militar no duraría mucho y que el poder pasaría a sus manos tras una breve transición.

Preciso es reconocer que había razones que abonaban esta tesis. El tipo de dictadura que se ha implantado en Chile era, hace cinco años, impensable en términos de la tradición democrática del país. Pocos soñaban que fuera posible suprimir por un largo período toda actividad democrática en Chile y crear un régimen absolutamente antagónico con lo que se había practicado y desarrollado en los últimos ciento cincuenta años.

Pero si la esperanza de un rápido retorno al pasado aparecía de sentido común, ella chocaba con la realidad del país y con los intereses en virtud de los cuales el golpe había sido dado. La realidad era que la dirección del bloque opositor a Allende estaba objetivamente en manos de los sectores más antidemocráticos de la sociedad chilena y de grupos extranjeros para los cuales la democracia en América Latina nunca ha tenido ningún valor. Y los intereses que pretendía impulsar el nuevo Gobierno exigían la imposición de un modelo político autoritario y represivo en extremo.

Todo modelo político supone implícitamente la existencia de un proyecto social que se quiere llevar a la práctica. En este caso el proyecto social de la gran burguesía es la restauración de un sistema capitalista con un alto grado de concentración monopólica y estrechamente vinculado al sistema capitalista internacional.

Para ello es preciso además echar atrás todas las conquistas democráticas logradas por los trabajadores, eliminar los derechos laborales, desarticular las formas políticas de expresión popular, en pocas palabras abrir camino a una forma económica y social de explotación que al mismo tiempo garantice la ausencia de toda respuesta válida de parte de los sectores afectados. Y ello debe hacerse en Chile, donde el grado de desarrollo y organización alcanzado por la clase obrera es el mayor de toda América Latina. No sirve en este caso, un modelo democrático tradicional, ni siquiera uno con fuertes restricciones. Por esto la burguesía chilena y el imperialismo echan mano a un modelo político ideológico por lo demás ya puesto en práctica en otros países del continente. El fascismo no es, como modelo político un accidente en la vida política del país. Es la consecuencia lógica de la toma del poder por la oligarquía y los grupos imperialistas. El modelo político fascista es la expresión de un proyecto social determinado, que ha sido puesto en práctica con extremo rigor en todos estos años de dictadura.

La aplicación del modelo económico y político de los grupos dominantes lleva necesariamente a la ruptura del bloque que dio origen a la dictadura militar. Al cabo de dos o tres años se hace evidente para los sectores medios, para la burguesía nacional no vinculada al imperialismo y para los partidos políticos de centro, que el gobierno de Pinochet es antagónico con sus intereses económicos y políticos. Pero ello no es suficiente para la explicar la inestabilidad del fascismo; más aún, es de suponer que la dirección política del grupo dominante preveía desde el comienzo que tal contradicción debía generarse. Por lo demás, por mucho que los sectores medios rechacen el modelo económico, éste termina por imponérseles, paradójicamente en virtud del retroceso de que los hace víctimas. Los pequeños y medianos propietarios pueden ser afectados por la concentración monopólica y por una política de Estado que les niega el crédito, les impone pesadas restricciones y abre las puertas a la libre competencia con la producción monopólica nacional y extranjera. Pero al mismo tiempo esa política los obliga a subordinarse, so pena de desaparecer, como de hecho ha ocurrido con muchos pequeños y medianos productores. Es difícil pensar, entonces, que los que apoyaron al fascismo en el comienzo, tengan fuerza para oponerse a él cuando tiene el poder y lo aplica con éxito para subordinarlos.

El hecho fundamental no previsto, que cambia el carácter de la oposición a la Junta es la subsistencia y desarrollo, en todos estos años, del movimiento popular. Apoyado en aquellas organizaciones que consiguen subsistir, reorganizando clandestinamente aquello que ha sido ilegalizado por la dictadura, vinculándose a las organizaciones que asumen, en el peor período, la defensa de los derechos humanos fundamentales y superando, a un altísimo costo, los efectos de la represión fascista y de la política económica y social, la clase obrera y el movimiento popular han logrado mantener su presencia en la vida política del país, convirtiéndose desde un comienzo en el principal elemento dinámico de oposición a la dictadura.

La ruptura del bloque social y político que apoyó el golpe, producida de modo continuo durante los últimos tres años, se encuentra pues con una oposición popular existente desde el primer día. La confluencia objetiva de estos dos sectores, que aun-

que desde posiciones muchas veces divergentes, enfrentan a la dictadura, crea a esta una situación de aislamiento y la pone a la defensiva desde el punto de vista político. Más aún cuando, como veíamos antes, la mayoría de las organizaciones sociales subsistentes tienen una orientación democrática y, por ende, contraria a la dictadura.

La creencia de algunos de que esta oposición es débil y marginal, choca con la realidad concreta de los éxitos alcanzados en estos años: la reorganización y reactivación del movimiento sindical, que de posiciones defensivas pasa a un cuestionamiento global y abierto a la política económica y laboral; la lucha por los derechos humanos, que ha pasado a ser un aspecto central de la vida nacional y que ha conseguido victorias de importancia (entre ellas el desmantelamiento de la DINA, que fuerza al régimen a crear otros aparatos represivos); la salida a la opinión pública y a la calle de formas de oposición abierta, la creación de instancias políticas de cuestionamiento de la política institucional, el sostenido aislamiento internacional del fascismo y la mantención del movimiento de solidaridad con los demócratas chilenos, son logros de importancia del movimiento democrático. Pero, por sobre todo, hay un elemento central logrado por la oposición en estos años: es la ruptura del congelamiento político que la dictadura pretendía imponer al conjunto de la sociedad. Es esta batalla ideológica crucial el punto de mayor éxito de las fuerzas democráticas. Para implantar su política de fuerza el fascismo necesitaba crear un sistema de prescindencia política: su aversión al juego democrático hace que elimine de sus preocupaciones la búsqueda de consenso hacia su política. Le basta con desactivar toda forma de participación para que el elemento consensual que debe estar en la base de todo poder, pase a segundo plano. La activación política del país, lograda por la oposición democrática, pone en cuestión el régimen político fascista. Para gobernar un país que, contra su voluntad, se abre cada vez más a la actividad propiamente política, el fascismo requiere un mínimo consenso. La pérdida de ese consenso está en la base de su crisis política.

La crisis del fascismo se produce entonces como resultado de dos procesos: su pérdida de apoyo en importantes sectores del bloque que la llevó al poder y la reactivación política de la sociedad, con sentido democrático, que pone en cuestión el sistema político creado por el fascismo. La primera respuesta del fascismo a la apertura forzada del juego político no es la de entrar a él con los elementos de poder de que dispone, sino la de acentuar su carácter represivo. De allí la ruptura creciente que se produce entre Estado fascista y sociedad y el carácter desestabilizador que adquiere progresivamente el aislamiento del fascismo.

Para evitar caer en un excesivo optimismo, es preciso señalar con claridad las limitaciones que tiene la crisis así concebida. Ella abarca solamente, por ahora, el plano político en sentido estricto: lo que está en cuestión es el sistema político específico a través del cual la alianza gran burguesía - Fuerzas Armadas pretende imponer su dominación. Los elementos constitutivos de esta alianza no se encuentran en crisis, a nuestro entender.

Esto quiere decir, en primer término, que el modelo de dominación económi-

ca impuesto al país no está hoy cuestionado radicalmente, como lo está el modelo político. Ello se debe a varios factores, entre los cuales está la subordinación ya referida de sectores importantes de la pequeña y mediana burguesía a ese modelo, la pérdida de importancia relativa de la burguesía nacional en la economía del país, la imposición ideológica de determinados elementos del modelo a amplias capas de la población, la situación de miseria e inseguridad extrema de los trabajadores que orienta a la desmovilización o al menos a las reivindicaciones económicas inmediatas más que al cuestionamiento de las bases del sistema. En otras palabras, el cuestionamiento del sistema fascista en términos políticos, que hoy es evidente en el país, no tiene el mismo carácter radical, o al menos la misma expresión pública, respecto al modelo económico.

En segundo término, la crisis política no alcanza a poner en duda el dominio fascista sobre las Fuerzas Armadas. Nos referiremos en el siguiente capítulo al reciente conflicto en ellas producido. En todo caso, aunque esa ruptura relativiza la afirmación de la unidad de las Fuerzas Armadas bajo mando fascista, hay que anotar que ese conflicto no se produce como resultado de una penetración democrática en los cuerpos armados ni en los altos mandos, sino más bien como una discrepancia de fondo al interior del fascismo sobre las formas de enfrentar su crisis política. De allí que sea posible afirmar que el elemento de fuerza con que cuenta la gran burguesía para imponer su política al país sigue existiendo y que la hegemonía de que goza en ese sector no está radicalmente cuestionada.

Una segunda limitación importante de la crisis está en la fuerza insuficiente que hasta ahora tiene la oposición democrática. Aunque ella ha sido capaz de poner en cuestión el sistema de dominación política fascista, no está aún en condiciones de amenazar, a través de ese cuestionamiento, la estabilidad de la dictadura. En otras palabras, la crisis de consenso está lejos de llegar a ser una crisis de estabilidad. Es cierto que, como veremos a continuación, sus efectos han llegado a repercutir al interior de la dictadura y amenazaron con producir un vuelco de recambio importante. Pero en ese conflicto el movimiento democrático estuvo ausente. El hecho que se quiere aquí recalcar no es que Pinochet no pueda caer por las contradicciones internas del fascismo, sino más bien que el movimiento democrático no cuenta hoy con fuerza autónoma para derribarlo.

2.— EL RECIENTE CONFLICTO EN LA JUNTA

El conflicto abierto en la Junta Militar que tiene lugar durante todo el año, a partir de la convocatoria al referendium del 4 de Enero, y que culmina con la expulsión de Gustavo Leigh, tiene su origen en la crisis política que hemos descrito. En efecto, el hecho de que el modelo político fascista sea cuestionado abiertamente por la mayoría del país es motivo de preocupación al interior del bloque dominante. Pasados varios años de su instalación en el poder, obtenida una parte importante de sus objetivos en

materia económica, el fascismo necesita estabilizar su dominación política a través de un sistema institucional más permanente, que establezca con claridad la forma de Gobierno específico que se quiere dar al país. Al hacerlo es preciso tener en cuenta la realidad existente: el rechazo que provoca el sistema vigente y el desprestigio creciente de Pinochet pasan a ser puntos importantes de resolver a la luz de esta exigencia institucionalizadora.

La discusión institucional divide al bloque fascista. En un trabajo anterior dimos cuenta de esta división en los siguientes términos:

“La discusión abierta entre los partidarios de la dictadura tiene dos bandos: unos quieren consolidar lo existente, mantener el poder unipersonal, dilatar cualquier descentralización, conservar la prohibición sobre cualquier forma democrática de representación política, y mantener el rol permanente de los altos mandos militares sobre el Gobierno y la dirección del país. Otros, por diversas razones, buscan una apertura más que formal que podríamos llamar genéricamente ‘democratización a partir del actual régimen’. Se trata, en este caso, de avanzar paulatinamente hacia formas de Gobierno civil, en los marcos de una democracia restringida, conservando un rol para las Fuerzas Armadas que les permita arbitrar los conflictos entre los titulares del poder formal e intervenir directamente cuando la estabilidad del régimen se vea amenazada”¹.

La discusión así planteada nos obliga a volver a examinar la relación entre régimen político y proyecto social. Hemos afirmado que el modelo político fascista es el complemento necesario del proyecto social que la gran burguesía monopólica quiere implantar en el país. Es lo mismo que se decía en otros términos al analizar el golpe, cuando la izquierda afirmaba que el fascismo era el recurso extremo de la burguesía monopólica y el imperialismo para recuperar su dominación en un país que, como Chile, vivía un proceso intenso de cambio social revolucionario. ¿Se trata de cuestionar esa afirmación ahora cuando se afirma que la propia burguesía examina modelos alternativos, aunque también restrictivos, de organización política?

En parte es así. No negamos la validez de la afirmación de cinco años atrás, cuando efectivamente la única salida de los monopolios a su situación era intentar el golpe militar fascista. Pero en los cinco años transcurridos han habido cambios de envergadura en la situación económica, política y social de Chile. La dictadura militar ha alterado el rostro del país como ningún gobierno anterior lo logró en un período similar. El poder de los grupos dominantes ha aumentado enormemente, mientras ha decrecido la fuerza y la movilización popular en el conjunto de la sociedad; igualmente, se ha cumplido en parte importante el programa de desnacionalización y concentración del capital de la gran burguesía. Es razonable pensar, en-

¹ J.M. INSULZA: “Algunos Problemas de la Institucionalidad Democrática” - Resistencia Chilena N. 13. Nov. Dic. 1977, pg 21.

tonces, que puesto en la disyuntiva de mantener un modelo político que todo el país rechaza, una parte de la burguesía se proponga esquemas alternativos que, desde su punto de vista, no pretenden alterar el sistema de dominación ni la hegemonía de la fuerza, sino por el contrario crearles una mejor base política.

La propuesta política de recambio que levantan tímidamente algunos sectores encuentra dos aliados importantes. El primero está en la propia Junta: por cierto nadie hubiera pensado algunos años antes que Gustavo Leigh pudiera atacar a Pinochet desde posiciones aperturistas; mal que mal, se trataba del elemento más coherentemente fascista del grupo gobernante. Pero las maniobras exitosas de Pinochet por acentuar su poder personal habían generado un conflicto de poder interno, que para expresarse requería de alguna plataforma alternativa. Partiendo de la afirmación inicial de que Pinochet viola el espíritu del golpe al anteponer su poder personal al de las instituciones armadas (lo cual significaba una afirmación del esquema fascista más rígido) Leigh se va transformando poco a poco en un propugnador de formas de apertura, recogiendo así de modo oportunista el descontento que existe en el país con el actual orden de cosas. De modo cada vez más abierto, va asumiendo posiciones alternativas, en la medida en que recibe respaldo o al menos interés de una serie de voceros de los grupos dominantes.

El segundo aliado importante de las tendencias de recambio es el gobierno norteamericano. Aunque grajo al Pentágono y las empresas transnacionales, el Gobierno de Pinochet es visto por la administración Carter como un aliado incómodo, dado su aislamiento y desprestigio internacional. De allí el estímulo que proporciona a alternativas que sin alterar el cuadro de poder real, den la sensación de que se produce un cambio con sentido democrático. La tendencia es la misma seguida con respecto a otros regímenes de América Latina, con la diferencia que en este caso el dictador es más extremista y reacio a los intentos del gobierno norteamericano por hacerlo liberalizar su régimen. De allí que lo que comienza como tímidos consejos se haya ido transformando en polémica abierta y que la administración Carter aparezca cada vez más decidida a apoyar soluciones alternativas al actual dictador.

El disenso de Leigh plantea así a Pinochet un problema agudo, que excede netamente el terreno en que ha querido proponer la discusión institucional. La propuesta de Leigh implica una apertura del régimen en todos los planos, para forjar un nuevo sistema, que sin moderar el ataque al enemigo que aún aparece como principal — la izquierda — de hecho forja una alianza más amplia con sectores excluidos por el fascismo. De allí que a Pinochet le quede claro que si Leigh consigue imponer sus posiciones, ello significa su fin como dictador. Por ello acorta los tiempos del conflicto y plantea la cuestión como una prueba de fuerza en que las Fuerzas Armadas y la burguesía deben optar; pero optar por Leigh significa enfrentarlo a él, que está dispuesto a luchar, e incluso a dividir las Fuerzas Armadas.

La maniobra toca un punto sensible, crucial para los intereses monopólicos e imperialistas: la unidad del grupo dominante y de las Fuerzas Armadas. Superar la crisis política a riesgo de poner en peligro estos elementos básicos es un precio que esos inte-

reses no están dispuestos a pagar. De allí que, en el momento del enfrentamiento, todo el bloque dominante cierra filas en torno a Pinochet; no porque no haya quienes comparten la línea de Leigh, sino porque éste ha excedido los límites tolerables de conflicto y no es capaz de garantizar ya la mantención de los elementos esenciales del poder.

La agudización de la crisis es un toque de alerta en cuanto a la urgencia de adoptar medidas para superarla. De allí que, derrotado Leigh, Pinochet lance su ofensiva institucionalizadora con nueva fuerza,

Al hacerlo asume un nuevo riesgo: si fracasa en su intento por imponer al país su propuesta o si esta se revela ineficaz para eliminar la crisis de consenso existente, hay otras opciones que siguen abiertas para la gran burguesía. Pero por ahora es evidente que las filas del fascismo han vuelto a cerrarse en torno al proyecto Pinochet. Lo cual hace que la brecha abierta entre fascismo y movimiento democrático se haga más aguda y que el enfrentamiento en torno a la cuestión de la institucionalidad se torne crucial.

3.— EL PLAN INSTITUCIONAL DEL FASCISMO

Al centro del plan de institucionalidad de Pinochet se encuentra el proyecto de Constitución redactado por una comisión de incondicionales del régimen que presidió Enrique Ortúzar. Se trata, como era obvio esperar después de lo dicho anteriormente, de un esfuerzo por dar forma constitucional al orden actualmente existente. Aún así el proyecto llama la atención por su carácter tan ostensiblemente antidemocrático. Por cierto, de Pinochet se puede esperar cualquier cosa menos democracia. Pero el debate previo habido en el país durante más de un año hacía pensar que los autores del proyecto serían condicionados a mantener siquiera algunas apariencias formales, ocultando bajo fórmulas más sutiles su verdadero propósito. Aquí no hay tal ocultamiento, sino la evidencia del intento de imponer al país un modelo fascista de modo irrestricto. Sin pretender hacer aquí un análisis exhaustivo del proyecto, conviene señalar algunos rasgos fundamentales que demuestran de manera evidente la naturaleza de él:

a.— El proyecto limita fundamentalmente la titularidad y el ejercicio de la soberanía de dos maneras: en primer término, excluye de la “comunidad nacional” a los individuos que no comparten el “ser nacional”, que no se define pero que obviamente está sujeto al arbitrio de la dictadura. Para hacer práctica esta exclusión formula una serie muy amplia de mecanismos de exclusión, que permiten eliminar del ejercicio de todo derecho a los que discrepen con el régimen, suprimir organizaciones democráticas y sancionar a todo el que disienta con la política del régimen. En segundo lugar, tampoco es el resto de la población titular de la soberanía, sino que la ‘comparte’ con una serie de autoridades establecidas en el propio proyecto. Dado que las más relevantes de estas autoridades son autogeneradas, es claro que en la

práctica son estas y no el pueblo los verdaderos titulares de la soberanía

b — La estructura del aparato estatal crea, junto a órganos formales de representación, cuyo carácter es por lo demás muy restringido, una serie de autoridades, en las cuales se concentra en la práctica la mayor parte de las decisiones, y en cuya generación no interviene proceso democrático alguno. Las Fuerzas Armadas de modo directo o a través del Consejo Superior de la Seguridad Nacional, se reservan atribuciones de tal magnitud como la fijación del “objetivo nacional”, la de “dar eficacia al derecho y finalmente la de vetar toda decisión de la autoridad que ponga en peligro la seguridad nacional. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de privar de derechos políticos a los ciudadanos que discrepan. El Consejo del Banco Central es el organismo máximo que fija la política económica. Todos los integrantes de estos organismos son generados desde arriba, directa o indirectamente por el Jefe del Estado.

c — Por si algo en el sistema no funcionara, el dictador dispone de una serie de herramientas, agrupadas bajo el concepto de “estados de Emergencia”, a través de los cuales puede suspender la vigencia de la constitución y reunir de nuevo todas las facultades en su mano. Con ello se consagra la arbitrariedad definitiva: la soberanía reside en definitiva en el dictador. Como dice la doctrina clásica fascista alemana: “Soberano es quien puede decretar la emergencia”. (Karl Schmidt).

En suma, el proyecto Ortúzar no pretende crear en el país ni siquiera una apariencia de democracia, sino simplemente consolidar lo existente, entregando el ejercicio de la soberanía a quien tiene la fuerza y garantizando el monopolio de la fuerza a quienes hoy gobiernan el país. Desde este punto de vista, constituye un punto de definición final entre fascismo y antifascismo: quien se encuentre dispuesto a aceptar este modelo de institucionalidad difícilmente podrá ser ya ganado en el futuro para posiciones democráticas.

Sin duda, el fascismo está consciente de que con este proyecto constitucional difícilmente avanza en la obtención de un consenso. Por ello no hay mayor apuro en poner en vigencia este engendro. Por el contrario, las últimas declaraciones de Pinochet demuestran que la tendencia es a dilatar largamente su puesta en marcha, hasta que otros procesos políticos desarrollados paralelamente den sus frutos.

En efecto, la ofensiva institucional, si bien pone al centro el nuevo proyecto de constitución, no se restringe solamente a él. En todos los planos se busca crear la apariencia de que se comienza vivir una nueva etapa, en que la “norma” reemplaza la arbitrariedad y en que ha llegado el momento de establecer reglas claras que regulen las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad. Importancia principal adquieren en este sentido las recientes medidas adoptadas en el terreno sindical y en el plano estudiantil.

En el terreno sindical, la disolución de las Confederaciones y sindicatos democráticos, va unida al anuncio de dos medidas más: la elección de nuevas directivas en todos los sindicatos industriales del país, que se realizó en el plazo de pocos días, poniendo

do una serie de restricciones que pretendían excluir la designación de cualquier dirigente democrático, por la vía de garantizar el “apoliticismo” de los elegidos, y el anuncio del retorno al sistema de negociación colectiva, por empresa. Ambas medidas apuntan en la dirección de crear las nuevas formas de relación señaladas. Sin duda, la negociación colectiva por empresa es un fraude en un país en que no se garantiza la inamovilidad en el trabajo y la cesantía alcanza márgenes exorbitantes.

Significa en términos prácticos aceptar las condiciones del empresario o ir a la cesantía.

En cuanto a la elección de nuevas directivas sindicales, se trata de reemplazar la organización sindical existente por otra subordinada a la Junta. La novedad aquí es que Pinochet y los monopolios han comprendido que no es posible crear un sistema basado puramente en la relación entre un Estado policial y la comunidad, aplicando los mecanismos represivos sólo para impedir que ésta se organice y exprese. La tendencia es ahora la de reemplazar la organización existente por una paralela, para estar en condiciones de disputar el control de la actividad social al movimiento democrático.

Una situación similar se da en el plano estudiantil. La decisión de organizar Centros de Alumnos universitarios en las Universidades estatales, con elecciones indirectas y más garantías de “apoliticismo”, representa, también en este plano, la pretensión de llenar el vacío dejado hasta ahora por la dictadura, de disputar también allí el terreno a la oposición democrática a través de organizaciones paralelas subordinadas.

Lo ocurrido hasta ahora es un anticipo de lo que vendrá. La lucha en torno al tema de la institucionalidad se llevará adelante en todos los niveles de la sociedad: a nivel general, en los sindicatos, las organizaciones vecinales, las federaciones estudiantiles, etc. En cada uno de ellos, la dictadura intentará destruir por la represión las organizaciones existentes para reemplazarlas por las suyas.

El desafío para el movimiento democrático es doble: de una parte se trata de dar la batalla contra el proyecto Ortúzar y por la defensa de las organizaciones democráticas amenazadas. Por otra parte, es evidente que la ofensiva institucionalizadora puede significar un mayor desarrollo de la lucha política, abrir campos de enfrentamiento no abiertos hasta ahora. Sería un error, por ejemplo, abandonar de la partida todo trabajo hacia las nuevas directivas sindicales, por la forma antidemocrática de su generación. Por el contrario, ellas deben ser vistas como una nueva posibilidad de desarrollo de nuestra influencia en un momento que puede ser favorable si tenemos la capacidad política y orgánica para enfrentarlo adecuadamente.

4.— DEBATE INSTITUCIONAL Y MOVIMIENTO DEMOCRATICO

La situación que hasta ahora hemos descrito podría resumirse en los siguientes términos: en los marcos de una crisis política, caracterizada por la falta de con-

senso en torno a su modelo, la dictadura abre una nueva fase de lucha, intentando romper su aislamiento por la vía de imponer en el Estado y la sociedad un modelo institucional que establezca su poder. Al hacerlo corre además el riesgo de que una ampliación de la lucha le produzca mayor inestabilidad y aislamiento y que los efectos de este retroceso se dejen sentir en la unidad interna de su propio bloque. Si, por el contrario, tiene éxito en su pretensión, la oposición democrática habrá sufrido un serio retroceso. Esta disyuntiva puede ser algo esquemática con respecto a una realidad política compleja, pero marca el concepto que queremos dar: la lucha en torno a la institucionalización tiene, desde el punto de vista de la permanencia del fascismo, un carácter crucial.

La pregunta que corresponde hacer es si el movimiento democrático está o no en condiciones de enfrentar la tarea que se le pone en esta coyuntura. Desde luego ya ha demostrado su decisión de hacerlo: la forma abierta en que todas las organizaciones democráticas se han opuesto al proyecto Ortúzar, rechazándolo de plano y de modo general; la acción unitaria de todo el movimiento sindical, condenando la represión a las Confederaciones y la elección sindical espúrea; la agitación democrática en las universidades; demuestran claramente la voluntad de lucha del movimiento democrático. Algunos hechos demuestran además que la oposición tiende a ampliarse cada día más. La incorporación de personeros del antiguo Partido Nacional al Grupo de Estudios Constitucionales; la desertión y paso a la oposición de algunos dirigentes sindicales que hasta ayer trabajaban con la Junta; la acción pública de los generales de la FACH expulsados con Leigh; etc.; son ejemplos de esta ampliación.

Pensamos que, en términos generales, el movimiento democrático tiene capacidad para oponerse a la ofensiva fascista y ganar nuevas posiciones de importancia. Para ello es fundamental, sin embargo, que supere determinadas limitaciones a su acción, que hoy se hacen más evidentes, en atención al desafío que enfrentamos.

Este desafío es nada menos que el de convertir la crisis de consenso de que hemos hablado en una crisis de estabilidad del régimen. Decíamos antes que el principal éxito de la oposición democrática era el de haber conseguido descongelar la situación política y haber puesto al fascismo en una situación de aislamiento en un país en que la actividad democrática y el debate político son cada vez más intensos. No obstante, el Estado fascista mantiene, en las condiciones actuales, fuerza suficiente para sostenerse en el poder, prescindiendo del descontento popular o reprimiéndolo. Su crisis no es aún una crisis de hegemonía, en la medida en que el componente de fuerza sigue estando sólidamente en sus manos. Superar esta situación significa solucionar, por parte del movimiento democrático, tres cuestiones principales, que desarrollamos a continuación.

a.— **El Desarrollo del Movimiento de Masas.** El hecho de que la base de la dictadura esté en su control sobre el monopolio de la fuerza en el país, ha dado un curso inicial al movimiento de resistencia que se mantiene hasta ahora. Este curso pasa centralmente por el desarrollo de la lucha de masas contra la dictadura.

Hemos hecho referencia ya a los logros obtenidos en esta materia. No cabe duda que ellos bastan para demostrar la existencia de una oposición democrática y sus potencialidades. Pero es igualmente indudable que nuestra acción de masas está muy lejos aún de ser capaz de desbordar la capacidad represiva de la dictadura y convertirse en un factor político decisivo, protagonista en sí de hechos políticos y no mera expresión de descontento o auxiliar de la actividad superestructural. La apatía de masas, la escasa movilización, la simple espera de un cambio de situación “desde arriba” son los mejores aliados para la mantención de un régimen de fuerza. Por el contrario la acción de masas organizada y consciente puede aspirar a alterar la correlación real de fuerzas, al poner de relieve que la mera represión no garantiza la estabilidad de un régimen.²

El desarrollo de la lucha de masas no depende sólo de condiciones objetivas. Si así fuere, las condiciones actuales de miseria, cesantía y represión serían marco más que suficiente³. El problema es como, a partir de esa situación se genera la conciencia y unidad suficiente como para movilizar masas en torno a un objetivo político general. La impresión que hoy existe es que ese elemento no ha sido aún logrado. Existe aún diferencia sustancial entre la actividad que despliegan las direcciones sindicales, sobre todo a nivel de Federaciones y Confederaciones, y el nivel de actividad en las fábricas y los sindicatos de base. Lo mismo podría repetirse para otras esferas de la sociedad. En los niveles inferiores el descontento no genera aún movilización, salvo contadas ocasiones.

Superar esta situación es un problema que dice relación principalmente con dos cuestiones: la represión y la capacidad de dirección del movimiento popular. La primera es un factor constante que sólo se altera con la lucha misma. El problema crucial es pues el de dirección. La lucha de masas no es un hecho espontáneo. responde a consignas precisas, a orientaciones definidas, a objetivos posibles y claros que unifiquen al conjunto. Nada de eso se encuentra presente en la política de la izquierda, que carece hoy de una línea táctica que señale caminos de lucha y metas a mediano y corto plazo.

Estrechamente ligado a este problema está la errónea evaluación que conscientemente o inconscientemente hacen algunos partidos acerca de la fuerza, o más bien la debilidad, de la dictadura. En función de esa evaluación optimista, casi mágica, que lleva a pensar que la dictadura está punto de caer a cada momento, cada coyuntura es miradas como un fin en sí, cada enfrentamiento es decisivo y a la postre la lucha no

² Un caso límite de acción protagónica de masas lo hemos visto en los últimos meses en Irán. Más allá de los acuerdos políticos y el juego de poder, lo que sorprende como el hecho principal es la presencia de la acción de masas como el factor único de desestabilización de un régimen que hasta ayer se destacaba por su brutalidad y aparente control absoluto de la situación.

³ Aunque se podría alegar también que estas condiciones, llevadas al extremo, son más un factor de apatía que de rebeldía.

se mira como una secuencia de actividades conducentes a un fin, sino como la coyuntura en la cual se define el destino de la dictadura. Cuestión que no es así y que no sirve para hacer política de masas. Por el contrario, una apreciación real de la fuerza de la dictadura, de la solidez de su control sobre los factores represivos, debe necesariamente llevarnos a concluir el peso que aún podemos poner en los conflictos políticos que se generan es escaso y que no será mayor mientras no seamos capaces de poner en marcha el movimiento de masas como un factor desestabilizador.

b. — **La Ausencia de una Real Alternativa Democrática.** Lo anterior debe ser puesto en relación con el desbalance que existe entre la pérdida de consenso de la dictadura y el logro de un consenso suficiente acerca de la forma de reemplazarla. Más de alguien ha llegado a decir que la dictadura existe porque no hay acuerdo para reemplazarlo. Esto no es cierto: existe primero por la fuerza que tiene, segundo por la falta de fuerza nuestra para oponer a la suya. Pero sin duda uno de los factores que limita nuestra capacidad de acumulación de fuerzas es la falta de claridad en el conjunto de la oposición acerca del camino para derrocar a la dictadura y de los contenidos de un proyecto social alternativo al de Pinochet.

Más allá de las distintas posiciones políticas que existen en la oposición, hay una gran coincidencia en la falta de realismo para examinar los problemas concretos que genera la caída de la dictadura. En particular, cuando se habla de Asamblea Constituyente, Gobierno Provisional o cualquier otra fórmula, se evita mencionar siempre una cuestión obvia: la caída de la dictadura implica la caída de un cierto “orden” existente en el país. Ya decíamos antes que la dictadura respondía a un “proyecto social” determinado. Es obvio que el reemplazo de la dictadura por un Estado democrático supone iniciar al menos la formación de un nuevo proyecto social, basado en la alianza que sustente ese nuevo Estado. No estando claro cual es ese proyecto sustitutivo es natural que muchos, sobre todo en los sectores medios, sean reacios a deshacerse sin más de lo existente, a cambio de un “desorden” que ven como evidente. A menos que haya una opción alternativa, clara, conveniente y sobre todo factible.

Esa alternativa debiera tener al menos tres componentes: un programa económico y social, una fórmula institucional y una alianza política. Sin embargo, las proposiciones que hasta hoy existen no pasan más allá de la explicitación de la alianza política, en el mejor de los casos, e incluso en esto con desacuerdos serios entre las distintas fuerzas.

Avanzar en estos aspectos es esencial si se piensa que la lucha contra el fascismo no es sólo por derrocar a Pinochet, sino por forjar un modelo político, económico y social radicalmente diverso, y se toma en cuenta a la vez que, ante la enorme superioridad de coerción del enemigo, la cuestión del consenso tiene para nosotros importancia fundamental. Construir — o al menos comenzar a construir — ese consenso antes de que la dictadura caiga y como una forma de acumular fuerzas para derribarla, supone la definición muy explícita de los objetivos, el marco y las fuerzas en torno a los cuales se forja ese consenso.

c.— **La ausencia de una Oposición Militar Democrática.** Los énfasis puestos hasta aquí en el desarrollo de la lucha de masas y en la generación de una alternativa que concite el apoyo de la gran mayoría de la población, dan la impresión de que olvidamos que la fuerza de la Junta no está ni en las masas ni en la calidad de su proyecto, sino en su control del aparato militar y represivo fundamentalmente, y que, al poner tanto énfasis sobre la cuestión del consenso, lo privilegiamos de manera absoluta.

En realidad no es así. Por el contrario, somos profundamente escépticos de la posibilidad de derrocar la dictadura, aún con la más amplia alianza y con un gran impulso de la lucha de masas, si no conseguimos romper la base de fuerza de la dictadura, cual es la unidad de las Fuerzas Armadas aliadas con la gran burguesía monopolítica. Algunos recientes ejemplos del valor de la lucha de masas — como Irán y Nicaragua — pueden también ser mirados a la luz de esta constatación negativa: a pesar de la enorme fuerza de masas, capaz de desestabilizar el régimen y desbordar su aparato represivo, las dictaduras aún logran, hasta hoy, mantenerse en el poder por la unidad que existe entre sus fuerzas básicas, que son las mismas que sujetan en Chile la dictadura de Pinochet. Y si bien la debilidad de la dictadura puede influir en el comportamiento de las Fuerzas Armadas, está claro también que esa influencia es limitada y hay allí un trabajo específico que debe ser enfrentado.

No pretendemos aquí entrar a las tareas que para el movimiento democrático implica una acercamiento a las Fuerzas Armadas. Sólo queremos señalar el problema: todos los sectores coinciden en asignar a los militares un rol en el retorno a la democracia, reconociendo así las dificultades de conseguir este objetivo sin su concurso. Pero cuando se trata de examinar la táctica concreta a seguir para ganar militares para las posiciones democráticas, se cae siempre en vaguedades o ilusiones, sin enfrentar el problema concreto. No creemos que los militares sean necesariamente fascistas; de hecho las posiciones democráticas han existido siempre en las Fuerzas Armadas. Baste recordar que los dos Comandantes en Jefe anteriores a Pinochet fueron asesinados por su consecuencia democrática precisamente. Pero el movimiento democrático y en particular la Unidad Popular debe aún romper la barrera de la represión y la desconfianza para articular un trabajo con esos sectores sin cuyo concurso la caída del fascismo será muy difícil de lograr.

El desarrollo de lo que son a nuestro juicio los problemas principales que enfrenta el movimiento democrático nos ha llevado algo lejos del tema inicial, que era el de la institucionalidad. Para justificar esta aparente divagación es bueno recordar lo que ya se dijo al comienzo de este trabajo. La coyuntura en la cual se da la ofensiva institucional de la Junta es una en que el fascismo pone en juego toda su fuerza para romper el cerco, y poner a la defensiva al movimiento democrático. Es también la oportunidad nuestra para desplegar más la fuerza del antifascismo. Lo cual supone precisamente superar estos problemas, único modo para que la crisis política se agudice y la lucha por la democracia pase a una fase decisiva.

* * *

CARTA ABIERTA DEL MAPU OBRERO Y CAMPESINO A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Santiago, septiembre de 1978.

SEÑORES

MIEMBROS DEL GRUPO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Presente

De nuestra consideración:

Nos hemos informado que sectores representativos de diversas actividades nacionales y de variadas tendencias ideológicas han constituido un grupo de estudios constitucionales, con el objeto de enfrentar “el deber ineludible e impostergable de emprender el examen y debate de las ideas básicas que contribuyan a producir el acuerdo democrático que puede ser fundamento de la futura institucionalidad”.

Apreciamos el interés de este Grupo de Estudios Constitucionales de intentar concitar a su alrededor la participación de ciudadanos de diversas tendencias en el esfuerzo común “de encontrar bases de acuerdo capaces de generar una solución democrática para nuestra patria”.

Consideramos que el paso que Uds. han dado se realiza con un carácter absolutamente independiente de los esfuerzos que hace la dictadura para perpetuarse en el poder. A esos objetivos responden los trabajos que, por espacio de casi cinco años, llevó adelante la Comisión Ortúzar, y cuya finalidad no es otra que la de institucionalizar el régimen antidemocrático de Pinochet, como se ha conformado claramente en estos días con la publicación parcial del informe elaborado por dicha Comisión.

Valoramos el paso que Uds. han dado pues significa un valioso aporte al avance de Chile hacia su vida democrática. Saludamos también el propósito de Uds. de darle a la iniciativa el máximo de amplitud, porque en los hechos significa avanzar hacia la posibilidad de concitar un acuerdo democrático en el país.

Hemos leído con atención el texto del “Planteamiento sobre elaboración de la nueva Constitución” que Uds. dieran a conocer a través de la prensa en los primeros días de agosto. Sin duda que los criterios básicos formulados en dicho planteamiento aparecen inspirados en una constructiva intención democrática.

Desde los primeros momentos, luego de la violenta interrupción constitucional, éramos partidarios de avanzar decididamente hacia una nueva institucionalidad democrática. En febrero de 1974, el Comité Central de nuestro Partido declaró: “desde el punto de vista del programa, el derrocamiento de la dictadura y la destrucción del estado totalitario y policial que ésta ha constituido, supone su sustitución por un estado de nuevo tipo, un estado democrático. No se trata, sin embargo, de postular hoy día la simple restauración de la organización estatal democrática que Chile tuvo hasta el 11 de septiembre. La vieja institucionalidad ya está superada por la historia. Muchos de sus pilares, como la organización de la justicia, por ejemplo,

son instrumentos de la política y el estado fascista”.

“Se trata de construir una nueva institucionalidad, profundamente democrática, pluralista y popular, y en la que se respeten las libertades públicas individuales, se reconozcan los derechos conquistados por los trabajadores en sus largas luchas, se asegure una real participación del pueblo en la conducción efectiva del país y se elimine para siempre al fascismo”.

Nos interesa en esta oportunidad hacerles llegar nuestras opiniones sobre el planteamiento institucional que Uds. han dado a conocer al país, considerando que el funcionamiento de los grupos de trabajo y las actividades que Uds. realicen posibilitarán un debate público en que pueden expresarse incluso aquellos sectores privados del derecho a hacerlo. Pensamos que el éxito de las tareas que Uds. han acometido está condicionado por el indiscutible carácter democrático que efectivamente ellas asuman y por el apoyo de masas que conciten tras de sí y ello ocurrirá en cuanto sus resultados den satisfacción a las justas aspiraciones democráticas del pueblo chileno.

Nuestras proposiciones para la construcción de un nuevo Estado Democrático

1.— Compartimos con Uds. la idea que la institucionalidad que se creará debe inspirarse en los principios que orientaron la evolución política de Chile, más aún, creemos que el punto de partida debe ser la Constitución de 1925, descartando de raíz los principios que el fascismo ha tratado de “institucionalizar” en este período. Apoyamos también los principios generales que se reconocen como pasos esenciales de la democracia constitucional chilena: soberanía popular, derechos del hombre, pluralismo, separación de los poderes públicos y estado de derecho.

A nuestro juicio, cuestión fundamental de este marco constitucional es extender la expresión de la soberanía popular y el control democrático de la ciudadanía sobre las instituciones del estado, de modo de garantizar efectivamente la plena vigencia de las bases esenciales de la democracia. La institucionalidad no es democrática si los organismos del estado se colocan por encima del poder soberano del pueblo. Por ejemplo, si se revisa el ordenamiento institucional vigente antes del golpe fascista, la forma de generación de los miembros del Poder Judicial y del Contralor General de la República, sus funciones y la carencia de mecanismos democráticos de control por parte de la ciudadanía, se podrá comprobar la aserción antes expuesta.

2.— Apreciamos que Uds. asumen una concepción del pluralismo de la sociedad democrática que reconoce la legítima existencia en el seno de la comunidad nacional de diversas tendencias espirituales e ideológicas. En consecuencia no hay democracia si la mayoría ciudadana no puede organizarse en partidos políticos para participar en el proceso político y social de la nación. En este sentido, somos partidarios de la manera más categórica del respeto a la autonomía de los partidos. Res-

pecto de esto, el fascismo ha hecho una sistemática campaña de desprestigio de los partidos, conciente de que de esa forma debilita a la democracia al impedir que se expresen las mayorías.

Nos preocupa, por tanto, que se confunda el saneamiento de la vida política del país con cualquier forma de restricción antidemocrática respecto de los partidos y su vida interna. En efecto, una cosa es la necesidad de evitar que se reproduzcan la politiquería, la demagogia y el terrorismo en las ideas y otra distinta es coincidir con el fascismo en orden a discriminar la existencia de los partidos o una reglamentación estatutaria que coarte su independencia y haga ilusorios los derechos políticos de los ciudadanos. No pueden pretenderse, por tanto, reglamentaciones que alteren los principios ideológicos o filosóficos de cada organización partidaria, los que dicen relación no sólo con sus convicciones políticas sino orgánicas y programáticas. Cuestión diferente es, como se ha sostenido en más de un encuentro realizado por las fuerzas democráticas, que la futura institucionalidad no debe tener un carácter ideológicamente neutro. Debe tener una clara inspiración democrática y antifascista. Esto debe establecerse en la constitución, impregnar todo el cuerpo institucional y social e incluso enseñarse en la educación de las nuevas generaciones. En esta materia somos partidarios de que el estado tenga facultad para impedir la acción terrorista dedicada a la destrucción de la democracia. Entendemos, por cierto, que lo fundamental no son las medidas represivas, sino que la cuestión principal es si las fuerzas democráticas son capaces de construir un estado sólidamente democrático de modo de convertir la adhesión a ella en una adhesión activa de masas.

Por otra parte, el estado debe establecer efectivas garantías para que se expresen libremente todas las corrientes filosóficas, concepciones ideológicas y creencias religiosas.

En los medios de comunicación social, más allá del reconocimiento de los indiscutibles derechos de opinión, información y expresión y el ejercicio responsable de éstos, se requiere que el estado estimule, no sólo el clima propicio para el respeto y libre ejercicio de estos derechos, sino que todos los sectores y grupos políticos, sindicales, sociales y culturales pueden tener acceso real a su ejercicio. El país requiere de los más diversos medios de expresión libres, democráticos y populares. En este sentido, conforme al consenso democrático, se deberá regular la propiedad y gestión de los medios de comunicación y socialización de masas, de modo de garantizar plenamente la libertad de opinión de los ciudadanos organizados en instituciones representativas de la vida nacional.

3.— Es indispensable, como Uds. lo señalan que los mecanismos constitucionales garanticen la autonomía en los gremios y demás organizaciones representativas de los sectores económico-sociales. Creemos que las organizaciones o cuerpos intermedios, como Uds. las denominan, involucran a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones vecinales y otras que, por una parte sirven de nexo entre el estado y los ciudadanos, y por otra, constituyen el conjunto del tejido social y político de la de-

mocracia. Sin lugar a dudas, en el período actual han sido estas organizaciones las que han mantenido una mayor solidez para enfrentar la embestida antidemocrática, y ellas son la base del movimiento democrático de nuestro país. Pensamos que no hay ejercicio real de la democracia sin el pleno funcionamiento de tales organizaciones, cuya inserción en la vida nacional debe estar consagrada en la futura institucionalidad democrática. No basta aceptar los derechos o libertades de manera formal, su existencia y acción es parte esencial de la vida democrática; su ausencia, precariedad o débil gravitación son signos inequívocos de una democracia que tiende a aislarse del pueblo y a convertirse en ejercicio formal, a merced, por ende, de la acción de minorías audaces e inermes a los golpes de fuerza.

4.— Es indudable que el papel de las FFAA en el ordenamiento institucional se pone, como consecuencia del golpe fascista, en el centro de la discusión. La cuestión que se plantea es evitar que se reproduzcan las condiciones que hicieron posible que el fascismo alcanzara el control y la hegemonía sobre las FFAA que le han permitido utilizarlas como la principal fuerza de apoyo para su política estrecha, antidemocrática, minoritaria y antinacional, hasta el extremo de comprometerlas directa e indirectamente en los peores crímenes de nuestra historia. Es evidente que en este aspecto el ordenamiento institucional basado en la Constitución de 1925 adolece de graves insuficiencias.

Las FFAA fueron desarrolladas enteramente al margen de los avances democráticos, humanistas y progresistas de la Patria, divorciadas de la vida civil y de los procesos sociales del país. Su estructuración interna, la generación de sus mandos, su funcionamiento y su desarrollo ideológico se pusieron por encima del poder soberano del pueblo y sin control democrático alguno por parte de la ciudadanía, a quien decían servir. En tales condiciones, los grandes capitalistas pudieron desatar impunemente en su interior una ofensiva ideológica antidemocrática, ofensiva que no se atrevían a lanzar abiertamente en el país. A esto se agregó el prologado y solapado trabajo del imperialismo norteamericano por inculcarlas en una concepción antidemocrática y antipopular de la seguridad nacional. Puestas por encima de la ciudadanía, las FFAA fueron la principal reserva de fuerzas que cultivaba el gran capital nacional e internacional.

El problema consiste, por tanto, en la construcción de FFAA democráticas en la futura institucionalidad. Como lo señaló el Comité Central de nuestro Partido en febrero de 1974: “Instaurar un estado democrático requiere inevitablemente una profunda transformación de las fuerzas armadas y policiales del país. Ellas nunca más podrán convertirse en instrumentos de represión al servicio de intereses minoritarios, antipopulares y antipatrióticos como ocurre hoy día. Nuestro pueblo ha aprendido duramente la lección de que un estado democrático sólo es tal — en último término — si las fuerzas armadas efectivamente lo son. Sólo la existencia de unas fuerzas armadas y policiales democráticas, pluralistas, patrióticas, estructuralmente vinculadas al pueblo y sometidas efectivamente a su control, serán

garantía suficiente de que el fascismo no podría repetirse en Chile”.

En nuestra opinión es necesario incorporar plenamente a los militares a la vida cultural, social y política del país. Puede arguirse que con esto se rompería el carácter no deliberante de la institución. Nosotros sostenemos que el carácter no deliberante en la práctica sólo sirvió para que determinados niveles de la cúpula de oficiales hicieran lo contrario y para inhibir el desarrollo democrático de la mayoría de los soldados y oficiales. Los hechos han demostrado que la negación de los derechos sociales y políticos a los militares, lejos de obtener prescindencia de la vida política, provocó precisamente lo contrario y resultó en una catástrofe para la democracia.

La incorporación de los militares a la vida ciudadana no es contradictoria con el carácter profesional, jerárquico y disciplinado que deben tener las FFAA. En una sociedad democrática, ninguno de estos principios puede ponerse por encima del carácter democrático del estado y sus instituciones. Concebimos a las FFAA como una institución jerárquica, disciplinada y profesional, en que cada uno de sus miembros goza de todos los derechos democráticos ciudadanos.

La participación de los militares en la vida nacional no significa en caso alguno que los cuerpos armados, en cuanto tales, tengan poder de decisión sobre determinadas cuestiones de gobierno; esta es una tarea reservada exclusivamente a las autoridades elegidas democráticamente por el pueblo. La participación de los militares debe expresarse en la integración ciudadana en la vida política, social y cultural del país y, en tanto cuerpo, en el cumplimiento de las funciones institucionales que le son propias. La misión institucional de las FFAA debe estar, a nuestro juicio, vinculada a las siguientes cuestiones: defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación; vinculación estrecha, en función de la defensa nacional, al desarrollo científico y técnico del país, participación activa en el rescate de los sectores desnacionalizados de la economía y en la orientación y gestión de las áreas estratégicas de ésta que digan relación con la seguridad nacional.

Otro aspecto que nos parece importante para construir unas fuerzas armadas democráticas es el establecimiento de mecanismos de control democrático sobre la estructuración, funcionamiento y orientación ideológica internos de éstas. En particular, la ideología democrática del nuevo estado debe ser la base de la formación de las FFAA, debe manifestarse en sus concepciones sobre la seguridad nacional y enseñarse en sus escuelas y academias. Por lo tanto, los poderes del estado elegidos democráticamente deben tener las atribuciones necesarias para orientar y controlar este conjunto de aspectos de los institutos armados.

Por otra parte, es necesario darle a las FFAA el máximo de independencia internacional para adquirir los materiales y pertrechos requeridos para formar sus cuadros. Lo concreto es la necesidad de independizarlas del monopolio ideológico y material norteamericano. Una sociedad no alineada, que establece vínculos con todos los países del mundo, crea las condiciones para profundizar el carácter independiente de las FFAA; ello redundará, por cierto, en un fortalecimiento de la soberanía nacional.

5.— Respecto del Poder Judicial y a la administración de justicia en el país, la experiencia vivida aconseja establecer con claridad cuáles deben ser las bases fundamentales de generación, organización, atribuciones y funcionamiento. Se hace necesario estudiar a fondo una democratización de la justicia que permita el acceso de todos los chilenos a este servicio esencial de la sociedad, y que éste se otorgue en las condiciones más idóneas, reales y justas.

Por otra parte se deben crear los mecanismos de control democráticos indispensables que deben existir sobre todas las instituciones del estado y respecto de los cuales no puede ser una excepción el Poder Judicial. Es preciso romper el aislamiento con que se ha mantenido este poder del estado del desarrollo democrático de la nación, que lo ha transformado en una fuerza retardataria y conservadora de la estructura social. Esta situación ha llegado a extremos cuando ha derivado en los hechos a la completa negación de su misión, como ha ocurrido en nuestros días con la defensa de los derechos humanos y con la completa aceptación de la arbitrariedad del régimen existente. Propiciamos, por lo tanto, que en la generación del Poder Judicial tenga participación el Poder Legislativo, además del Ejecutivo, en cuanto ambos son expresión directa de la soberanía popular. Además ambos poderes deben asumir el control y la fiscalización del funcionamiento del Poder Judicial. Dentro de esta concepción, el Poder Judicial puede alcanzar las condiciones reales de un verdadero poder del estado, en que su propia autonomía responda a las condiciones político-institucionales del conjunto de la sociedad y de los otros poderes. Pensamos también que debe discutirse desapasionadamente acerca de los tipos de tribunales que puedan satisfacer de mejor manera una administración de justicia efectiva para el pueblo; se trata de una búsqueda que vaya más allá de la mantención de la organicidad clásica y tradicional de tribunales colegiados, unipersonales y letrados.

6.— El carácter del régimen económico es, en nuestra opinión, el factor decisivo del cual depende la posibilidad de construir una democracia de nuevo tipo. Los rasgos esenciales del ordenamiento jurídico institucional, las libertades públicas y los derechos individuales y sociales, están limitados en los hechos por el contenido de mayor o menor libertad o igualdad que reine en las relaciones que se establecen entre los hombres en el terreno económico. Mientras el régimen económico se base en la propiedad de unos pocos sobre los medios de producción y en la propiedad de la mayoría solamente sobre su capacidad de trabajo, las igualdades jurídicas reconocida por el estado serán en, último término, formales. Esto resulta particularmente evidente en la actualidad en que la concentración monopólica ha llegado a niveles tan elevados, que resulta incompatible, no sólo con un ordenamiento democrático, sino que con las normas más elementales de un estado de derecho.

El carácter antidemocrático, estrecho, arbitrario y terrorista del fascismo es consustancial con su proyecto económico. El capital monopólico financiero y el

gran capital internacional, son contradictorios, no sólo con la clase obrera y los trabajadores en general, sino que también con el conjunto de las clases propietarias no monopólicas y nacionales. De allí que pretenda institucionalizar un estado de corte fascista, único medio que les asegura la dominación y explotación sobre el conjunto de la sociedad. Por eso es que la superación de la crisis nacional supone un amplio acuerdo que exprese a todas estas clases y sectores sociales en torno a la construcción de un estado democrático de carácter nacional y popular, en el que se realicen los intereses de la mayoría de los chilenos, víctimas hoy día, en mayor o menor medida, de la crisis nacional provocada por el fascismo.

Nosotros pensamos que la crisis de fondo del país y su desarrollo sólido y armonioso se resuelven en el camino del socialismo, y ese es nuestro objetivo histórico. Esto no significa, por cierto, como se ha pretendido atribuir a las fuerzas populares, que concebamos la democracia chilena como un "mal menor" respecto del fascismo. Por el contrario, nuestra opinión es que un estado de nuevo tipo coloca a la sociedad en la perspectiva histórica del socialismo en la medida que la profundización de su carácter democrático, desde el punto de vista de sus instituciones, de la participación del pueblo en la vida social del país, de las relaciones económicas etc., desarrollará la conciencia de las masas respecto de la necesidad del socialismo, régimen en el cual los derechos democráticos adquieren su expresión más elevada. Es por esto que postulamos la necesidad de lograr un amplio consenso político que permita enfrentar los graves problemas económicos de las mayorías y superar la crisis nacional.

El régimen económico de la nueva democracia debe construirse sobre los siguientes principios ordenadores. En primer término, debe impedirse el desarrollo de los monopolios en la industria, el comercio y la banca y del latifundo agrario. Para tales efectos deben ponerse limitaciones sociales a la propiedad privada y consagrar constitucionalmente otras formas de propiedad social: estatal, mixta y cooperativa. En segundo término, deben nacionalizarse los recursos naturales y las riquezas básicas y reservar para el estado de derecho de establecer sus modalidades de explotación. Asimismo debe establecerse un estatuto que regule las formas de inversión extranjera en el país a fin de proteger los intereses de la nación. En tercer término, deben reconocerse plenamente los derechos económicos de los trabajadores, empleo productivo, a la salud, a la educación, a la previsión, a la vivienda, y orientar las inversiones hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población. En cuarto término debe protegerse eficientemente a la industria y la agricultura nacionales en aquellos rubros de consumo masivo; y tomarse las medidas para terminar con el derroche de los recursos económicos del país en importaciones suntuarias de consumo de una minoría.

Respecto de las actividades productivas de artesanos y pequeños propietarios, el estado deberá impulsar una política orientada hacia el desarrollo de formas cooperadas de producción para modernizarlas y elevar su eficiencia.

Por otra parte, el estado debe ejercer un control eficaz sobre el comercio exterior. El restablecimiento de las relaciones internacionales de nuestro país, hoy día profundamente deterioradas, creará condiciones favorables para la exportación de nues-

tros productos, abrirá nuevos mercados para la industria nacional y permitirá al país elegir las condiciones más ventajosas de importación de bienes para el consumo de nuestro pueblo y de insumos y equipos para la industria nacional. Por último, el estado debe tener las facultades necesarias para planificar y orientar eficazmente el desarrollo global de la economía.

Los requisitos de la transición a la nueva Institucionalidad Democrática

Nos preocupa que muchos compatriotas puedan hacerse la ilusión de que es posible aprobar un nuevo ordenamiento constitucional que signifique una solución de fondo y estable a la crisis política y social de Chile, bajo las actuales formas estatales o mediante modificaciones más o menos superficiales de éstas.

Un nuevo orden constitucional podrá contribuir a resolver la crisis nacional en la medida que el proceso de su elaboración, discusión y aprobación sea plenamente democrático, de modo que refleje realmente la voluntad de la mayoría de los chilenos. Solamente en estas condiciones todos los sectores democráticos, hayan apoyado o no la Constitución que se apruebe, podrán reconocer su legitimidad en tanto que expresión de una mayoría nacional. No escapará a Uds. el hecho de que es ésta una exigencia indispensable para avanzar en la solución de los agudos problemas políticos de Chile. Por estos motivos, compartimos algunas de las primeras conclusiones del Grupo de Estudios Constitucionales, según han sido dadas a conocer por la prensa, si bien pensamos que no son del todo suficientes. Estas son:

- “1.— La Nueva Constitución Política debe ser expresión libre y reflexiva del pueblo organizado y, para generarla, es necesario convocar a una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal o emplearse otro procedimiento igualmente democrático.
- “2.— La soberanía reside en el pueblo y el poder constituyente sólo puede ser ejercido legítimamente por éste o por órganos representativos de todos los que componen la ciudadanía, sin exclusiones.
- “3.— Requisitos de la Asamblea Constituyente:
 - a) Que todos los sectores y tendencias tengan la oportunidad de participar en forma efectiva.
 - b) Que el debate se realice públicamente y bajo el imperio de las libertades esenciales.
 - c) Que el pueblo o sus legítimos representantes, llamados a decidir en último término, puedan elegir libremente entre dos o más alternativas.
 - d) Que la decisión definitiva se adopte previa constitución legal del cuerpo electoral y mediante procedimientos de sufragio preestablecidos, que garanticen la libertad y el secreto del voto y la corrección de los escrutinios”.

En esta materia, en cuanto a los requisitos de la construcción de un estado democrático se requiere la mayor claridad posible. En primer lugar, porque estas condiciones no las va a otorgar la dictadura de Pinochet. Por el contrario, éstas corresponden a un conjunto de reivindicaciones democráticas que sólo la lucha organizada de todos los chilenos podrá conquistar. La falta de claridad sobre esta materia, la insuficiente concepción democrática acerca del carácter y contenido de estas reivindicaciones, crea desconcierto en el pueblo, divide a los chilenos democráticos y contribuye a perpetuar un ordenamiento jurídico antidemocrático. En segundo lugar, porque Pinochet está en condiciones de aprobar su proyecto constitucional cumpliendo determinados requisitos formales pero a través de procedimientos electorales antidemocráticos y fraudulentos. El anuncio del dictador en el discurso del 11 de septiembre último deja en evidencia el carácter fraudulento y antidemocrático del anunciado plebiscito ya que ratifica que el poder constituyente emana legítimamente en el golpe militar de 1973 y que su ejercicio le corresponde a la Junta Militar. Para enfrentar este proceso, y en vistas de la experiencia de la “consulta” del 4 de enero, el dictador descabezó a la FACH. De esta manera, la preparación de cualquier texto constitucional alternativo, sin precisar claramente los requisitos de su aprobación, tiene el peligro evidente de inducir a error a los chilenos y de contribuir a legitimar los propósitos de la dictadura.

Por otra parte, si la falta de precisión acerca de los requisitos de la construcción de un estado democrático obedece al propósito de favorecer el desarrollo de la oposición al dictador en las FFAA, ello sólo viene a reflejar una incomprensión de la fuerza y el carácter de la dictadura y demuestra una concepción de la democracia profundamente discriminatoria. En efecto, la dictadura está aislada políticamente, tanto nacional como internacionalmente, pero cuenta con un enorme apoyo material y militar. El descabezamiento de la FACH es una clara demostración al respecto. Asimismo es demostrativa la respuesta cínica dada por Pinochet a toda la presión nacional e internacional por esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos. Los sectores democráticos no han desarrollado aún una cantidad suficiente de fuerzas como para poner a la dictadura al borde del precipicio o, al menos, para obligarla a negociar su salida.

Pensamos que la incomprensión del carácter de la dictadura consiste en que no se termina por entender que su política corresponde al proyecto histórico fascista del gran capital monopólico financiero, nacional e internacional, irreconciliablemente contradictorio con todas las expresiones democráticas de la Patria. La experiencia de estos años ha demostrado hasta la saciedad que el camino de las concesiones constituye una especulación política de consecuencias trágicas para nuestro pueblo. Con el agravante que, en las actuales circunstancias, toda concesión supone necesariamente la restricción a los derechos de los principales enemigos del fascismo: la clase obrera y los trabajadores, los partidos obreros y populares. Ello, lejos de favorecer el tránsito hacia la democracia, lo hace más precario. Afirmamos, por tanto, que las fuerzas democráticas no tienen otra alternativa que la lucha amplia y sin restricciones contra la dictadura. El camino de las concesiones sólo favorece al fascismo y a sus propósitos antide-

mocráticos.

En las primeras conclusiones aprobadas por Uds. se señala que el debate público sobre la nueva constitución debe darse bajo el amparo de las “libertades esenciales”. A nuestro juicio las libertades esenciales del pueblo de Chile no son otras que las vigentes al 11 de septiembre de 1973, basadas en la Constitución de 1925. Nuestra opinión es que sólo el ejercicio pleno de todas y cada una de las libertades fundamentales estipuladas en el ordenamiento constitucional vigente al momento del golpe, crea las condiciones democráticas necesarias para que el pueblo pueda decidir acerca del ordenamiento institucional futuro de la Patria.

A nuestro juicio, los pasos o requisitos que se deben cumplir para que efectivamente pueda votarse un ordenamiento constitucional democrático, son las siguientes:

En primer término, poner en vigencia la libertad de asociación política. La libre existencia de los partidos políticos, tal como ha sido tradición en Chile, es condición esencial para construir un estado democrático. Frente a la dictadura y el gran capital, que controlan los medios de comunicación social y que tienen plena libertad para ejercer su influencia monopólica, ideológica y política, el pueblo no puede quedar sin el derecho de organizarse políticamente. Conceder en esto es negar una libertad democrática sustantiva del pueblo, cuestión que haría ilegítimo cualquier orden constitucional “aprobado” en estas condiciones.

De acuerdo con nuestras tradiciones históricas, la libertad de asociación política es un derecho irrenunciable del pueblo. En consecuencia no puede ser reemplazado sólo por la libertad de prensa o por la simple constitución legal del cuerpo electoral. Ello importaría una discriminación inaceptable. En efecto, los partidos políticos se encuentran actualmente sujetos a dos estatutos distintos: hay partidos disueltos y partidos puestos fuera de la ley. Por tanto, la vigencia de la libertad de prensa implicaría conceder de hecho a unos los derechos que se niegan a los partidos obreros y populares. En tales condiciones, se negaría de hecho la libertad de opinión en que se sustenta la libertad de prensa, y la constitución legal del cuerpo electoral sería un formalismo.

En suma para que “todos los sectores y tendencias tengan la oportunidad de participar en forma efectiva” es condición indispensable la plena vigencia de la libertad de asociación política.

En segundo término, es indispensable poner en plena vigencia las libertades y los derechos individuales: libertad de creencia, de opinión, de asociación, derechos ciudadanos, etc. El fascismo desconoce estos derechos de todos los chilenos; hay ideologías puestas fuera de la ley, en función de ello se niega la libertad de asociación, hay opiniones que no pueden sostenerse públicamente, creencias que no pueden expresarse. Es evidente que el imperio de estos derechos es indispensable para construir un ordenamiento institucional legítimo y viable.

El respeto pleno de estos derechos y libertades fundamentales será letra muerta si continuamos bajo el dominio terrorista de la maquinaria represiva de la dicta-

tura. No hay “libertades esenciales” posibles si los organismos policiales continúan teniendo libertad para amedrentar, vigilar, detener y asesinar a los chilenos. En consecuencia es necesario ir a la disolución de los organismos represivos de la dictadura, garantizar la sujeción de las instituciones policiales a los tribunales de justicia y asegurar que nadie pueda privar o restringir arbitrariamente la libertad de los chilenos.

Un tercer término, es preciso tener claridad respecto de la constitución legal del cuerpo electoral. De un lado, no se pueden negar el conjunto de derechos cívicos a los chilenos obligados al exilio. Es ineludible, por tanto, restituir a miles de compatriotas el derecho a vivir en su propia patria. De otro lado, no puede cuestionarse que el cuerpo electoral está constituido por todos los chilenos mayores de 18 años, alfabetos o analfabetos. Sobre estas bases, lo que se hace necesario es organizar registros, tribunales y procedimientos electorales que garanticen la libertad y el secreto del voto y la limpieza de los escrutinios de conformidad a la legislación vigente al 11 de septiembre de 1973.

En cuarto término, sostenemos que es preciso, desde ya, el pleno restablecimiento de todos los derechos y libertades sindicales imperantes antes del golpe fascista. La libertad para efectuar reuniones sindicales, la libre elección de los dirigentes, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga, son conquistas irrenunciables de la clase obrera y los trabajadores. No escapa a nadie que los patrones han gozado de absoluta libertad en sus organizaciones gremiales en este período. El pleno reconocimiento de los derechos sindicales es fundamental para que los trabajadores puedan participar en la discusión de la nueva institucionalidad y para que puedan luchar por sus propios derechos económicos y por resolver las graves condiciones de vida a que los condena la política de la dictadura.

Por último, planteamos que es ineludible tomar todas las iniciativas necesarias destinadas a esclarecer la situación de los chilenos detenidos y desaparecidos y precisar responsabilidades y aplicar los castigos correspondientes. No es este solamente un imperativo moral, sino que constituye una responsabilidad política democrática fundamental. Debemos demostrar que el fascismo es transitorio, que su proyecto no puede modificar el desarrollo democrático histórico de la Patria y que, por lo tanto, sus crímenes deben ser castigados.

Llamado a luchar por los derechos democráticos históricos y a abrir paso a la constitución de un Gobierno Democrático Provisional

El fascismo es irreconciliablemente contradictorio con la democracia. La nueva constitución que la dictadura pretende imponer a Chile es sólo un acomodo institucional destinado a darle viabilidad histórica a su proyecto de dominación. No concederá ninguno de los derechos democráticos señalados. La democracia se conquistará en Chile por la vía de la lucha de todos los chilenos democráticos.

Sostenemos, como lo hemos hecho desde el mismo día 11 de septiembre de

1973, que las diferencias entre los chilenos no consisten hoy día entre los que están por el socialismo y los que no lo están, entre los marxistas y los no marxistas, entre los que estuvieron con el gobierno de la Unidad Popular y sus opositores, ni siquiera entre los que estuvieron por el golpe y contra el golpe. Hoy día la división objetiva se da entre los que están por la democracia y los que no lo están. Las diferencias ideológicas y políticas no se han eliminado y mantienen plena vigencia, pero sostenemos que ellas no pueden impedir la unidad democrática. En este sentido la Unidad Popular declaró en marzo de este año: "La realidad chilena es hoy diferente. Hacemos todo por abrir paso a lo nuevo y, en primer lugar, a nuevas formas de unidad y de lucha que dejen atrás las reyertas entre las fuerzas democráticas que facilitaron el golpe fascista. Al estimular los combates unitarios contra el fascismo se hará posible superar las querellas adjetivas y se desarrollará fructíferamente el debate ante el pueblo de los proyectos políticos de cada cual".

Las bases de la unidad democrática están dadas por la lucha común de poner en vigencia los derechos democráticos históricos de la Patria. La legalidad consagrada en la Constitución de 1925 es el factor que permite la convergencia de todos los chilenos democráticos. Solamente el respeto pleno a esos derechos crea las condiciones para construir legítima y sólidamente un nuevo ordenamiento democrático.

Hacemos un llamado al Grupo de Estudios Constitucionales a poner todo su esfuerzo, reflexión y estudio en la reivindicación de los derechos democráticos históricos, en cuya lucha está empeñado todo el pueblo de nuestra Patria, lucha que recibe el apoyo generoso de las mayorías democráticas de todos los pueblos de la tierra.

Por otra parte es preciso tener en cuenta la grave crisis a que ha sido arrastrado el país por el fascismo. Como lo señala la Unidad Popular "Pinochet especula con la falsedad de que a su caída sobrevendrá el caos". Es deber común de todos los demócratas "demostrar con hechos que existen fuerzas capaces de resolver responsablemente la crisis nacional y de dirigir al país por una senda democrática renovada". En consecuencia, este período no puede pensarse sólo como un puro tránsito hacia la reconstrucción de un orden institucional. Se hará necesario resolver la grave crisis económica del país y solucionar las legítimas aspiraciones económicas de los trabajadores, las capas medias y los sectores empresariales afectados por la política antinacional de la dictadura. Habrá que resolver los agudos problemas de nuestras relaciones internacionales y de seguridad nacional así como la difícil crisis de nuestras FFAA. Se hará imprescindible resolver los problemas que ha provocado la dictadura con la política de privatización de empresas estatales, de restitución de latifundios expropiados y los efectos de su arbitrariedad en todos los terrenos de la vida nacional. En particular, se hará necesario satisfacer las ineludibles peticiones de justicia por parte de quienes han sido atropellados directamente en sus derechos por la represión y juzgar los culpables.

Un gobierno de administración, que excluya a sectores significativos del país, no tendrá la fuerza suficiente para resolver con legitimidad y solidez todas estas cuestiones. Un paso en falso en estas materias sólo crearía las condiciones para un

nuevo intento autoritario y arbitrario.

Se hace necesario, por tanto, constituir un gobierno cuyo programa cuente con el apoyo de la mayoría nacional y tenga así la solidez necesaria para enfrentar la crisis. Sólo un gobierno democrático que se apoye en la legalidad derivada de la Constitución de 1925 y en el consenso nacional podrá imponer la vigencia de los derechos democráticos históricos, resolver los problemas más agudos de la crisis nacional y garantizar las condiciones de normalidad política necesarias para que los chilenos resuelvan sobre su futuro institucional.

Ese es el significado de la proposición de abrir paso a un gobierno democrático provisional hecho por nuestro partido y la Unidad Popular.

Concluimos haciendo un llamado al Grupo de Estudios Constitucionales a apoyar con su trabajo la lucha por la reivindicación de los derechos democráticos históricos de la Patria y a contribuir a abrir paso a la Constitución de un Gobierno Democrático Provisional. Solamente en estas condiciones se podrá garantizar que se evitarán los intentos golpistas del fascismo y se podrá construir legítimamente un nuevo ordenamiento democrático sólido y estable.

Saludan atentamente a Uds.

PARTIDO MAPU OBRERO Y CAMPESINO

* * *

INTERNACIONAL

NICARAGUA: UN PUEBLO QUE AVANZA HACIA SU LIBERACION

Rodrigo Andrade

Si el pueblo americano no se hubiera embotado para la justicia y para los elementales derechos de la humanidad, no olvidaría tan facilmente su pasado cuando un puñado de soldados harapientos marchó a través de la nieve dejando huellas sangrientas tras de si, para ganar la libertad y la independencia. Si sus conciencias no se hubieran endurecido por el enriquecimiento material, los americanos no olvidarían tan facilmente que una nación, tarde o temprano, por difícil que sea, obtiene su libertad y que cada abuso del poder apresura la destrucción de mismo que lo dirige.

Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte: y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán.

(Augusto Cesar Sandino. Febrero de 1928, montañas de Las Segovias).

Hace 44 años Anastasio Somoza Debayle, cumpliendo instrucciones del imperialismo yanqui, organizó el asesinato del célebre patriota y democrata nicaraguense Augusto Cesar Sandino, quien desde entonces ha sido el símbolo y el ejemplo más fiel y legítimo que inspira la prolongada lucha del pueblo de Nicaragua por alcanzar la libertad y la democracia.

La historia de los combates de Nicaragua por su liberación es una larga historia de sacrificios y de indolegable voluntad de resistir y vencer. La lista de los caídos, la dimensión del martirio y la saña de la represión y de los crímenes es de las más impresionantes que existen en América Latina, un continente donde la violencia explotadora, pero también la lucha heroica de los pueblos, cuentan ya con una tradición de siglos.

UN PAIS PROPIEDAD DE UNA FAMILIA

Hace más de cuarenta años que en Nicaragua, con una población de 2.559.000 habitantes, el poder está en manos de una familia: los Somoza.

Durante este ya prolongado y sangriento período el clan de los Somoza ha constituido, a través del fraude y la violencia, un monopolio económico de grandes proporciones. Por otra parte, es conocida la cínica afirmación del fundador de la dinastía Anastasio Somoza Debayle: "Nuestra Administración se basa en la política de la triple P: plata para los amigos, plomo para los enemigos y palos para los demás".

En Nicaragua no hay prácticamente ninguna rama de la industria en la cual los Somoza no estén representados.

Ellos controlan, directa o indirectamente, el 80% de la economía nacional y les pertenece en propiedad más de un tercio de la superficie agrícola cultivable.

Su vasto imperio se integra con más de 120 empresas, plantaciones de azúcar, algodón y café, así como con grandes extensiones de tierra dedicadas a la crianza de vacunos. También poseen refineries de azúcar, industrias textiles, frigoríficos, minas, la única compañía naviera de América Central, la línea aérea LANICA, el diario Novedades y diversas publicaciones, estaciones de radio y televisión, hoteles, propiedades agrícolas y miles de viviendas solamente en Managua. Son propietarios además del monopolio de la construcción en el país y controlan el consorcio CARIBE-MOTORS, filial de la Mercedes Benz, y el Banco de Centroamérica.

Por si todo esto no fuera suficiente los Somoza han extendido sus tentáculos fuera de las fronteras. En Costa Rica poseen alrededor de 40.000 hectáreas agrícolas y participan con gruesas sumas de capital en incontables empresas extranjeras, incluso en los EE.UU. En cuatro decenios de dominio han acumulado una fortuna que se calcula en más de mil millones de dólares.

LA PRESENCIA DEL IMPERIALISMO

Los Somoza que han expoliado con saña brutal a Nicaragua son a la vez del símbolo de un entreguismo sin límites, son la forma lacayuna por excelencia de subordinación al imperialismo yanqui.

Llevados por éste al poder han abierto de par en par el país a la voracidad de los monopolios que se han apoderado de gran parte de sus riquezas naturales; de las explotaciones forestales, de numerosas empresas, de la industria minera y transformadora y controlan el comercio interior y exterior del país. Sus nombres, United Fruit Co., Brown Williampon Tobacco de Louisville, United Brands, Exxon, Atlas Chemical, Asarco, Noranda Mines Toronto...

En el marco general de una América Latina a la que sueña con mantener como "su patio trasero y su retaguardia más segura", Nicaragua tiene para el imperialismo un significado especial:

- Por su estratégica ubicación geográfica cualquier transformación social en Nicaragua tendría efectos en los países vecinos.
- Los Somoza han sido siempre servidores incondicionales de los intereses estratégicos del imperialismo. Es útil recordar el ofrecimiento de tropas de la Guardia Nacional para ser enviadas a Corea y Vietnam.
- Como consecuencia de los éxitos de la lucha del pueblo panameño por su soberanía, la posibilidad para los EE.UU. de contar con un canal interoceánico a través de Nicaragua adquiere mayor relevancia.
- Una salida democrática consecuente en Nicaragua haría perder al imperialismo un punto de apoyo de gran importancia para sus acciones contrarrevolucionarias contra otros países latinoamericanos.
- Las inversiones de capital de los monopolios norteamericanos alcanzaron en 1976 la cifra de 2.065 millones de dólares.
- Por la riqueza del país en materias primas y dado el aumento de sus precios en el mercado internacional, EE.UU. considera a Nicaragua como una reserva estratégica.

Cuanta razón asistía a Augusto Cesar Sandino cuando en 1928 afirmaba: “Los yanquis son los peores enemigos de nuestros pueblos, y cuando nos miran en momentos de inspiración patriótica y que nos buscamos con sinceros impulsos de unificación, ellos remueven hondamente nuestros asuntos pendiente, de manera que se encienda el odio entre nosotros y continuemos desunidos y débiles y por lo mismo fáciles de colonizarnos... Estamos en pleno siglo XX, y la época ha llegado a probar al mundo entero que los yanquis hasta hoy pudieron tener tergiversada la frase de su lema. Hablando de la Doctrina Monroe, dicen: América para los americanos. Bueno, esta bien dicho. Todos los que nacemos en América somos americanos. La equivocación que han tenido los imperialistas es que han interpretado la Doctrina Monroe así: América para los yanquis...”

UN PROCESO LARGO Y MULTIFORME

La expoliación imperialista y la acción de la dinastía de los Somoza han convertido a Nicaragua en una vitrina del desastre económico y social. Con una de las rentas por habitante más baja del mundo, su economía, de por sí atrasada, sufre en los últimos años un estancamiento completo.

El porcentaje de fondos para la represión llega al 70% del gasto público. La desocupación alcanza a 250.000 personas en una población de 2.5 millones de habitantes. El empobrecimiento del país alcanza límites insostenibles. Más de 300.000 nicaraguenses viven en poblaciones marginales, el 65% de la población es analfabeta y el 40% de los niños entre 7 y 12 años no reciben ningún tipo de educación. Por cada 10.000 habitantes hay en Nicaragua solamente 6 médicos y el promedio de vi-

da de la población se calcula en 35 años.

Y podríamos seguir. Estamos ante la gran tragedia del pueblo nicaraguense, que lucha desde los tiempos de Sandino, con heroísmo ejemplar, por el rescate de la democracia, por la recuperación de la independencia nacional y por el progreso social.

El conjunto de la situación, en su dramatismo, ha creado nuevas condiciones materiales y subjetivas para que el proceso liberador continúe su marcha en Nicaragua.

A pesar de tantos años de poder absoluto, el clan de los Somoza, no logró terminar con la oposición democrática.

A partir de 1977 las acciones de las fuerzas democráticas han ido adquiriendo una mayor amplitud y profundidad. Se activó el Frente Sandinista de Liberación Nacional fundado en 1962 y denominado así en honor del destacado combatiente por la independencia que en 1927 encabezó la lucha armada contra las tropas norteamericanas que habían ocupado el país.

A lo largo de su historia ha sufrido algunas derrotas militares. La más conocida, y que marca un cambio de orientación, fue la de 1967 en la base guerrillera de Pancasán. Inicia entonces un período de autocrítica y de preparación para nuevas ofensivas políticas y militares. El FSLN tiene en su seno tres tendencias: a) una que se identifica en la “guerra popular prolongada” a partir del campo; b) otra que se denomina “línea proletaria” que propicia la formación de un partido obrero fundamentalmente urbano; y c) la tendencia “tercerista” que postula la insurrección nacional contra Somoza en base a un amplio frente social y político. Este último es el grupo dominante. El momento álgido del conflicto entre las tendencias fue en los años 1974 y 1975. Desde entonces se ha producido un proceso de progresiva unificación en el terreno de la acción, especialmente a partir de la ofensiva que lanzó el FSLN en octubre de 1977, que marcó el predominio de la línea de la insurrección nacional. En junio de 1978 se logra un acuerdo político de fondo de las tres corrientes, que según Daniel Ortega (máximo representante de la tendencia tercerista) consiste fundamentalmente en tres puntos: impulsar una campaña contra el sectarismo, “formular y desarrollar conjuntamente en el marco de un proceso unitario, las tareas revolucionarias fundamentales encaminadas a desencadenar la insurrección armada para el derrocamiento revolucionario de la dictadura somocista y combinar nuestras fuerzas políticas y militares dentro de un Plan de Emergencia destinado a desbaratar o neutralizar las maniobras del imperialismo, la burguesía y del régimen dinástico, para imponer una salida reaccionaria a la crisis política de la dictadura militar” (Entrevista concedida a la revista Alternativa N. 189 - 1978).

Por su parte, la Unión Democrática de Liberación (UDEL), fundada en diciembre de 1974, coalición que agrupaba siete partidos, desarrolla a partir de 1977 importantes acciones de resistencia contra Somoza. Formaba parte de UDEL el Partido Socialista de Nicaragua (Partido Comunista), que desde 1947 lucha contra Somoza basándose en su ascendencia en importantes sectores obreros. En los últimos meses se ha logrado, por primera vez, un acuerdo entre el FSLN y PSN. En enero de este año

es asesinado el líder del UDEL y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, lo que provoca una fuerte conmoción en el país e incluso en el extranjero. La familia y organizaciones de diversas orientaciones políticas culpan directamente al dictador.

Asistimos así a una significativa lucha popular que se asienta en un amplio proceso de unificación de todas las fuerzas democráticas y en el avance de la capacidad combativa de las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Son los momentos altos que surgen cuando las agudas contradicciones sociales explotan en todas sus expresiones. Son los frutos de un proceso que se va moldeando con trabajo paciente y profundo en las entrañas de la sociedad nicaragüense. Son los resultados de una lucha permanente de los sectores de vanguardia desde hace más de 50 años. Son las huelgas; las manifestaciones de masas; las guerrillas; la ofensiva de los trabajadores, campesinos y estudiantes; la difícil organización de las Centrales Sindicales; en fin, son las fuerzas sociales que conforman el cauce amplio de una revolución y que van madurando en el contexto de un proceso que no es lineal, sino por el contrario multiforme y por momentos contradictorio.

PARO NACIONAL, OFENSIVA INSURRECCIONAL Y REPRESION

El día del entierro de Joaquín Chamorro las organizaciones de empresarios y comerciantes decretan el cierre de sus establecimientos, el cual se transformó luego en un verdadero paro empresarial. Se rompe el “diálogo nacional” iniciado a través de una comisión mediadora luego de la ofensiva sandinista de octubre de 1977. Los sindicatos apoyan el “paro nacional” antisomocista. Algunos de los dirigentes de los gremios de la “burguesía opositora” se niegan a solicitar la renuncia de Somoza y éste se esfuerza por abrirse al diálogo llamando a la Cámara de Comercio; al rechazar ésta el diálogo, Somoza reorganiza un Comité Nacional de Emergencia que adopta medidas de represión en contra del Paro, usando la Guardia Nacional. A la segunda semana del Paro General, comienzan las actividades de resistencia y el FSLN ataca los cuarteles de Rivas y Granada (2-3 de febrero 1978). Se generalizan manifestaciones callejeras en contra de Somoza. La represión logra detener la lucha popular. Somoza se compromete a dejar el poder en 1981 y promete una serie de reformas sociales y de diálogo con la oposición. Pero la resistencia no ha sido vencida.

Entre febrero y agosto se suceden vertiginosamente los acontecimientos de resistencia: alzamiento y masacre en Monimbo, huelga de hambre de presos políticos, huelga estudiantil nacional, toma de la Curia Arzobispal por los campesinos, huelga de hambre de los periodistas, retorno del grupo de los Doce, compuesto por destacadas figuras democráticas. Surge el Frente Amplio de Oposición (FAO) en septiembre de 1978, aglutinando a UDEL, el grupo de los DOCE (que tiene es-

trechos vínculos con la tendencia tercerista del FSLN). Se elabora un programa político unitario para un período de transición post-Somoza. Por otra parte, se observa un proceso de unificación de las fuerzas de izquierda en el Movimiento Pueblo Unido (MPU), donde convergen organizaciones estudiantiles, sindicales y partidos. Se realizan numerosas acciones unitarias entre el MPU y el grupo de los Doce. Por su parte el Episcopado Nicaraguense emite un pronunciamiento muy crítico contra el régimen. En este contexto, fracasan los intentos de Somoza por llegar a un acuerdo con los sectores de empresarios y comerciantes más pudientes.

El 22 de agosto el FSLN, tendencia tercerista, lanza el ataque al Palacio Nacional, capturando a una serie de personajes ligados estrechamente a Somoza y pidiendo, en cambio, la liberación de presos políticos. La acción causa un gran impacto. Somoza se ve obligado a ceder. Así se inicia, en los hechos, la masiva ofensiva insurreccional del mes de septiembre. El 25 de agosto se produce además un nuevo Paro Nacional convocado por el FAO y el MPU con el objetivo preciso de obtener el derrocamiento de Somoza. El cierre del comercio en provincias es total y en Managua alcanza un alto porcentaje. Somoza reacciona con violencia en contra de los dirigentes gremiales y sindicales.

Esta formidable y generalizada rebelión popular despertó toda la furia de la dictadura somocista, la que descargó en forma indiscriminada su fuerza contra la población civil, incluso llegando al bombardeo de ciudades y pueblos, violando toda las normas de respeto a la vida humana.

El 15 de septiembre el Consejo Presbiterial de Managua y la Conferencia Nacional de Religiosos se dirigen en carta pública a Carter donde denuncian “que el pueblo de Nicaragua está sufriendo una represión cuya intensidad jamás había sido alcanzada... esta situación — afirma — tiene su causa última en la violencia institucionalizada sobre la que se sostiene el gobierno actual... Nuestra preocupación aumenta en caso de que el régimen del General Somoza continuara en el poder: ante su imposibilidad de realizar cambios significativos en el país, la única vía para sostenerse en el poder es la coersión sangrienta. En cuanto tal, es un régimen portador de muerte”. La carta termina exigiendo a Carter que deje de prestar ayuda a Somoza.

Somoza, sin embargo, como él mismo lo declarara, cuenta con muchos amigos influyentes en los EE.UU. La administración de Carter se limita a proponer una comisión mediadora, lo que provoca una dura crítica por parte del gobierno de Venezuela. Por otra parte, aumenta la tensión entre Costa Rica y Nicaragua, por las constantes violaciones del territorio por parte de las tropas somocistas. En ciertos momentos se teme una internacionalización del conflicto, que haría entrar en funciones al Condeca (Consejo de Defensa Centroamericano), donde predominan los regímenes represivos favorables al somocismo. Este apoyo se ve contrapesado por el fuerte repudio manifestado en contra de Somoza por los Regímenes de Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica y, ciertamente, Cuba. La crisis de Somoza plantea, de hecho, un conflicto de cuya resolución depende, al menos en parte, el equilibrio de fuerzas existente: en la región de Centroamérica y el Caribe. De allí que la

opinión pública mundial preste gran atención a la crisis nicaragüense.

Los acontecimientos de Nicaragua y en especial la heroica ofensiva popular, despertaron la admiración y el respeto del conjunto de las fuerzas democráticas del mundo. Y no son pocos los que hoy se preguntan porque a pesar del aislamiento interno, del alto grado de combatividad alcanzado por las masas y del repudio internacional, Somoza aun se mantiene en el poder. La respuesta es hoy clara.

Se mantiene solamente por el apoyo que recibe del Gobierno norteamericano, en especial de la CIA y el Pentagono, que le entregan colaboración militar directa o a través de otros gobiernos reaccionarios del continente, en especial los regímenes de Guatemala, El Salvador, Argentina y Chile.

Mientras el FSLN prepara una nueva ofensiva insurreccional, Somoza continúa en un doble juego: por una parte, reprime sin piedad ni límite, como lo ha comprobado la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y, por otra, participa en conversaciones con algunos sectores de la oposición. El grupo de los Doce se encuentra asilado en una embajada y la oposición no está unida sobre el tema de las conversaciones con Somoza, ni sobre su orientación. EE.UU. presiona porque el dictador acepte la realización de un plebiscito, controlado internacionalmente, que decida el futuro político del país. Somoza ha accedido, pero bajo la condición de presidir él el plebiscito, lo que abriría las puertas para la realización de nuevos fraudos, como lo demuestra la historia de Nicaragua. Por su parte los sectores de oposición que conversan con el régimen exigen la dictación de una amplia ley de amnistía que beneficiara incluso a los líderes sandinistas presos.

UNA EXPERIENCIA HISTORICA PARA REFLEXIONAR

El conjunto de acontecimiento que ocurren en Nicaragua constituyen un material sobre el cual es necesario reflexionar porque contiene elementos de gran valor para la lucha de nuestros pueblos.

Si bien resultaría absurdo y contraproducente ignorar las particularidades que distinguen los procesos en nuestros países, resultaría más absurdo y peligroso aún no constatar los problemas comunes que enfrentamos en el continente.

El primer elemento que unifica nuestra lucha es la presencia del imperialismo norteamericano y su voluntad histórica de detener y revertir el proceso revolucionario latinoamericano. Por otra parte son problemas comunes el carácter democrático y antimperialista de nuestra lucha, la necesidad de las grandes transformaciones agrarias y la necesaria repercusión de la lucha de cada pueblo en todo el continente. Es por esto y mucho más, que más allá de las particularidades los pueblos de América Latina están llamados a resolver, por diversos caminos, un proceso común revolucionario. Y es bajo esa óptica que debemos analizar la heroica lucha del pueblo hermano de Nicaragua.

Por otra parte y como lo señalara el compañero Roberto Veiga, Secretario de

Central de Trabajadores de Cuba: “la resistencia popular al generalizarse contó en los primeros momentos con cierta dosis de espontaneidad en las masas que, sin preparación militar adecuada y sin un mando centralizado orgánicamente, se enfrentó a los aviones, los tanques y los modernos fusiles de la Guardia Nacional Somocista con palos, piedras, cocteles Molotov y algunos revólveres y rusticas armas de caza, pero con el coraje y la decisión de un pueblo que se decide a dar la batalla por una patria libre”.

La lucha del pueblo nicaragüense tiene por delante, al igual que la del resto de los pueblos de América Latina un difícil camino que recorrer. La lucha de las masas en los últimos meses y las acciones militares del F.S.L.N. no han significado todavía el derrocamiento de la dictadura pero la han debilitado considerablemente y han sido un paso de gran significación en el proceso hacia su derrota definitiva.

Es también importante evaluar la significación histórica de una lucha que no se ve empañada por el hecho de que la contrarevolución nacional e internacional la haya obligado a un retroceso momentáneo. Esta lucha muestra que a pesar del terror fascista, en América Latina prosigue y se desarrolla la acción combativa de los pueblos. Se ha demostrado que una política justa y flexible es capaz de producir una unidad profunda del pueblo y que a ella pueden y deben concurrir junto a la clase obrera y los campesinos otras capas y clases afectadas objetivamente por la política de los monopolios y el imperialismo. Se ha demostrado, además, que cuando la unidad amplia existe y la caída de la dictadura se impone a las grandes mayorías como una necesidad objetiva, la lucha armada y la lucha de masas, lejos de ser vías excluyentes, se complementan hacia un mismo fin.

Una segunda comprobación es la que surge de la intervención política directa y militarmente indirecta del imperialismo. Esto ha desnudado una vez más su esencia reaccionaria y su voluntad explícita de no autolimitarse y reconocer un más ancho espacio a la autodeterminación de las naciones latinoamericanas. El imperialismo yanqui considera a América Latina como núcleo interior de su estrategia mundial y en esta perspectiva desarrolla hacia el continente una política global que abarca los aspectos económicos, políticos y militares, sin perjuicio que también busque actuar frente a cada país aisladamente.

Estos hechos y la lucha creciente de nuestros pueblos por la democracia y el socialismo marcan el carácter agudo de la confrontación latinoamericana.

Un tercer elemento que surge de la experiencia nicaragüense es la visualización concreta de las enormes posibilidades que surgen — más allá de los deseos del imperialismo — para la implementación exitosa de nuestra política, sin por ello caer en la subestimación de las fuerzas reales que todavía conserva el enemigo interno y externo. En este plano se destaca la necesidad de desarrollar a los partidos de la clase obrera y sobre la base de los principios científicos saber encontrar en cada realidad concreta y en cada momento específico los mejores caminos y métodos para concertar el esfuerzo y la lucha de todos los sectores democráticos.

El frente de lucha por la democracia y el socialismo se ha ampliado considera-

blemente. La capacidad de los partidos de la clase obrera para aprovechar las nuevas posibilidades y ser capaces de unir a todas las fuerzas susceptibles de participar en la lucha democrática y antimperialista se convierte en la premisa principal para que estos partidos se transformen en fuerza política real.

Finalmente cabe señalar que Nicaragua ha puesto de relieve el alto grado de internacionalización que la lucha de clases ha alcanzado también en América Latina. Esto dice relación con los esfuerzos mancomunados de la contrarrevolución y por tanto confirma la necesidad de la más amplia unidad de nuestros pueblos. El internacionalismo proletario y la solidaridad internacional son pues núcleos fundamentales de la labor teórico-práctica de nuestros partidos.

Sobre esta base es que podemos afirmar — sin caer en la retórica — que Nicaragua no está sola en su lucha, pues en ella se expresan los anhelos de libertad, bienestar social y democracia de las más amplias mayorías latinoamericanas, y en ella se expresan, además, los combates de otros pueblos que, de diferentes formas mantienen en alto sus banderas de lucha por una verdadera y definitiva independencia.

* * *

BREVE REFERENCIA DE NICARAGUA

(Desde la Independencia de España hasta 1978)

- 1821: 15 Sept. En la ciudad De Guatemala (la Antigua) la Capitanía General (o Reino) de Guatemala, proclama oficialmente su independencia de España, tras haberlo hecho los Virreinos de Nueva España y Nueva Granada.
- 1822: Mayo. Agustín ITURBIDE, representando al sector oligarca conservador, proclama la anexión de Centro-América al Imperio Mexicano.
- 1824: Se redacta la Constitución del 22 de Noviembre que crea la “República Federal de Centro-América”.
- 1838: La “Federación”, que se había ido disgregando en “Provincias Unidas de América Central” y más tarde, en “Estados Federados”, se convierte finalmente en las cinco “repúblicas”: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica (La República de Panamá fue proclamada más tarde, el 4 de nov. de 1903, por disgregación de Colombia).
- 1850: Tratado de CLAYTON-BULWER, por el que se determina que ningún canal podía ser construido o controlado por Estados Unidos o Inglaterra.

- 1851-55: Luchas entre Conservadores y Liberales.
- 1856: William WALKER, norteamericano y con el reconocimiento diplomático de su país, captura la ciudad de Granada y se declara, unilateralmente, Presidente de Nicaragua.
- 1857: Es derrocado W. WALKER y sigue una serie de Gobiernos Conservadores durante 30 años.
- 1867: El gobierno Norteamericano, violando el tratado de Clayton-Bulwer, firma un acuerdo directo con el gobierno de Nicaragua, por el que obtiene derechos exclusivos de tránsito y la autorización para transportar tropas y municiones a través del país, para “proteger la ruta”.
- 1893-1909: “Reforma Liberal” de José SANTOS ZELAYA. Anexión del litoral atlántico, ocupado por Inglaterra (“Reino de Mosquitia”). Consolidación del poder económico y político. Fortalecimiento de las instituciones y leyes del Estado. Apertura a la inversión privada extranjera.
- 1910: Apoyados por Estados Unidos, vuelven al poder los Conservadores: Adolfo DIAZ y Emiliano CHAMORRO. Gran oposición de los Liberales (guerra civil).
- 1912: Intervención de 2700 MARINES norteamericanos en apoyo de Adolfo DIAZ. De ellos, 120 permanecen en el país hasta 1925 en calidad de “Misión de Custodia” (Legation Guard).
- 1916: Tratado BRYAN-CHAMORRO. A cambio de 3 millones de dólares, Estados Unidos obtiene derechos exclusivos para construir un canal y una base naval en el golfo de Fonseca.
- 1913-24: Resistencia popular. Al menos 10 levantamientos armados y varias huelgas importantes contra compañías norteamericanas.
- 1924: El fraude electoral hace estallar de nuevo la guerra civil.
- 1926: Segunda intervención militar de Estados Unidos en apoyo de E. CHAMORRO.
- 1927: Se firma un tratado de paz, a cambio de elecciones en 1928, supervisada por los Estados Unidos. Todos los líderes del Ejército Liberal aceptan el tratado excepto CESAR AUGUSTO SANDINO, que lo calificó de “traición a la patria”. Durante seis años, las tropas militares estadounidenses combaten — incluyendo bombardeos aéreos — al Ejército para la Defensa de la Soberanía Nacional Nicaragüense, dirigido por SANDINO.

- 1932: Nuevas elecciones, de las que sale "elegido" Presidente Juan Bautista SACASA.
- 1933: Se retiran los marines de Estados Unidos, dejando bien entrenada a una "guardia civil imparcial", que sirviera de árbitro y "estabilizara" la vida política de Nicaragua: LA GUARDIA NACIONAL, a cuyo frente el Embajador Norteamericano puso al joven General Anastasio SOMOZA GARCIA.
- 1934: 21 Febrero, SANDINO es asesinado por orden de A. SOMOZA. Al día siguiente, más de 300 familias de campesinos, vinculadas a las cooperativas sandinistas, fueron masacradas.
- 1936: Con el apoyo norteamericano, Somoza destituye a SACASA y manipula su propia "elección".
- 1938: Para consolidar más su posición, SOMOZA convoca a una Asamblea Constituyente, con el fin de modificar la Constitución y extender su término presidencial hasta 1946.
- 1944: La posición de Somoza se vio amenazada por un movimiento organizado por el General Carlos PASOS; la ayuda estadounidense lo mantuvo en el poder.
- 1947: Forzado por algunas corrientes democráticas, Somoza convoca elecciones generales que son ganadas por su propio candidato, el liberal Leonardo ARGUELLO. Este duró 27 días en el poder. Al primer intento de actuar independientemente, fue derrocado por el propio Somoza. Duras represiones. Los sindicatos y el P.S.N. son declarados ilegales.
- 1948: Pacto de Somoza con la oposición. Falla un intento de invasión, desde Costa Rica, conducido por ARGUELLO con la participación de la Legión del Caribe y con la ayuda de J. FIGUERES, Presidente de Costa Rica. Edelberto TORRES, baluarte de la resistencia en el exilio, es arrestado, cuando volaba de Guatemala a Costa Rica, y encarcelado por la Guardia Nacional, al aterrizar el avión de PANAM en Managua — escala no prevista en el vuelo —.
- 1950: Somoza pacta con la oposición Conservadora, Emiliano Chamorro, quedando libre de ser reelegido para el período 1951-1957. Luis Somoza Debayle es nombrado presidente de la Asamblea Constituyente y luego de la Cámara de Diputados.

- 1954: Abril. Falla un nuevo intento de invasión desde Costa Rica para asesinar a Somoza. Los participantes fueron capturados y fusilados o encarcelados.
- 1956: 21 Septiembre. El poeta Rigoberto LOPEZ PEREZ asesina a Tacho SOMOZA. Sin embargo, el poder lo asumen los hijos de Tacho, Luis y Tachito, como presidente provisional y jefe de la Guardia Nacional respectivamente.
- 1957: Luis Somoza se "autoelige" Presidente. En el mes de noviembre, se descubre y desmantela un complot civil-militar dentro de Nicaragua.
- 1958: Abril. Fracasa un intento de invasión por parte de exilados nicaragüenses de Honduras y Costa Rica. Protestas de obreros y estudiantes. Octubre: el veterano sandinista Ramón RAUDALES, al mando del "Primer Ejército de Liberación de Nicaragua", intenta penetrar desde Honduras, realizando operaciones de guerrilla, cerca de la frontera. Fracasa al cabo de varias semanas y es asesinado en un choque con la Guardia Nacional.
- 1959: Mayo-Junio. Otro intento fracasado de invasión desde Costa Rica, protagonizado por Enrique LACAYO FARFAN, al frente de una coalición de grupos antisomocistas. Su objeto era establecer un "foco" guerrillero. Otro grupo, organizado desde Cuba, nunca llegó a Nicaragua.
- 1960: La juventud gana el control del Partido Conservador y prepara un levantamiento que, de nuevo, fracasa. Desde fines del 1959 y durante todo el '60 continúan los levantamientos y las pequeñas invasiones, como parte de un movimiento organizado, el núcleo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En noviembre, los levantamientos son de mayor envergadura y en ellos están implicados los líderes del Partido Conservador. Los rebeldes capturan dos guarniciones de la G.N. El gobierno norteamericano envía refuerzos para ayudar a sofocarlos.
- 1962: Fundación formal del F.S.L.N.
- 1963: Febrero. Al término del período de Luis Somoza, es "elegido" presidente René SCHICK. Los partidos legales de la oposición rehusan participar en el gobierno. Tachito, poder real detrás de Schick, inicia su campaña para las elecciones de 1967. Choque del FSLN con la GN en los ríos COCO y BOCAY.

- 1967: Enero. Una coalición opositora dominada por el Partido Conservador presenta la candidatura de Fernando AGUERO, que recibe el apoyo de manifestaciones masivas callejeras en Managua, reclamando elecciones honestas. La G.N. dispara sobre las manifestaciones dejando más de 60 muertos y muchos heridos. Después de la toma del Gran Hotel — y de la captura de visitantes como rehenes —, el Gobierno controla la situación, encarcela a algunos de los líderes de la oposición y los restantes se esconden (como AGUERO) o buscan asilo en la Embajada de Estados Unidos.
Febrero. Tachito es “elegido” Presidente para el período 1967-72. La presión ejercida por Estados Unidos sobre el Partido Conservador para que apoyara a Somoza y formara un frente unido contra la “amenaza” del FSLN, conduce a un pacto entre el gobierno y la oposición.
El FSLN se enfrenta a la GN en PANCASAN.
- 1970: Huelga del Sindicato de Maestros, sofocada violentamente por las tropas de Somoza.
Ocupación de iglesias para solicitar al gobierno la libertad de los reos políticos.
Crisis en la Universidad Centro-Americana (U.C.A.).
- 1971: El Embajador de los Estados Unidos, Turner SHELTON, ayuda a mantener el pacto entre Somoza y los Conservadores, a los que se les garantiza el 40 por ciento de los escaños para las elecciones de 1972. Somoza “renunciaría” a la presidencia y un triunvirato dominado por la dictadura gobernaría durante el período 1972-74, con el fin de permitirle a Somoza la candidatura de nuevo en 1974.
- 1972: Aumentan las protestas estudiantiles, las huelgas y las manifestaciones por el alza del costo de la vida.
Diciembre: Terremoto de Managua que arroja un saldo de 10.000 muertos, 20.000 heridos y deja a 250.000 personas sin techo.
- 1973: Después del terremoto, Somoza asume el poder absoluto. Agüero es obligado a abandonar el Triunvirato. El Partido Conservador se divide a raíz de desacuerdos sobre la participación en el Gobierno.
Noviembre. Se forma una nueva coalición opositora en preparación de las elecciones de 1974. Fuerte represión.
- 1974: Campaña electoral con el ala PAGUAGUA (“Zancudo”) del Partido Conservador desafiando a Somoza, mientras otros 27 líderes de la oposición conducen un boicot, contra las elecciones a través de un manifiesto “No hay por quien votar”.

Septiembre. Somoza es “elegido” fraudulentamente. Más del 50 por ciento de abstenciones. El grupo de los 27 es privado de sus derechos políticos hasta marzo del '75.

Diciembre. Somoza asume el mando. La oposición forma la coalición de Unión Democrática Liberal (UDEL), encabezada por Pedro Joaquín CHAMORRO, editor del diario LA PRENSA.

27 Diciembre: el FSLN, tras capturar en una fiesta a los asociados más próximos de Somoza, exigió la publicación de un amplio comunicado de denuncia de la situación del país y la liberación de prisioneros del FSLN.

- 1975: Se intensifican los choques del FSLN con la GN. Continúa el malestar obrero y estudiantil, así como las luchas campesinas.
Se decreta la Ley Marcial. Suspensión de las garantías constitucionales. Se constituye el arbitrario Tribunal Militar para juzgar todo aquello que tiene que ver con el FSLN, en especial con el hecho del 27 de diciembre de 1974.

1976-77: La escalada de la represión y la enfermedad del Dictador desencadenan progresivamente la crisis más seria del Somocismo.

* * *

PARTIDO

REDOBLAR EL ESFUERZO UNITARIO POR LA DEMOCRACIA Y LA PAZ

A continuación transcribimos el texto de la Declaración emitida por el Mapu OC en su última reunión de la Comisión Exterior realizada en La Habana.

3 Noviembre 1978

1.— Chile vive horas difíciles. La persistencia de la crisis profunda en que el fascismo ha hundido al país, amenaza la seguridad externa y está destruyendo toda forma de convivencia nacional.

Los últimos días han sido testigo de una nueva escalada de violencia fascista, surgida principalmente en contra del movimiento obrero.

Primero fue la disolución de un gran número de Confederaciones y Federaciones Sindicales y la detención y persecución de dirigentes; luego ha venido el intento de crear, a través de una elección sorpresiva, llena de restricciones fraudulentas, una nueva organización sindical subordinada al fascismo. En la lógica de Pinochet y de los monopolios, luego de las limitaciones laborales en el nuevo Código del Trabajo y del ataque a las mínimas garantías de salarios, inamovilidad y previsión social a través del Plan Kelly, lo que correspondía ahora era borrar todo vestigio del movimiento sindical democrático. El fascismo necesita institucionalizarse en todos los planos para recuperar su estabilidad, contener su aislamiento y detener los avances de la oposición democrática. Para ello ha lanzado un proyecto de Constitución que en los hechos priva al pueblo de su soberanía y da origen a un estado vertical y fascista. La imposición de dicha institucionalidad supone desarticular previamente toda organización democrática para reemplazarla por otra de tipo corporativo, que obedecer servilmente. No es casual en este objetivo estratégico de Pinochet que el movimiento obrero sea el blanco principal. El ha sido en todos esos años lo más organizado y consciente de la resistencia al fascismo.

El país vive, de modo cada vez más intenso, la dramática contradicción entre un estado fascista y militar, al servicio de un reducido grupo de empresarios cada vez más alejados de la nación y apoyados sólo en la fuerza, y la comunidad nacional, de profunda evocación democrática, que día a día se hace más activa, se or-

ganiza y lucha por dar a Chile un destino diverso del que Pinochet pretende imponerle. Manifestaciones de esta voluntad de los chilenos han sido las jornadas de lucha que en los últimos meses han protagonizado los trabajadores del cobre y del acero, el rechazo generalizado al proyecto institucional de la dictadura y al Plan Kelly, y, en estos días, la solidaridad de todas las demás organizaciones sindicales, los partidos políticos, la Iglesia, el movimiento estudiantil y toda la ciudadanía democrática, hacia las Confederaciones y Federaciones víctimas de la represión dictatorial.

Ya han pasado los días en que Pinochet podía dar un golpe y luego hundir el país en el silencio. Hoy no puede eliminar de una plumada la organización y la actividad democrática, a no ser por la vía de una nueva "Guerra Interna" generalizada cuya insensatez sería evidente para todos, particularmente en las circunstancias dramáticas que el país vive desde el punto de vista externo.

2.— En efecto, la situación interna se ubica en el contexto internacional más difícil que el país haya enfrentado en este siglo. Las relaciones entre Chile y Argentina se han deteriorado hasta el punto de existir el riesgo de un conflicto bélico que sólo puede acarrear ruina y destrucción.

Entre Chile y Argentina han existido muchas veces problemas limítrofes. Si bien han habido ocasiones en que fuerzas reaccionarias de ambos países intentaban enfrentar a través de esos problemas a nuestro pueblo, a la larga ellos se habían ido resolviendo en base al derecho, al respeto de los tratados suscritos legítimamente y a la convicción de que la búsqueda de soluciones pacíficas es lo único que sirve a los intereses de ambas naciones.

No es pura casualidad que cuando en estos países existen regímenes fascistas y dictatoriales, existe una situación diversa. El gobierno de Videla pretende resolver sus problemas internos desconociendo un fallo internacional inapelable y creando en su país un foco alarmista que carece de toda justificación. Para ello aprovecha la precaria condición en que Pinochet ha sumido a Chile. Chile no está en condiciones de enfrentar la situación como podría hacerlo un gobierno democrático que contara con un mínimo de consenso nacional. Si el país tuviera la posición internacional fuerte que siempre tuvo, si su economía no estuviera en ruinas, si su población no se encontrara sometida hace 5 años al hambre y la represión, si la unidad nacional no estuviera gravemente dañada, el conflicto no habría alcanzado jamás las dimensiones que hoy tiene. Nuestro país, sus verdaderos dirigentes, sus organizaciones populares, sus FF.AA. han sido en el pasado y serán seguramente en el futuro capaces de encontrar las soluciones pacíficas y adecuadas para defender su soberanía mucho mejor que el tirano que ha sumido al país en la desesperanza y la indefensión.

No es esta, sin embargo, la hora de lamentarse. La guerra puede y debe ser evitada. Las fuerzas democráticas de Chile y Argentina deben comprometer su empeño conjunto para impedir la catástrofe y el conflicto de consecuencias nefastas para toda América Latina. La tarea de la conciliación entre ambos pueblos, ya iniciada por las acciones conjuntas, iglesia, juventudes, organizaciones políticas, intelectuales y personalidades, debe extenderse masivamente en la exigencia de chilenos y argentinos

de que sus gobiernos renuncien expresamente a resolver sus conflictos por medio de la guerra.

3.— Para los chilenos es claro, sin embargo, que sólo el reemplazo de la dictadura de Pinochet por un gobierno democrático puede garantizar de modo estable la paz y la soberanía nacional.

Las peligrosas tensiones engendradas por la actual situación, hacen más evidente aún la urgencia de un consenso nacional, que por encima de intereses partidistas ponga en primer lugar la necesidad de expulsar del poder a Pinochet y la obligación de construir una salida política capaz de resolver la crisis, encaminar al país a la democracia y asegurar la paz.

Elemento esencial de ese consenso debe ser el acuerdo de todas las fuerzas democráticas para luchar por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente elegida una vez que la dictadura haya caído y se hayan restablecido en el país todas las libertades democráticas.

A nadie escapa, sin embargo, las dificultades que este proceso enfrentará en el camino, el país deberá encarar su democratización saliendo de la peor y más destructiva crisis de su historia, ello es lo que hace indispensable un período provisorio en que se creen las condiciones democráticas suficientes para que la Asamblea Constituyente concluya con éxito su misión. La autoridad que dirija la nación en ese período debe contar con el apoyo garantizado de la mayoría del país.

Ese es el contenido central de nuestra proposición para constituir en esta fase un gobierno democrático provisional integrado por todas las fuerzas civiles y militares que con su aporte hayan hecho posible la caída de Pinochet. Estamos convencidos que sólo una fórmula que cumpla esta condición podrá garantizar la estabilidad y la continuidad de la transición democrática.

Nuestro partido y las fuerzas populares han demostrado en las palabras y los hechos su plena disposición a poner todo su esfuerzo en la construcción de la unidad democrática. Ello arranca del convencimiento que la repetición de fórmulas del pasado, con todo lo que ellas tuvieran de valioso y duradero, no garantiza el enfrentamiento exitoso de los inmensos desafíos planteados a Chile.

Para que este acuerdo se concrete es indispensable que esa conciencia se generalice en todas las fuerzas democráticas chilenas. No contribuye a apresurar la caída de Pinochet ni a resolver la crisis el surgimiento de fórmulas políticas excluyentes orientadas a reemplazar al dictador por un gobierno de centro derecha. Menos aún cuando ellas se asientan en la ilusión de dividir a la UP. Estas alternativas son esencialmente precarias y no aseguran de modo real que Chile conquiste la democracia. Por nuestra parte, jamás participaremos de fórmulas basadas en la exclusión y estamos ciertos de que este predicamento es común a todos los partidos de la UP.

La voluntad unitaria que surge en estos días de todos los ámbitos de la vida nacional puede ser recogida de inmediato en iniciativas concretas. Es preciso superar los obstáculos que hasta ahora han impedido la unidad sindical, enfrentar en conjun-

to el proyecto Ortúzar, ampliar la composición y el trabajo del grupo de estudios constitucionales, para que éste sea un instrumento válido al cual se vuelque el pensamiento institucional de todas las fuerzas democráticas, defender la vida de los desahuciados, a quienes Pinochet pretende calificar de "bajas de guerra" y exigir el retorno de los exiliados. El país requiere que las fuerzas de la democracia avancen dando pasos concretos y visibles en su unidad. Creemos que ello es posible y necesario.

4.— En el enfrentamiento entre el estado fascista y la comunidad nacional democrática, las FF.AA. constituyen un punto de referencia inevitable. Bien sabemos que muchos en ella no comparten los designios de Pinochet. Los que se opusieron a él el 11 de septiembre de 1973 fueron aniquilados. Toda tentativa posterior de oposición o disenso ha sido cortada de raíz.

Pinochet necesita a toda costa FF.AA. dóciles y obedientes para utilizarla en la represión interna y en la imposición de su mando personal. Para ello no ha vacilado en purgarlas a su antojo, poniendo incluso en peligro la defensa del país. El reciente episodio de la FACH, en que para deshacerse de un antiguo cómplice, no trepidó en dismantelar todo el cuerpo de generales del arma e incluso amenazar su disolución, demuestra cuales son las verdaderas prioridades de Pinochet respecto a las instituciones armadas.

En estos años, las FF.AA. chilenas han sido cubiertas de infamia. Se les ha usado para disparar contra el pueblo, para custodiar las cárceles, para sembrar el terror, e incluso para implicarlas en crímenes cometidos más allá de las fronteras. Bien sabemos que no son el General Contreras, ni el capitán Fernández Laríos, lo más representativo del Ejército de Chile. Pero vestían uniforme cuando cometieron sus crímenes, como lo sigue vistiendo Augusto Pinochet.

Las FF.AA. deben decidir hoy más que nunca su destino como institución. Sin su concurso, Pinochet no duraría un día en el poder. Sin su concurso, también, a las fuerzas democráticas del país les sería más difícil y largo el camino de la salvación de la patria.

En la lucha por liberar a Chile cada cual debe asumir sus responsabilidades. La clase obrera ha jugado y seguirá jugando un rol determinante en la lucha por la democracia, segura que solo su ampliación y profundización conducirá al socialismo y permitirá concretar plenamente las esperanzas democráticas de nuestro pueblo.

La Unidad Popular, expresión política del acuerdo estratégico de las fuerzas populares, debe poner todo lo suyo en la elevación de la calidad política de su iniciativa unitaria en el país.

El crecimiento de su influencia nacional será siempre la mejor garantía que hará posible construir la más amplia unidad que los chilenos requieren con urgencia.

La Comisión Exterior del MAPU Obrero y Campesino agradece al PC de Cuba la hospitalidad fraternal que le ha ofrecido. Ello ha contribuido a fortalecer aún más los estrechos lazos que unen a nuestros partidos. Reafirmamos nuestro apoyo y adhesión a la Revolución Cubana, cuya conducta internacionalista eleva día a día su prestigio en el mundo entero.

LAS EXIGENCIAS POLITICAS DEL MOMENTO Y LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO

Fernando Martínez

Nuestro partido se acerca a su décimo aniversario. Es justo que, en el período que antecede a esa fecha, la preocupación por la construcción de la organización, por su rol actual y futuro, por los avances concretos que ella ha hecho en el país y en el exterior en estos años y por los objetivos que debe ponerse hacia los próximos, sea una de las más presentes entre nuestros militantes.

Estos últimos cinco años han mostrado con claridad cual es la contribución que el Mapu OC debe hacer en la dirección de la lucha antifascista. Nuestro partido ha logrado sobrevivir al más duro período represivo de la historia de nuestra patria, ha conservado su capacidad dirigente en Chile, mantiene una prensa clandestina propia que se distribuye en miles de ejemplares y que aparece con regularidad, ha desarrollado una estructura partidaria que está presente allí donde se llevan adelante las principales actividades antifascistas y que se extiende ahora por el país. Es una fuerza de la que no se puede prescindir cuando, en momentos como el actual, se discute sobre la unidad del movimiento sindical y que ha sido capaz de crear, partiendo de la práctica de masas y en las más difíciles condiciones, una organización juvenil, la UJD, que hoy es conocida y reconocida por sectores cada vez más amplios de jóvenes chilenos como una de sus vanguardias democráticas. Todo esto, sin mencionar los aportes esenciales dados por nuestro partido a la reflexión sobre la situación que vive Chile y a la elaboración de una estrategia antifascista que se plasma en nuestra línea política que se ha demostrado en estos años rigurosa y justa.

De lo que se trata hoy es de determinar cuales son los retrasos y las deficiencias que debemos superar, cuales son las tareas concretas y los objetivos que nos debemos poner para pasar a una etapa superior en el desarrollo de nuestro partido, para multiplicar su influencia en la sociedad, para convertirlo en una de las fuerzas dirigentes del país. En una palabra, para transformarlo en el partido de masas que la lucha por la democracia y el socialismo necesita en Chile.

Se trata de una tarea de gran alcance y ciertamente compleja. Más aún cuando ella se pone a la orden del día justamente cuando más arduas son las exigencias que la realidad del país impone a los partidos de la clase obrera chilena y a la Unidad Popular. Pero es justamente esa estrecha ligazón con los hechos concretos lo que hace más actual y más necesaria esa tarea. En efecto, es justamente hoy que aparece más claro el desarrollo desigual que han tenido los momentos objetivo y subjetivo en nuestra revolución democrática. No es un misterio para nadie que la Junta vive una crisis estructural, permanente, desde el momento que se rompió el bloque de poder que la impuso: es la contradicción existente entre un régimen de una minoría que gobierna sólo para sí misma, minoría antinacional que controla todas las riendas del poder sólo gracias al uso despiadado de la fuerza; y la gran mayo-

ría de la población, que se opone a su dominio, que ha expresado en estos años de manera inequívoca y creciente su repudio al régimen, que lo enfrenta cada vez más directamente, que lo acorrala y lo aísla. Esta contradicción insalvable para el fascismo, que nace del carácter profundamente regresivo de la clase principal que lo sustenta, o sea, la contraposición de los intereses monopólicos con los de todo el resto de la población, es la base objetiva en que se sustenta nuestro combate antifascista. Se puede decir que, en este nivel, lo que se ha avanzado permite a nuestro pueblo plantearse la tarea del derrocar al fascismo.

No sucede lo mismo en el terreno subjetivo. El problema puede ser visto desde dos ángulos diversos: por un lado no es aún parte del sentido común, del sentimiento diario de la gente, que la dictadura puede ser derrotada, que existe una alternativa popular por la que luchar, que ella ofrece los caminos y los métodos de lucha más efectivos y que tiene una dirección lúcida y presente en los combates de cada día. El segundo punto de vista, que es la imagen de espejo del anterior, es la dificultad real que ha tenido la vanguardia popular de sobrepasar el momento organizativo de manera plena, de pasar derechamente a la guerra de movimientos, de la que son ejemplos — aún aislados — las huelgas en el cobre y en el acero. En una palabra, de *sobrepasar* con la acción de masas la capacidad del gobierno fascista de controlar, de dominar a un país que se le opone.

Es esta en efecto la llave maestra, la clave de la situación política del país, lo que permitirá abrir efectivamente las Fuerzas Armadas y romper el monopolio que en ellas tienen los sectores fascistas, romper su aislamiento del resto de la sociedad, poner en jaque los presupuestos en los que Pinochet basa su poder omnímodo en su interior. Será *la lucha de masas*, la unidad de todas y cada una de las pequeñas luchas en la lucha global, la coherencia general que adquiera el movimiento democrático en el objetivo de *subvertir el orden fascista, de superarlo, de aventajarlo*, de quitarle la iniciativa, lo que hará dar ese salto de cualidad que hoy necesita nuestro combate para seguir avanzando.

Lo que propone nuestro partido es dar un paso más en la resistencia que se inició el 12 de septiembre de 1973. Corresponde hoy a las direcciones populares, a los partidos obreros, ser capaces de proponer a nuestro pueblo un programa por el que luchar, un camino concreto de combate que sea capaz de catalizar efectivamente en una sola, todas las expresiones democráticas y antifascistas hasta llegar, en el desarrollo mismo de la lucha, a aquellas movilizaciones que alteren efectivamente el orden fascista que hoy domina en Chile.

Esta gran tarea, que es en primer lugar de nuestra clase obrera, tiene como condición imprescindible el fortalecimiento y la superación de las dificultades que hoy se vislumbran en la Unidad Popular.

Sin un aporte cualitativamente superior de nuestra UP, sin que ella alcance la fuerza política suficiente, será difícil que se pueda construir ese movimiento de masas que nuestro partido considera condición imprescindible para derrocar al fascismo y para crear las condiciones que permitan que este no vuelva más a existir en Chile.

Es en este marco, en el que la capacidad de dirección, el momento subjetivo, está puesto en el centro de los problemas de la revolución antifascista, que la cuestión de la construcción de nuestro partido de masas, de nuestra particular contribución a la dirección del movimiento, se pone a la orden del día para nosotros. Es claro que esta no es sólo una tarea del partido nuestro ni basta con nuestro esfuerzo. Se trata de una tarea del conjunto del movimiento popular al destino del cual está ligado el de nuestro partido. Lo que interesa subrayar es el aporte que, por su crecimiento y su maduración de estos años, nuestro partido está obligado a dar en ese salto de cualidad de nuestra dirección obrera que se hace necesario para acortar los días del fascismo.

No es ni puede ser el objetivo de este artículo determinar las tareas que, en estas circunstancias, tiene por delante nuestro partido. Es este un nudo que debe ser resuelto principalmente en Chile y es esta precisamente una de las preocupaciones actuales de nuestra Dirección en el interior del país. Lo cual no quiere decir que, el partido en el exterior, sea un espectador mudo de las batallas que se avecinan. Ha sido también la práctica la que en estos años ha demostrado la contribución que puede hacer el exilio chileno a la lucha de nuestro pueblo. En el caso concreto de nuestro partido, él ha sido capaz de construir en el exterior una organización acerada, de contribuir muy significativamente a la solidaridad internacional y a la mantención de la estructura partidaria en el país.

De aquí nace la necesidad que la tarea de avanzar hacia nuestro partido de masas sea también una tarea del partido en el exterior. En primer lugar porque somos un solo partido dentro y fuera del país. En segundo lugar porque, para que los desafíos enormes que el partido tiene por delante en Chile puedan ser cumplidos, es necesario redoblar el aporte material que el partido en el exterior debe hacer a nuestro compañeros en Chile. En tercer lugar, porque el exilio y la emigración, ese enorme contingente de masas de más de un millón de personas que están fuera del país por las más distintas razones, tiene un aporte decisivo que hacer en la lucha antifascista y tiene una enorme potencialidad de influencia sobre los acontecimientos en Chile, potencialidad que aún nuestro movimiento popular no ha sido capaz de poner en tensión plenamente.

Estas exigencias que la práctica pone frente a nuestro partido son el hilo conductor de la principales resoluciones de nuestra Comisión Exterior, reunida en La Habana de noviembre '78, en lo que se refiere a la construcción del partido en el exterior. Detrás de ellas está la expresa voluntad política de homogeneizar las grandes metas que el Mapu OC se pone dentro y fuera de Chile.

1.— Un partido cuya primera tarea es el aporte en todos los terrenos a la lucha de nuestros compañeros en el país

Decíamos al comienzo que es en el terreno de la dirección, de las condiciones subjetivas, donde hoy está planteada con mayor fuerza la necesidad de avanzar de

nuestro movimiento popular. Hemos agregado también que esta tarea no se limita al país sino que está presente como una necesidad tanto dentro como fuera de Chile. Pero todo lo anterior no desmiente una verdad que sigue siendo hoy la base de toda nuestra política: es Chile el escenario de la lucha y es ahí donde esta se decidirá. La tarea de ayudar a multiplicar la lucha en Chile y la capacidad de dirección del partido en ella sigue siendo el objetivo principal, *la razón de ser* de nuestro partido en el exterior.

Es claro que este desafío se plantea en todos los terrenos. Todo lo que se pueda avanzar en el campo de la reflexión, de la elaboración, en una palabra del aporte político al interior es una contribución importante. Ya hemos señalado el rol que ha cumplido y debe seguir cumpliendo el movimiento de solidaridad con nuestro país y en él, el papel que le cabe en esta etapa al exilio. Son todas cosas a las que hay que dar una gran importancia en el trabajo de cada célula y de cada comité local.

Pero *la tarea prioritaria del momento es el apoyo material* a la lucha de nuestros compañeros en Chile. Hacer de esta preocupación el centro del trabajo de cada militante y premilitante es una necesidad imprescindible y primaria de nuestro trabajo exterior. En este sentido, la CEX ha planteado a cada Comité Local una gran tarea para 1979: completar en el curso del año de nuestro décimo aniversario, *una cuota global mínima* que sea producto de cada tarea financiera y de masas que el partido se ponga en ese determinado país. Se trata de un gran esfuerzo financiero que se transforma en un compromiso ineludible para todos los militantes del partido y al que todos deben contribuir porque, de no poder cumplirse, se hará más difícil nuestra contribución en Chile a las tareas de dirección del movimiento democrático.

2— Una política de masas para el exilio chileno

La necesidad de dar un salto adelante en la imagen y la presencia del partido en el exterior, condición indispensable para multiplicar su influencia política, pasa en el próximo período principalmente por su capacidad para elaborar una política de masas hacia el exilio chileno y para actuar en consecuencia. Los esfuerzos ya realizados en estos años entre los trabajadores de la cultura y entre los académicos, los avances objetivos y las dificultades reales encontradas en estos dos terrenos demuestran que la tarea de organización del exilio no sólo es posible sino que, una vez emprendida, realiza aportes de gran importancia a la lucha antifascista. Las dificultades tienen que ver sobre todo con la necesidad de hacer de esta una tarea unitaria que aune los esfuerzos de todos los exiliados en torno a programas y objetivos concretos y no un campo de competencia entre los partidos por su influencia en los respectivos sectores. Es esta una deficiencia que nuestro partido se esfuerza por corregir para hacer de estas iniciativas una expresión real de la voluntad de combate y del aporte concreto de los intelectuales chilenos exiliados a la lucha por la libertad.

Estas primeras experiencias de trabajo de masas deben ser generalizadas en to-

dos los terrenos en que viven y trabajan los chilenos que están fuera de Chile. Ya se hacía referencia al aporte específico que el exilio puede hacer en la lucha por alterar la situación que vive Chile. Lo que aquí interesa subrayar es que para tener una participación efectiva en la dirección del movimiento de chilenos que han debido salir de Chile, el partido debe volcarse a trabajar en este medio, a conocer los principales problemas que se presentan a los exiliados y emigrados a ofrecer un camino de solución para aquellos y sobre todo, a determinar de que modo este movimiento puede influir directamente en los acontecimientos del país.

Una relevancia particular en este sentido sigue teniendo la tarea del retorno. Es natural que el objetivo final de todos los que han debido salir de Chile deba llegar a ser el de retornar al país. Por cierto no se trata de proponer a la gente objetivos que no pueden, por razones legales y en otros casos económicas, cumplirse en un plazo breve. Se trata al revés de organizar a los chilenos en el exterior para poder cumplir de manera plena con este derecho, para exigirlo desde ahora a las autoridades fascistas, para hacer sentir la voz de este movimiento de masas en el país.

Esta tarea, que es de todo el exilio, lo es en primer lugar de cada militante del partido que se encuentra en el exterior.

3.— Un partido que crezca en número y en influencia

La tarea de dar un salto adelante en el rol de nuestro partido en la dirección del movimiento está estrechamente ligada a la de su crecimiento numérico. Está claro para todos que no es esta tampoco una cuestión que dependa de la mera voluntad. Ella es en primer lugar el resultado de la aplicación paciente y diaria de nuestra política, de la eficacia de nuestra propaganda, de que la justeza de nuestra línea se vaya haciendo cada vez más evidente, etc. Pero no es nuevamente a estos factores (que podemos llamar objetivos) del crecimiento a los que queremos hacer referencia. Hablamos aquí sobre todo de la tarea del crecimiento como tal, del esfuerzo diario de cada militante, de cada organismo por hacer fructificar en nuevas adhesiones la influencia objetiva que nuestra línea y nuestra presencia nos dan. En resumen, hablamos de la tarea del reclutamiento.

Es este un de los aspectos de la política de un partido obrero que ha estado más ausente de nuestra práctica partidaria en el exterior. Se trata de una deficiencia no despreciable, que es producto sobre todo de una concepción errónea del trabajo del partido en el exilio, superada desde el punto de vista de las definiciones pero no aún en la práctica. Se trata de los retardos sufridos en la construcción partidaria en el primer año después del golpe cuando se entregó la orientación de no construir partido en el exterior. Hoy, alterada en 180° esa orientación, la tarea de crecer, de crecer con audacia, de atraer a partir de nuestras tareas a chilenos que se encuentren en el exterior, de abrir el partido, sacándolo del círculo cerrado de nuestras propias filas para hacerlo instrumento de masas: este es el gran objetivo nuestro de crecimiento

en esta etapa. Por cierto, no se trata aquí de desnaturalizar nuestro carácter de partido obrero o de terminar con el período de premilitancia de un año que es condición natural para conocer nuestra organización y para poder aprender a integrarse a sus tareas plenamente. De lo que se trata es de *crecer hoy* cuando es necesario multiplicar nuestra influencia, de no poner cortapisas inútiles o trabas sectarias a quienes se identifiquen con nuestra política, de confiar plenamente en la solidez de nuestra línea y de nuestra dirección que, más allá de cualquier limitación formal, son la verdadera garantía de la orientación política y de clase de nuestro partido.

En este sentido, es de Lenin la idea que la militancia revolucionaria, siempre contenida en última instancia en los marcos de aquellos sectores más avanzados y concientes de la clase obrera y del pueblo, no es una cuestión que pueda ser planteado en abstracto y que su extensión depende de las condiciones históricas concretas. En modo específico, la ampliación del partido con la mayor audacia se transforma en cuestión central cuando el problema de la dirección del movimiento está puesto en el centro, es decir, cuando es necesario ampliar la capacidad subjetiva del movimiento. El Lenin que en 1903 ponía en guardia contra cualquier interpretación amplia del concepto de militante es radicalmente diverso al que en 1905, en el artículo “Nuevas fuerzas y Nuevas Tareas” llamaba a ampliar en gran medida toda clase de organizaciones del partido para que este pudiera ir al compás con que avanzaba el movimiento revolucionario popular. Y agregaba que de no lograrlo, el Partido debía renunciar, como mera pretensión al objetivo de jugar un papel de vanguardia. Se trata a nuestro juicio de una enseñanza práctica de Lenin que tiene en nuestra situación concreta, validez plena.

4.— Un partido con renovada capacidad de dirección

La tarea de construir nuestro Mapu OC de masas plantea grandes desafíos de dirección a nuestro partido. La multiplicación de nuestras responsabilidades hacen necesario también elevar grandemente nuestra capacidad de dirigir el movimiento en su conjunto y el partido en particular.

En este terreno, la CEX ha identificado los principales instrumentos de dirección del partido en el exterior, partiendo de la base de los avances significativos que ha habido en este terreno en estos años.

— Fortalecimiento de la capacidad de dirección de la misma Comisión Exterior del partido, avanzando en sus métodos de trabajo colectivo y de elaboración política.

— Incorporación cada vez más plena de todos los miembros del Comité Central en el exterior a la reflexión y a la discusión sobre los principales problemas y tareas de nuestro partido.

— Fortalecimiento en todos los países del Comité Local como la columna verte-

bral colectiva en que asienta todo el trabajo partidario en el exterior.

— Especial atención hacia una política de cuadros que parta con la necesidad de dar una perspectiva personal de militancia a cada miembro del partido, que acentúe la preocupación por su educación política en nuestra línea y en nuestra ideología.

— Impulso decidido de nuestra prensa partidaria a partir de la experiencia positiva acumulada a nivel central y local en estos años.

— Preocupación constante por el trabajo de cada célula, por su funcionamiento regular y organizado de modo que en ella pueda basarse de manera efectiva el gran esfuerzo que el partido tiene que hacer para acrecentar su influencia política y de masas.

5.— Un partido renovado en su capacidad de discusión democrática

La última gran tarea planteada es la necesidad de impulsar con la mayor energía la discusión y el desarrollo democrático del partido. El aspecto principal de esta tarea tiene que ver con la ampliación de la capacidad de dirección a que ya hacíamos referencia y que, en este punto concreto, tiene su expresión principal en el fortalecimiento de la organización celular y del comité local como núcleos en torno a los que se desarrolla progresivamente la democracia partidaria en un partido que, como el nuestro, se ha visto obligado a restringirla para poder enfrentar la clandestinidad y el exilio. No se trata ciertamente de limitar sólo a las células y al comité local la democracia partidaria. Esta debe expresarse cada vez más plenamente en la crítica franca y abierta en los organismos regulares, en el derecho de cada militante a expresar en éstos libremente su opinión y a hacerla llegar a los organismos de dirección, en la obligación de estos de considerarla y responderla: en una palabra, en la plena expresión de los derechos permanentes de los militantes en una organización basada en el centralismo democrático. A lo que hacemos referencia es a la necesidad que ve la dirección de abrir en el futuro cercano a los comités locales y a todas las células la posibilidad de participar más ampliamente en la discusión y en la decisión de los problemas más importantes que enfrenta el Partido en el exterior. Se trata de un paso adelante para el que el partido está plenamente preparado aún en las difíciles condiciones que vive en el exterior y que permitirá acrecentar su prestigio y su solidez orgánica.

Enormes son los desafíos que están puestos delante de nuestro partido en Chile y en el exterior. El principal es la construcción de nuestro partido de masas para la democracia y el socialismo que nuestra revolución antifascista necesita.

Se trata de una tarea que cada militante debe hacer suya.

Buscando cumplirla con su trabajo diario y abnegado, nuestro partido celebrará dignamente su décimo aniversario.

ACTIVIDAD PARTIDARIA

CONMEMORAN SACRIFICIO HEROICO DE ALLENDE, EN LA HABANA

El pueblo de Cuba conmemoró en La Habana el 5^o aniversario de la muerte en combate del Presidente Salvador Allende, en un acto celebrado en el Teatro Carlos Marx de esa ciudad.

La ceremonia fué organizada por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y asistió en representación de la Izquierda chilena el Cro. Ismael Llona, miembro del C.C. del MAPU O.C.

* * *

REUNION DE LA COMISION EXTERIOR DEL MAPU OC

A fines de Octubre se reunió en La Habana, Cuba, la Comisión Exterior del Partido, presidida por el compañero Secretario General, Jaime Gazmuri, y con asistencia de todos los miembros de la CEX, que encabeza en Encargado Exterior, José Miguel Insulza.

* * *

SEMINARIO EN ROTTERDAM

Entre el 13 y el 15 de noviembre se realizó en la ciudad de Rotterdam, Holanda, un Seminario sobre el tema "Perspectivas del Estado de Derecho en Chile", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Rotterdam. Tomó parte en este Seminario el compañero Jaime Estevez, miembro del C.C. del Partido.

* * *

CONFERENCIA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON CHILE

Activa participación le cupo al MAPU O.C. en la preparación y realización de la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile, celebrada en Madrid, España, del 9 al 12 de noviembre, y en el Foro Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que tuvo lugar paralelamente a la Conferencia.

Estuvieron presentes en estos eventos, ya sea en su fase preparatoria o durante su realización, el compañero Gonzalo Torres, de la Comisión Exterior de la UJD, la compañera Carmen Gloria Aguayo, y los compañeros Enrique Correa y Eduardo Rojas, del C.C.

Asistió también a la Conferencia el Secretario General, Jaime Gazmuri.

* * *



CONFERENCIA DE MADRID. En la foto, entre otros, Jaime Gazmuri, Manuel Alegre, del P.S.P. y Marcelino Jaen, representante del parlamento panameño.

* * *

SEMINARIO EN LA HAYA

Organizado por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, se realizó el Seminario sobre el tema La Política Económica de la Junta Militar y las Perspectivas de una Política Económica Democrática para Chile. El Seminario tuvo lugar entre el 13 y el 16 de diciembre y asistió el compañero Jaime Estevez, miembro del C.C.

* * *

JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA EN ROMA

El 24 y 25 de noviembre tuvieron lugar en Roma un conjunto de actividades internacionales denominadas Jornadas de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, organizadas en conjunto por el Partido Comunista de Uruguay y el Mapu Obrero y Campesino.

Durante las Jornadas se realizó una mesa redonda con participación de representantes del CAFRA (Comité Antifascista y Contra la Represión en Argentina), del MIAS (Movimiento Italo-Argentino de Solidaridad), del Comité de Roma de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo, del Comité Italia-Chile, de la Oficina de Chile Democrático, del PC de Uruguay y del Mapu O.C. Participaron en el debate el compañero Benjamín Teplizky, Secretario Ejecutivo de Chile Democrático y el Encargado Exterior del Partido, José Miguel Insulza.

La Jornadas tuvieron lugar en locales de la Iglesia Valdese, que se ha destacado en Italia por su permanente solidaridad con nuestro pueblo, e incluyeron proyecciones cinematográficas, un recital poético y actos artísticos con música popular latinoamericana.



José Miguel Insulza interviene en las Jornadas de Solidaridad con A. Latina. En la foto, representantes uruguayos y argentinos, y el moderador Ettore Massina, periodista italiano.

* * *

REPRESENTANTE DE LA UJD EN POLONIA

A principios de diciembre visitó Varsovia, Polonia, el Cro. Jorge Arellano, de la Comisión Exterior de la UJD. El dirigente juvenil sostuvo entrevistas con miembros de la Comisión Internacional de la Federación de Uniones de la Juventud Socialista, de ese país.

* * *

UJD EN CONGRESO JUVENIL EN YUGOSLAVIA

El compañero Eugenio Córdova, miembro de la Comisión Exterior de la UJD asistió al X Congreso de la Unión de la Juventud Socialista de Yugoslavia, celebrado en Belgrado del 13 al 15 de diciembre.

* * *

DELEGACION DE LA UJD VISITA HUNGRÍA

Una delegación de la UJD encabezada por su Encargado Exterior, Fernando Martínez, visitó Budapest a fines de diciembre. La delegación sostuvo encuentros con miembros del Buró y de la Comisión de América Latina de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y con la Dirección de la KISZ (Juventud Comunista de Hungría).

SOLIDARIDAD

Conferencia Mundial de Solidaridad en Madrid

LA LIBERACION DE CHILE: UNA TAREA QUE NO CESA PARA LOS PUEBLOS DEL MUNDO

Horacio Silva

La condena unánime al régimen de Pinochet, el llamado a la unidad de todas las fuerzas que luchan por la democracia y un plan de acciones concretas para la solidaridad internacional, son los elementos centrales de un balance de la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile, realizada en Madrid del 9 al 12 de noviembre.

La Conferencia asumió desde el primer instante la imponente medida que le otorgaba la presencia de más de 350 delegados oficiales, venidos desde 70 países de los cinco continentes, en representación del más vasto número de sistemas sociales y políticos, ideologías y organismos de masas de todo tipo.

El retiro de una de las fuerzas patrocinantes — la Unión de Centro Democrático (UCD) española — no pasó más allá de constituir una sombra, superada en la misma imponente sesión inaugural. En efecto, la Conferencia se abrió con la presencia en el estrado de un arco tan amplio como el representado por Enrique Tierno Galván, Presidente del PSOE; Santiago Carrillo, Secretario del P.C.E.; Dario Valori, Vicepresidente del Senado Italiano; Ahmed Hussain Al Samarrag, Embajador de Irak en Madrid; Cristián Bisquet, representante de la Unión de Jóvenes Democratacristianos de América Latina; Ingrid Weding, de la Confederación Sindical Nórdica; Romesh Shandra, del Consejo Mundial de la Paz; Robert Krieps, Ministro de Justicia de Luxemburgo; y Joaquín Ruíz Jiménez, Pdte. de Justicia y Paz, entre otros.

Este, sin duda el evento de solidaridad con representatividad más extensa de cuantos se han realizado, consiguió expresar el multifacético movimiento de solidaridad con nuestro pueblo que lucha activamente en todos los rincones del mundo. Quizás por eso el retiro de UCD el día anterior a la inauguración, luego de haber participado activamente en su preparación por más de tres meses, provocó tanta sorpresa. En el comunicado que la justifica, el partido de gobierno español manifiesta tardíamente su imposibilidad de participar en un evento en que no esté representada la DC chilena, y al cual asistan masivamente representaciones de los países socialis-

tas. Las razones, calificadas como “vagas justificaciones sin efecto alguno” por el propio diario El País, conocidamente ligado a la UCD, no causaron más efecto que la perentoria reafirmación de la voluntad solidaria del conjunto de fuerzas españolas representadas (desde Obispos a dirigentes sindicales y artistas) y, por el contrario, alimentaron la sospecha de que las razones de UCD más que motivos, eran objetivos a cumplirse, es decir, un intento por asignar a la Conferencia la falsa imagen de una reunión limitada al campo del marxismo. La conducta posterior de algunos órganos de prensa parece confirmar esa tendencia, a pesar de que la lectura del contenido real de las informaciones permite formarse una idea de amplitud exactamente contraria a los titulares. Algo similar ocurrió en Chile con las informaciones del diario “El Mercurio”, el cual titulado “Solo marxistas en Conferencia contra Chile” habla en seguida de 600 delegados de 50 países y se ve obligado a referir nombres de personalidades de todas las tendencias. La participación activa de las decenas de delegados socialdemócratas, liberales, católicos e independientes, expresada finalmente en la lectura del “Acta de Madrid por la Libertad de Chile”, hecha por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Iniesta, terminó por poner las cosas en su lugar y desvirtuar la mezquina y forzada imagen que se pretendió dar del gigantesco movimiento de solidaridad que animan millones de personas en todo el mundo. Por cierto, la diversidad ideológica y política de la pluralidad de fuerzas que integran la solidaridad — y que se mueven y responden además a circunstancias políticas de nivel internacional — generan un debate que expresa matices y puntos de vista, lo que queda sin embargo en claro, es que la causa democrática chilena es un elemento capaz de unificar esta pluralidad, de lograr el máximo consenso en el repudio a Pinochet, en el acuerdo de mantener activo el movimiento de solidaridad y en el anhelo general de que la unidad de los demócratas chilenos se exprese activamente en el menor plazo.

Reflexión y diálogo

La conferencia se articuló en sesiones plenarias, donde se dió tratamiento a temas generales, se recibieron los saludos de las delegaciones y se adoptaron los acuerdos del conjunto, y en mesas redondas destinadas a la reflexión y el debate sobre aspectos particulares de la situación chilena. De este modo se desarrollaron tres mesas, una destinada al análisis de las cuestiones culturales, otra que reunió a los dirigentes sindicales y una tercera de juristas y representantes políticos.

Paralelamente, se desarrolló un Foro Mundial de la Juventud, tan amplio como la propia Conferencia y al cual asistieron también delegaciones de todo el mundo, y, por otra parte, un gran número de actividades anexas, que incluyeron una exposición de arpilleras, proyección de películas sobre Chile, una muestra internacional de libros referidos al caso chileno, una muestra de afiches e insignias, representaciones teatrales, un concierto de música popular y folklórica, y actos de masas organizados por el movimiento popular español.

Mesas redondas

El poeta soviético Eugeni Evtushenko abrió los debates en la reunión destinada a estudiar los problemas de la cultura bajo el régimen de Pinochet. Los numerosos oradores del debate coincidieron en reafirmar que era un deber impostergable de la conciencia de la humanidad que Chile recuperara su patrimonio cultural avasallado por el fascismo. Las sesiones fueron presididos por un grupo de intelectuales entre los que se encontraba Juan José Rodríguez, representante de Justicia y Paz; Rodolfo Reyes, Director del Ballet Contemporáneo de México; el Doctor Manfred Kossok, Director del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Leipzig y Roberto Sebastian Matta, el célebre pintor chileno. Este último entregó el informe central sobre la situación cultural chilena.

Durante el desarrollo del debate se presentaron numerosas ponencias entre las que destaca la proposición de realizar un Congreso Internacional de Intelectuales por Chile, que tendría como sede Polonia. Este sería en mayo del año próximo. También se propuso la idea de constituir un organismo destinado a coordinar la actividad cultural de los artistas chilenos del interior y del exterior del país.

A lo largo de la reunión el recuerdo y la presencia intangible del poeta Pablo Neruda, del cantante Víctor Jara, y de los caídos en defensa de la libertad en nuestro país, otorgó a los debates una trascendencia y profundidad notables. La mesa redonda fué seguida atentamente por la viuda del Presidente Allende, Hortencia Bussi, la actriz Geraldine Chaplin, las esposas de Pablo Picasso y David Alfaro Siqueiros, el pintor Osvaldo Guayasamín y otros intelectuales.

En la mesa redonda de juristas y políticos el dirigente chileno Luis Maira entregó un informe sobre el proyecto del régimen fascista de imponer una nueva constitución en el país y en general sobre sus planes de institucionalización. Luego describió la perspectiva política de las fuerzas democráticas, señalando los principales puntos en los que la Unidad Popular asienta su proyecto institucional. En la mesa intervinieron, entre otros, el ex senador colombiano Apolinar Díaz Callejas y el distinguido jurista español Joaquín Ruiz Gimenez, quienes hicieron una vehemente denuncia de las aberraciones jurídicas que contiene el proyecto de institucionalización de la dictadura.

En la reunión también estuvo presente el ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogado Eugenio Velasco Letelier, quien señaló "más allá de las discrepancias que tuvimos en el pasado o que tengamos ahora, mi conciencia me obliga defender los derechos del pueblo chileno, violados sistemáticamente por el actual gobierno. En esa defensa, mi vida ha corrido peligro, y por ello también fuí expulsado del país. He venido especialmente desde California, donde resido, especialmente para participar en esta Conferencia y aportar en la construcción del futuro de mi Patria".

La Mesa Redonda de dirigentes sindicales fue presidida por Serafín Aliaga, de Comisiones Obreras y Manuel Simón de la UGT, las dos agrupaciones sindicales de mayor importancia en España; También asistieron Mario Navarro, Luis Meneses

y Eduardo Rojas, máximos dirigentes del Comité Exterior de la CUT. Humberto Elgueta, antiguo dirigente sindical chileno, dió cuenta de la grave situación que atraviesa el movimiento sindical.

La mayor atención de la mesa redonda sindical estuvo centrada en la participación del dirigente Juan Araya, quien viajó especialmente desde Chile para estar presente en esta Conferencia Mundial. Su intervención estuvo relacionada directamente con la represión desatada por la dictadura contra siete Federaciones y Confederaciones sindicales que agrupan a más de medio millón de trabajadores. "Mientras leíamos el decreto que nos ilegalizaba — señaló el dirigente — veíamos como desmantelaban simultáneamente nuestros locales. La respuesta de nuestros organismos fué de que no nos considerábamos ilegalizados y que no nos disolvíamos. Nos amenazaron con cinco años de cárcel. No tuvimos miedo y estuvimos dispuestos a enfrentarlos, pero no se atrevieron a reprimirnos directamente". El dirigente se refirió en seguida a la farsa electoral montada por el gobierno en los sindicatos. "Primero — dijo — el gobierno pidió a los industriales que pasaran una lista de todos los trabajadores, incluyendo una nómina de diez personas de confianza. En seguida llamaron a elecciones urgentes. Las elecciones fueron anunciadas un viernes por la tarde y celebradas el martes siguiente en la mañana".

La mesa concluyó con numerosas proposiciones tendientes a apoyar el boicot comercial contra los monopolios y a apoyar la existencia y el funcionamiento de las organizaciones sindicales en Chile.

Actividades paralelas a la Conferencia

Representantes de 80 organizaciones juveniles y estudiantiles de 48 países y de 13 organizaciones de la juventud participaron en el Foro Mundial de la Juventud y los Estudiantes celebrado en los mismos recintos de la Conferencia. El Foro Juvenil realizó un detallado análisis de la situación educacional chilena, de la labor destructora de la Junta en el terreno cultural, y de la crisis económica, social y moral en que el fascismo ha sumido al país. El Foro Juvenil condenó explícitamente al imperialismo norteamericano, definido como "el principal sostén del fascismo", y acordó medidas para apoyar desde el exterior el combativo movimiento estudiantil chileno.

Decenas de libros, impresos en las más variadas lenguas, constituyeron una muestra editorial expuesta en el Hall de acceso a la Sala de Plenarios de la Conferencia. La muestra fue un reflejo de la intensa reflexión sobre el caso chileno desarrollada en todo el mundo y recogió también los documentos y principales publicaciones de los partidos populares chilenos, en Chile como en el exterior. En el mismo recinto se montó una exposición de las ya célebres "arpilleras", bordadas por familiares de presos políticos y desaparecidos, que constituyeron un atractivo de especial interés para los órganos de prensa que cubrían la Conferencia. Junto a las arpilleras se veían muestras artesanales, afiches, insignias y material de denuncia a la dictadura chilena producido en todo el mundo.

Ya sea en las mesas redondas o en locales adyacentes al lugar de la Conferencia fueron proyectadas películas y documentales sobre Chile, así como también algunas piezas de teatro, entre las que destacó la obra “Confieso que he vivido”, basada en la autobiografía del poeta Pablo Neruda.

En el contexto de la Conferencia fué inaugurada también la filial española del Museo de la Resistencia Salvador Allende, iniciativa de nivel mundial constituida por obras donadas por pintores y escultores que solidarizan con Chile. La muestra exhibida en Madrid consta de más de 220 obras de los más célebres pintores de la península. La muestra no tendrá un lugar permanente de exhibición sino será una exposición itinerante, recorriendo todas las regiones del país, con la perspectiva de integrarse posteriormente al gran museo de la solidaridad que reuna todas las obras de los artistas del mundo con Chile.

En la inauguración fué presentado también un libro de factura especialísima donado al Museo por la Municipalidad de Florencia. El libro, de proporciones colosales, (55 x 70 cm. es la dimensión de cada hoja) es la primera traducción de La Araucana al italiano, realizada por el Profesor Ignacio Delogu, y contiene ilustraciones especialmente hechas para el libro por el pintor Sebastián Matta. Obreros florentinos fabricaron especialmente el papel para la edición, que consta solo de 100 ejemplares firmados.

Las actividades artísticas en el marco de la Conferencia culminaron con un concierto ofrecido por los grupos Inti-Illimani y Quilapayún, junto a Angel e Isabel Parra, Ana Belén y otros artistas.

El mundo por la Libertad e Chile

El innumerable aflujo de adhesiones recibidas en la Conferencia impide transcribir equilibradamente la enorme gama de sectores que quisieron estar presentes en la cita por la libertad de Chile. Como una muestra basta citar las adhesiones del Presidente de la República Italiana; Sandro Pertini, de Willy Brandt, Presidente de la Internacional Socialista; de la totalidad de Secretarios Generales y Presidentes de los partidos políticos democráticos de Italia, Francia, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Finlandia, entre otros; de dirigentes del máximo nivel político, sindical y gubernamental de la URSS, Bulgaria, Hungría, RDA, Cuba; de decenas de dirigentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Jamaica y Venezuela; de Edward Kennedy, Abourezk y otros diez representantes estadounidenses; de Linus Pauling y George Wald, premios Nobel de Ciencias; de dirigentes máximos de Angola, Argelia, Etiopía, Guinea, Guinea Bissau, Irak, Madagascar, Yemen Democrático, Mozambique, India y Australia; en fin, de decenas de otros países y organizaciones como el Consejo Mundial de la Paz, el Congreso Nacional Africano, la Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia y Africa (OSPAA), la Orga-

nización Internacional de Periodistas, la IUSY, y muchas otras.

En representación del movimiento popular y democrático chileno estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo de Chile Democrático Benjamín Teplizky; la Sra. Hortencia Bussi de Allende; Anselmo Sule, Presidente del Partido Radical; Jaime Gazmuri, Secretario General del MAPU O.C.; Carlos Altamirano, Secretario General del P.S. de Chile; Luis Corvalán, Secretario General del P.C.Ch.; Luis Maira, Encargado Exterior de la I.C.; y el dirigente del MIR, Roberto Moreno.

Acta de Madrid por la Libertad de Chile

La solemne sesión de clausura de la Conferencia constituyó un momento en que la vitalidad del movimiento de solidaridad con Chile se expresó con gran intensidad emotiva.

El Secretario Ejecutivo de la Unidad Popular Exterior, Clodomiro Almeyda, dirigió un vibrante discurso a la asamblea señalando “lo que hacéis por nosotros está presente cada minuto, cada hora, en las tareas cotidianas de la Resistencia. Nuestro pueblo ha contraído una deuda infinita con los pueblos del mundo, prosiguió. La derrota de Pinochet depende de nosotros, los chilenos, de nuestra lucha y de nuestra unidad, pero la solidaridad es un factor de apoyo indispensable”.

El Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Alberto Iniesta, señaló con claridad el carácter del evento al señalar “Esta Conferencia ha significado como el corazón, como el signo visible de todos los sentimientos humanitarios que laten en todos los hombres de buena voluntad del mundo, de diversas razas, de diversas lenguas y culturas, de diversas concepciones, religiosas o no, pero unidos en el respeto, en el amor, en el servicio a todos los hombres, especialmente a los más oprimidos, a los más perseguidos, a los más pisoteados”. “Quien obra como Pinochet, señaló, no obra como cristiano y no puede llamarse cristiano”. “Desde esta Conferencia Mundial expresamos nuestra repulsa del régimen del Gral Pinochet (...) y nos solidarizamos con el dolor, con la lucha y también con la esperanza, con la gigantesca esperanza que el pueblo chileno manifiesta en su futuro, con la fortaleza con la cual lucha para alcanzar pronto un Chile donde haya justicia, libertad y solidaridad”.

La Conferencia culminó con la proclamación de un documento titulado “Acta de Madrid por la Libertad de Chile” la que fué leída por Monseñor Iniesta. Junto a ella se anunció el envío de una delegación internacional, en representación de la Conferencia, a la Organización de las Naciones Unidas, y fué designada otra delegación para que viaje al país a informar al pueblo de Chile del desarrollo y las conclusiones de la Conferencia Mundial.

* * *